

Neiva, 25 de julio de 2024

Señores

Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

ixcursoformacionji@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Recurso de reposición

Diego Mauricio Cubides Barrero identificado con C.C. No. 1.072.648.521 de Chía (Cundinamarca), **interpongo recurso de reposición** contra la resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024 “*por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX curso de Formación Judicial Inicial*”, en los términos del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, y atendiendo que el puntaje obtenido parcialmente es inferior a 800 puntos, conforme los siguientes argumentos:

CUESTIÓN PRELIMINAR

Respetuosamente le solicito a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, que resuelva este recurso en acto administrativo de manera individual, así mismo, que aborde todos y cada uno de mis planteamientos de fondo, esto acorde a la jurisprudencia contencioso administrativa expuesta por el Consejo de Estado que en el caso Mejía Álvarez contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro, radicado 11001-03-15-000-2023-00951-00, planteó como vulneración al derecho de petición el no recibir respuesta completa y oportuna a las peticiones formuladas en los recursos de reposición cuando la entidad no responda de manera completa, clara, precisa y de fondo todos los puntos expuestos en el documento en el que se plantean las inconformidades con el acto administrativo que consolida los puntajes obtenidos.

En efecto, el Consejo de Estado consideró en la decisión aducida que resolver, de manera colectiva, los diferentes recursos interpuestos, sin atender ni abordar los temas concretos de las reclamaciones individuales, se entiende como falta de estudio de las controversias planteadas por el recurrente. Por ende, dicha respuesta no resuelve de fondo la petición efectuada en el recurso.

Anticipando un escenario probable por todo lo ocurrido en estos meses con la Escuela Judicial y el operador (Unión Temporal Formación Judicial 2019) y en aras de evitar la vulneración de mis derechos fundamentales, solicito que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” le dé respuesta individual completa, clara, precisa y de fondo a todos mis argumentos, y a todas mis objeciones y peticiones en caso de negarse a la prosperidad de las mismas parcial o totalmente.

Contrario sensu, le pido a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que, en aquellos casos en los que, por los errores del instrumento de evaluación, el incumplimiento de las reglas del curso concurso y todo el inadecuado diseño del curso de formación decida, de manera justa y sensata, revocar el acto administrativo y corregir los resultados consolidados, lo haga de manera colectiva para que me favorezca a mí y a todos los discentes perjudicados por los cuestionables resultados de la fase de formación atribuibles a múltiples razones y causas imputables a la Escuela Judicial y al operador (Unión Temporal Formación Judicial 2019) y no a los discentes.

DE LOS ARGUMENTOS Y OBJECIONES

1. Argumento Primero: Incumplimiento del modelo pedagógico del IX Curso de Formación Judicial

Este primer argumento, del cual amablemente espero se me otorgue una respuesta individual al momento de expedir la resolución que resuelva el presente recurso de reposición tiene como propósito que ya sea mediante acto administrativo individual o colectivo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla advierta los graves incumplimientos de los acuerdos rectores y proceda a la corrección de la actuación administrativa anulando la totalidad de la Fase General del IX Curso de Formación Judicial inicial y provea su repetición *-esta vez-* en cumplimiento cabal de las normas que lo rigen.

Es claro que existen irregularidades insuperables en el desarrollo pedagógico del presente IX Curso de Formación Judicial, defectos insaneables que principalmente se evidencian en el incumplimiento de la formación denominada *Blended Learning*, la cual nunca ocurrió, sino que en su lugar y sin la existencia del acto administrativo, modificadorio se optó por impartir una formación *e-learning* por parte del formador, de oficio y sin justificación alguna. Para explicar el punto de censura debe recordarse lo siguiente:

La Corte Constitucional en su Sentencia SU 067 del 2022, estableció que:

*“Los principios constitucionales del mérito y la carrera administrativa resultan igualmente aplicables al Poder Judicial. El texto superior dispuso la creación de un sistema especial de carrera, y encomendó su administración al Consejo Superior de la Judicatura. En cumplimiento de tal encargo, corresponde a dicha entidad **expedir el acuerdo de convocatoria, norma obligatoria que se erige en el referente normativo primordial de la actuación administrativa.** De tal suerte, las actuaciones que se realicen en el concurso deben someterse de manera escrupulosa a los estrictos términos que hayan sido previstos en la convocatoria, so pena de infringir valiosos principios constitucionales como el **debido proceso, la igualdad y la buena fe.**” (énfasis fuera del texto)*

El Acuerdo **PCSJA18-11077 16 de agosto de 2018** “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”, norma rectora de la presente convocatoria 27, señala lo siguiente, respecto al curso de formación judicial:

“Fase III. Curso de Formación Judicial Inicial Los aspirantes que aprueben la prueba de conocimientos y de aptitudes y que reúnan los requisitos para el cargo de aspiración, serán convocados a través de la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a participar en la Fase III - Curso de Formación Judicial Inicial, que estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Para tal efecto deberán inscribirse obligatoriamente, en la fecha, lugar y hora que se indique en la citación. La no inscripción conllevará el retiro del proceso de selección del o de la aspirante.

Modalidad: El curso concurso se impartirá en la modalidad b-learning, mediante actividades presenciales y virtuales, según el cronograma de actividades que se dará conocer a los/las participantes, en la sede o sedes que determine esta Corporación, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, el número de concursantes y sus lugares de inscripción.” (énfasis fuera del texto)

Al respecto, se debe precisar que es el *Blended Learning (B-Learning)* en aras, de brindar mayor claridad, con ocasión al desarrollo del curso de formación. Esto en el entendido, que conforme el acuerdo lo señala, será la modalidad para utilizar en el IX Curso de Formación Judicial. En ese sentido el autor Luis Alcides Parra Herrera¹, precisa:

“Aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial: “which combines face-to-face and virtual teaching” (Coaten, 20032; Marsh, 20033). Paralelamente el “B-Learning” tomado de “Blended Learning”, término inglés que se traduce como “Formación Combinada” o “Aprendizaje Mixto”; significa también “escenarios múltiples” donde se combinan actividades presenciales, sincrónicas y de e-learning (aprendizaje electrónico) como una modalidad integrada de aprendizaje. A partir de esto la vieja formación virtual se ha transformado en un proceso de aprendizaje centrado en los estudiantes con didácticas y procesos de enseñanza desarrollados por profesores que los orientan desde escenarios presenciales y permiten un proceso social de compartir una época de la vida con personas con los mismos intereses intelectuales y profesionales, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.” (énfasis fuera del texto)

¹ Blended Learning, La Nueva Formación En Educación Superior- Luis Alcides Parra Herrera, página 2-8.

Lo anterior, aclara que el *Blended Learning*, difiere del modelo de educación virtual, en el sentido que el primero incluye una vocación mixta, de actividades presenciales con aprovechamiento de igual manera de actividades electrónicas y el segundo, es exclusivo en la utilización de medios tecnológicos y electrónicos, como el motor en el aprendizaje. Así las cosas, es claro que conforme el Acuerdo de la convocatoria, el curso de formación se realizará en una modalidad mixta, mezclando actividades **presenciales**, con actividades **virtuales** y no en exclusividad de alguno de los 2 escenarios. Esto es tal cual lo que pretende el acuerdo, pues como se observa, en el punto seguido a la modalidad, se indica:

“La asistencia al 100% de las sesiones presenciales programadas en ambas sub fases del concurso es obligatoria. La inasistencia por causas justificadas por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente probada, no podrá superar el 20%. La causa de la inasistencia deberá ser acreditada dentro de los cinco (5) días siguientes a ésta.”
(énfasis fuera del texto)

El acuerdo habla de sesiones presenciales en ambas sub fases del concurso, es decir tanto en la general como en la especializada, por lo que no se puede interpretar de ninguna manera diferente a esta. El Consejo Superior de la Judicatura, procedió a detallar de manera expresa, la modalidad a desarrollarse el curso y de esta manera, indicó la necesidad de la asistencia a las sesiones presenciales, pues por lo visto, son obligatorias y a la vez, necesarias dentro de este tipo de educación mixta.

Y así mismo lo entendió el ACUERDO PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019, *“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”* pues en este se especifican, varias circunstancias en torno al desarrollo de las actividades, que cordialmente, procederé a traer a colación:

1.1 El Curso de Formación, se realizará en una concepción de *B Learning*: El acuerdo del curso de formación, en sus páginas 2 y 3, así lo señala:

*“A su vez, el Plan de Formación de la Rama Judicial se basa en la construcción colectiva del conocimiento jurídico, en donde los discentes interactúan con la red de formadores, cuyo rol central es servir de facilitadores y expertos **temáticos para lograr los objetivos de aprendizaje autodirigido, desde una concepción b-learning (semipresencial)**, que permite el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje en las distintas mediaciones pedagógicas.*

El diseño curricular por competencias en modalidades blended learning de la Escuela Judicial, combina aprendizaje y evaluación de manera lógica, coherente y estructurada. Lo anterior implica que el discente esté en la capacidad de construir

habilidades y destrezas gradualmente en la medida que demuestra su evolución progresiva apoyado por distintas oportunidades de retroalimentación a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaje. En esta medida, la concepción blended learning del plan de formación de la Rama Judicial se caracteriza por:

} Permitir a los discentes aprender activamente a través de la indagación. } Estimular la reflexión crítica de los conceptos. } Abrir los espacios de aprendizaje a los ambientes individuales y colaborativos. } Ofrecer posibilidades de aprendizaje basados en las prácticas judiciales dirigidas a los discentes. } Aprovechar la evaluación formativa y sumativa como recursos de enseñanza – aprendizaje, enfocados a la práctica judicial.” (énfasis fuera del texto)

En ese sentido, existe claridad, hasta el momento de 2 puntos: La Modalidad para realizar el curso de formación, en sus subfases, será mediante la aplicación del *Blended Learning*, es decir de manera semi presencial. Los acuerdos, no difieren ni especifican la aplicación de una modalidad diferente, para alguna de las 2 etapas, pues como se puede observar, de manera clara se manifiesta que la modalidad será aplicada en el desarrollo de todo el curso de formación Judicial. Mal se interpretaría, se si creyera que la modalidad, reseñada en los acuerdos, es especial para alguna de las subfases, pues no se realizó esa aclaración en los textos referenciados. Es decir, quien dispuso la creación de los acuerdos, que para este caso fue el CSJ, no decidió determinar una aplicación exclusiva, de la modalidad *B Learning* para alguna de sus subfases. Es claro, que desde el inicio se ha detallado y se puede observar, que la única modalidad de aplicación será el *B Learning*, y así como lo refiere los acuerdos, será el modelo para el desarrollo del curso en pleno, es decir en todas sus subfases.

Esto es necesario precisarlo, porque el Acuerdo PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019, de manera incoherente, señalo la modalidad virtual, como la establecida para adelantar la subfase general. De tal manera indica:

“6.1 Programas, unidades de aprendizaje y temáticas de la subfase general Modalidad: La subfase general se desarrollará de manera virtual” (énfasis fuera del texto)

Lo anterior, es abiertamente contrario a lo establecido en el Acuerdo PCSJA18-11077 16 de agosto de 2018, quien de manera expresa señala que la Modalidad será el *B Learning* y no la modalidad virtual. Así mismo, es incongruente con el mismo Acuerdo PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019, quien indica en los puntos Introductorio y de Metodología, que se realizará mediante el sistema *B Learning*. Así las cosas, incluir una modalidad virtual, cuando el Acuerdo PCSJA18-11077 16 de agosto de 2018, no la contempla, vulnera de manera flagrante, las condiciones pactadas en el mismo, y refiere a las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 067 del 2022, en la que indica que el *acuerdo de convocatoria, norma obligatoria que se erige en el referente normativo primordial de la actuación administrativa. De tal suerte, las actuaciones que se realicen en el concurso deben*

*someterse de manera escrupulosa a los estrictos términos que hayan sido previstos en la convocatoria*²

Así las cosas, la Escuela Judicial, no podía modificar la modalidad de educación, pues está fue prevista de manera literal en el Acuerdo de la Convocatoria 27. Incluir una modalidad virtual, cuando la misma no se encontraba contemplada en el acuerdo, es vulnerar y alterar las condiciones pactadas inicialmente. Esto claramente, afecta las condiciones para todos los participantes y violenta los derechos fundamentales y los principios constitucionales como lo son el debido proceso, la igualdad y la buena fe.

La Corte Constitucional, así lo enfatiza en la reseñada Sentencia de Unificación, e indica:

*“132. Carácter vinculante del acuerdo de convocatoria. La norma en cuestión establece una regla de capital importancia para el desarrollo de los concursos de méritos, y que será decisiva para la solución del caso concreto: «[L]a convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos». La Corte ha declarado, de manera reiterada, que la convocatoria que da inicio a estas actuaciones administrativas **constituye la norma jurídica primordial para su desarrollo**^[102]. La relevancia de este acto administrativo ha llevado a este tribunal a definirlo como **«la ley del concurso»**^[103]. Lo anterior se explica en la medida en que el cumplimiento de los fines que se persiguen a través del concurso público depende de que este sea surtido con riguroso apego a las normas que hayan sido dispuestas en la aludida convocatoria, las cuales deben ceñirse en todo a la Constitución y la ley.”*

Y si se realiza una lectura integral del acuerdo PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019, se descubre que siempre fue el sentido en la aplicación del curso. Esto es claro, pues se entiende que el curso se realizará de manera progresiva, en la que se demuestre que el Discente, ha adquirido las habilidades necesarias para la ocupación del cargo. El acuerdo, habla constantemente de la *RETROALIMENTACIÓN, a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaje*³, así como un proceso de *evaluación formativa y sumativa como recursos de enseñanza – aprendizaje*. Es decir, tanto la modalidad, como la evaluación, será de manera gradual, con eventos presenciales y virtuales, y con una evaluación de carácter sumativa, no concentrada, en la búsqueda de consolidar un perfil idóneo en el discente, para el desarrollo de la práctica judicial. Lo anterior, se reitera de manera constante en el escrito del acuerdo:

*“2.7 Deberes: **Cumplir con todas las actividades académicas y evaluaciones contempladas, controles de lectura, resolución de casos, problemas y demás***

² Sentencia SU 067 del 2022, Corte Constitucional.

³ ACUERDO PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019 “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”

mediaciones pedagógicas virtuales y presenciales programadas en el curso de formación judicial inicial.

2.8 Asistir y presentar puntualmente todas las evaluaciones presenciales y virtuales de cada uno de los programas de formación que hacen parte de los planes de estudio.

2.16 Participar individualmente en las evaluaciones virtuales y/o presenciales que le corresponda cumplir, sin ayudas adicionales (por ejemplo, trabajo en grupo, ayudas de otro discente, un tercero, entre otros) a las previstas en la rúbrica o reglamentación prevista para cada actividad. La Escuela Judicial utilizará las herramientas tecnológicas de reconocimiento facial, para prevenir suplantaciones constitutivas de exclusión del curso de formación judicial inicial.” (énfasis fuera del texto)

De tal manera, es claro que el acuerdo, prevé y manifiesta, que existirán diferentes actividades académicas, y demás mediaciones pedagógicas virtuales programadas para el desarrollo normal del curso. Habla de evaluaciones presenciales y virtuales, en el entendido del marco de la convocatoria, es decir del desarrollo de un curso formativo bajo la modalidad del *B-Learning*. Por último, es claro en afirmar que las evaluaciones, -en plural siempre-, deben realizarse de manera individual, sin ayudas adicionales.

De igual manera, en el apartado de Prohibiciones indica:

“3. 2 Sustraer y/o difundir documentos que sean soporte de evaluaciones de los componentes del curso de formación judicial inicial.

3. 3 Suplantar a un discente o permitir ser suplantado en la presentación de una actividad académica presencial o virtual, incluidas las evaluaciones. Para las actividades virtuales la Escuela Judicial se apoyará en herramientas tecnológicas para detectar cualquier tipo de fraude.

3. 4 Realizar en forma colectiva trabajos o evaluaciones que deban ser realizados individualmente por el discente

3. 5 Realizar plagio en cualquier actividad académica.

3. 11 Ingresar a las actividades académicas tanto presenciales como virtuales en estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.”

Hasta este momento, no existe duda razonable, de los parámetros en el desarrollo del curso. Tanto en la modalidad, como en el sistema evaluativo, el acuerdo es claro en afirmar que se realizará de manera progresiva, sumativa, y bajo el enfoque de distintas actividades académicas, tanto virtuales como presenciales. No se afirma sobre la existencia de una nueva prueba de conocimientos, ni la práctica de una actividad definitiva en el desarrollo del curso. Tampoco se especifica, de la aplicación de dos tipos de modalidades, para cada subfase, caso contrario, en todo el acuerdo, se reitera en diferentes ocasiones que la única modalidad aplicada, será la del *B Learning*.

Debe advertirse que el cambio de visión acaecido por causa de la Pandemia Covid-19 y la revolución tecnológica que trajo consigo no es excusa para el incumplimiento de actos administrativos como los acuerdos en mención, lo cuales gozan de la presunción de legalidad y los efectos jurídicos que solo pueden ser modificados por las vías de derecho.

Así mismo, obra la Resolución No. EJR23-337 *“Por medio de la cual se establecen las sedes para el desarrollo de las mesas introductorias y demás actividades presenciales del IX Curso de Formación Judicial Inicial”* proferida el 8 de septiembre de 2023 por la Escuela Judicial y en la cual se nos pedía escoger sedes para el desarrollo de actividades presenciales bajo la modalidad *B Learning* según se transcribe del documento:

*“Por su parte, el numeral 7° del capítulo III, del artículo primero del Acuerdo PCSJA19-11400 determinó que el IX Curso de Formación Judicial Inicial se impartirá conforme al diseño curricular y modelo pedagógico de la Escuela Judicial, en la modalidad virtual y Blearning (semipresencial), por lo que **se realizarán actividades presenciales.**” (énfasis fuera del texto)*

Entonces, no tiene sentido que el Consejo Superior de la Judicatura emitiera los acuerdos para desarrollar la escogencia de jueces y magistrados con un objetivo metodológico mixto entre lo virtual y lo presencial, y el Formador al momento de materializar el curso de formación desconociera el marco normativo y educacional y no realizara ninguna actividad académica de carácter presencial, sino que por el contrario únicamente ejerciera un modelo netamente virtual tipo E-Learning y no autorizado. De allí que el incumplimiento fuera de tal gravedad que la única solución es la anulación del curso y su repetición conforme las reglas previamente planteadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

La Corte Constitucional, ha estructurado cimientos en cuanto la legalidad plena, que debe tener el Acuerdo de la Convocatoria, en el marco del desarrollo de un concurso de méritos. Así las cosas, el incumplimiento, de manera unilateral del acuerdo, genera un perjuicio irremediable al principio de legalidad y el debido proceso administrativo.

Conforme se ha expuesto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, alteró y modificó unilateralmente las condiciones pactadas en el acuerdo de la convocatoria. Esto es, cambiando las condiciones de la modalidad escogida, pues transformó la modalidad establecida del *B -Learning* a una modalidad completa de *E-Learning*, o de educación 100% virtual, incumpliendo indefectiblemente el Acuerdo general de la convocatoria y el Acuerdo Pedagógico, vulnerando gravemente el objetivo del IX Curso de Formación Judicial.

Por tanto, a efectos de claridad del presente recurso, como pretensión del primer argumento solicito:

PRETENSIÓN ARGUMENTO 1.

Reponer el contenido de la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024 “*por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX curso de Formación Judicial Inicial*” y su anexo, y en su lugar declarar la nulidad de los resultados de la subfase general por no acatar el modelo pedagógico denominado *B Learning* establecido en los Acuerdos PCSJA18-11077 16 de agosto de 2018 “*Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial*” y PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019, “*Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”*” y en su lugar IMPARTIR nuevamente la fase General del Curso de Formación Judicial bajo la modalidad *Blended Learning*.

2. Argumento Segundo: Incumplimiento del Sistema de Evaluación Académico del IX Curso de Formación Judicial

Este segundo argumento, del cual amablemente espero se me otorgue una respuesta individual al momento de expedir la resolución que resuelva el presente recurso de reposición tiene como propósito que ya sea mediante acto administrativo individual o colectivo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla advierta los graves incumplimientos y errores en el sistema de evaluación académico establecido en el Acuerdo Pedagógico y proceda a la corrección de la actuación administrativa anulando la totalidad de Evaluación de la Sub Fase General del IX Curso de Formación Judicial inicial y provea su repetición *-esta vez-* en cumplimiento cabal de las normas que lo rigen.

Es claro que existen irregularidades insuperables, en el desarrollo de la evaluación de la Fase General del IX Curso de Formación Judicial, defectos insaneables que principalmente se evidencian en que la mentada evaluación virtual optó por un examen evidentemente MEMORISTÍCO y no por evaluar las competencias y habilidades que se perseguía enseñar con el modelo pedagógico que pretendía fortalecer el desarrollo de las competencias del Saber, Saber hacer y Saber ser. Para explicar el punto de censura debe recordarse lo siguiente;

El Acuerdo Pedagógico resalta, respecto la subfase general, resalta que esta etapa *-la general-*:

“Dirigida a todos los aspirantes, está integrada por ejes temáticos y módulos de aplicación práctica, transversales a todas las especialidades, que pretenden fortalecer el desarrollo de las competencias del Saber, Saber hacer y Saber ser, dentro del perfil de un servidor judicial idóneo, capaz de trabajar en equipo, dirigir el talento humano con liderazgo asertivo, administrar los recursos físicos y tecnológicos de un despacho judicial, así como los procesos judiciales que le sean asignados mediante la aplicación de técnicas de trabajo colaborativo, que le permitan decidir con eficiencia y eficacia los litigios puestos a su consideración bajo los

principios de transparencia, probidad y altos estándares de ética judicial. (énfasis fuera del texto)

Por su parte la ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su articulado 168 dice:

Art. 168. “CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL. El curso tiene por objeto formar profesional y científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial. Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la modalidad de Curso de Formación Judicial Inicial, o contemplarse como requisito previo para el ingreso a la función judicial.”

El sentido propio del curso es formar al Discente, respecto la practica judicial, bajo las competencias del ser, saber hacer y saber ser. Toda modificación que altere ese sentido propio que regulo el legislador y que confirmó el Consejo Superior de la Judicatura, mediante la configuración de los acuerdos, perturban la esencia propia de un curso formativo, antes que eliminatorio. Pues su esencia propia es formar y no eliminar, valga la redundancia.

En el punto 4, del Acuerdo PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019, se señala:

“TIPO DE EVALUACIÓN Las evaluaciones deberán realizarse con sujeción estricta a la programación y el cronograma fijados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Con el fin de fortalecer las habilidades y técnicas requeridas por los aspirantes en el ejercicio de su función judicial; la evaluación de cada uno de los programas es sumativa, desde la parte virtual hasta la sustentación final. La evaluación sumativa mide el avance del aprendizaje y la aprehensión del conocimiento mediante la aplicación de diferentes tipos de valoraciones cuantitativas. Su finalidad básica es determinar unos resultados o asignar una calificación o puntaje al discente.” (énfasis fuera del texto)

Ahora bien, el Acuerdo Pedagógico establece en su capítulo VII el Sistema de Evaluación Académica del IX Curso de Formación Judicial, en el que dispone que la finalidad de la evaluación corresponde a establecer el cumplimiento de los objetivos del curso a nivel individual en referencia con el grupo de discentes que aspiran a un mismo tipo de cargo y con base en parámetros objetivos. Para ello el Acuerdo propone como objetivos del proceso de evaluación los siguientes:

- Comprobar la adquisición de competencias y habilidades cognoscitivas y humanas del discente en la aplicación práctica de los contenidos temáticos de los módulos de la parte general y especializada.
- Evidenciar la adquisición de competencias y habilidades del discente en la aplicación práctica de los conocimientos en la actividad judicial.

- Corroborar la adquisición de competencia del discente en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Del mismo modo, el Acuerdo Pedagógico estableció en su punto 5.1.1. las actividades objeto de evaluación de la subfase general en los siguientes términos:

- Control de lectura: Una vez culminado el programa, el discente se encuentra preparado para que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” aplique la evaluación virtual, denominada control de lectura, la cual tiene un peso de 40 puntos sobre 125 del programa.
- Análisis jurisprudencial o de casos: Esta actividad busca que el discente ponga en práctica las propuestas metodológicas aprendidas, en un determinado problema que será planteado por la Escuela Judicial. Esta actividad tiene un peso de 25 puntos sobre 125 del programa.
- Taller virtual: Esta actividad pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa. El taller virtual tiene un peso de 60 puntos sobre 125 del programa.

Quiere decir lo anterior, que la evaluación de la subfase general, sería un resultado final sumatorio de tres componentes a saber; control de lecturas, que básicamente corresponde a la corroboración de las competencias y habilidades cognitivas aprehendidas por los discentes de las lecturas obligatorias; un análisis de caso o de jurisprudencia en la que el formador plantearía un caso o problema y los discentes pusieran en práctica el conocimiento aprendido para solucionar el caso; y finalmente, un taller o capacitación intensiva de cada programa en la que se examinara la capacidad de construcción cognoscitiva del discente. Importante es aclarar que cada modalidad evaluativa es sustancialmente diferente de la otra.

Seguidamente, y para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Recuérdese la Tabla 1. Del Documento (Modificada de Sanz de Acedo)

COMPETENCIAS GENÉRICAS		
Dimensión del ser (actitudes y disposiciones)	Dimensión del saber (conocimientos)	Dimensión del hacer (capacidades y habilidades)
Se basa en la necesidad de que los/las discentes posean y desarrollen la capacidad de crítica y autocrítica, aprecien la diversidad, la multiculturalidad y los temas ambientales; se motiven por la calidad y el logro, y manifiesten en sus actuaciones un compromiso ético.	Se basa en la necesidad de que los/las discentes posean y desarrollen la capacidad de aprender a aprender, analicen y sintetizen información, adquieran conocimientos de diferentes ámbitos de estudio, y gestionen información de diversas fuentes.	Se basa en la necesidad de que los/las discentes posean y desarrollen la capacidad de aplicar el conocimiento, disponer de habilidades informáticas, adaptarse a nuevas situaciones, tomar decisiones, resolver problemas, generar nuevas ideas y trabajar de forma autónoma.

Ahora, en lo que respecta a la forma de evaluación, el Documento Maestro expone que los criterios objeto de evaluación (4.1.1.5.2.) corresponden a: control de lectura 40 puntos de 125, análisis jurisprudencial o de casos 25 puntos de 125 y taller virtual 60 puntos de 125, los cuales discrimina en los siguientes términos dispuestos en el punto (4.2.3.1.1.1.)

Control de lectura

Se realizará bajo la técnica de prueba tipo test en un cuestionario de preguntas, que se realizarían de manera presencial en la sede que seleccionaría el discente para ser aplicada en la plataforma tecnológica (en línea) en la que las competencias generales a evaluar serían las habilidades lectoras, de análisis y comprensión del discente, y específicas las establecidas en el *syllabus* de cada programa. Recuérdese que el enfoque de la evaluación no sería memorístico sino de evaluación de las competencias anteriormente descritas. Todo lo anterior dentro del marco de las lecturas obligatorias.

Análisis Jurisprudencial o de casos:

Se realizaría bajo la técnica de resolución de problema a partir de análisis jurisprudencial o planteamiento de caso que se realizaría de manera presencial en la sede que seleccionaría el discente para ser aplicada en la plataforma tecnológica (en línea) en la que las competencias generales a evaluar corresponden a la correcta aplicación del derecho a casos o problemas concretos que se le proponen al discente y específicas las establecidas en el *syllabus* de cada programa. Recuérdese que el enfoque de la evaluación no sería memorístico sino de evaluación de las competencias anteriormente descritas. Todo lo anterior dentro del marco de las lecturas obligatorias.

Taller

Se realizaría bajo la técnica de pruebas objetivas interactivas que se realizaría de manera sincrónica en sede y se aplicaría la plataforma tecnológica, en la que se incorporará la construcción de la actividad y las distintas opciones de respuesta, en la que las competencias generales a evaluar corresponden a la apropiación de los conceptos del programa y su correcta aplicación y específicas las establecidas en el *syllabus* de cada programa. Recuérdese que el enfoque de la evaluación no sería memorístico sino de evaluación de las competencias anteriormente descritas. Todo lo anterior dentro del marco de las lecturas obligatorias.

Siguiendo la línea de argumentación de la censura, el Documento Maestro también establece en su punto 5.2. dispone de herramientas de evaluación, descritas así:

Tipos de preguntas: Este tipo de actividad se caracteriza por permitir que los/las discentes lean, **analicen** y **saquen conclusiones** para luego seleccionar entre varias opciones de respuesta, con la siguiente estructura:

Enunciado: frase en forma afirmativa o propositiva que debe ser resultado de la información del contexto.

Opciones de respuesta: son las diferentes opciones proporcionadas a los/las discentes para escoger. En el caso del Ítem I, serán opciones múltiples con una sola respuesta correcta (clave: A, B, C o D), y en el caso del Ítem IV, serán opciones múltiples con múltiple respuesta de la siguiente manera:

- Si las opciones de respuesta 1 y 2 son correctas, marque A.
- Si las opciones de respuesta 2 y 3 son correctas, marque B
- Si las opciones de respuesta 3 y 4 son correctas, marque C
- Si las opciones de respuesta 2 y 4 son correctas, marque D

Existen dos (2) tipos de respuesta posible:

- a. Argumentativa: “Su propósito es el de fundamentar o sustentar un planteamiento, una conclusión, una decisión o un evento”.
- b. Propositiva: “Busca establecer una relación crítica entre eventos o perspectivas teóricas, mediante el planteamiento de alternativas de decisión o acción que le den una solución al contexto planteado”.

Emparejar elementos: Por medio de esta actividad, los/las discentes deben analizar dos columnas con información relacionada, señalando, sea por un número, una letra o por arrastre directo, los elementos de ambas columnas que considere guarden una determinada relación, conforme a los criterios previamente establecidos.

Rellenar Espacios (seleccionando de una lista): Por medio de esta actividad, los/las discentes deben completar un párrafo o varios, diseñados con espacios estratégicamente ubicados. Su selección deberá hacerse con base en una lista de palabras o frases previamente suministradas.

Rellenar espacios (arrastre): Por medio de esta actividad, los/las discentes deben completar un párrafo o varios, diseñados con espacios previamente ubicados, arrastrando la palabra o el párrafo que considere correcto hacia los espacios dispuestos para tal fin.

Análisis de videos: En esta actividad, los/las discentes visualizarán los contenidos y problemas


propuestos en videos de diferentes formatos, con el fin de responder preguntas tipo I y IV, selección múltiple, falso y verdadero formuladas por el experto temático

Preguntas de análisis de relación: Este tipo de preguntas consta de dos proposiciones, así: Una afirmación y una razón, unidas por la palabra “porque”. El/la discente debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas el/la discente debe leer toda la pregunta y señalar en su hoja de respuestas en el aplicativo virtual, la respuesta elegida, conforme al siguiente cuadro de instrucciones:

- Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, y la razón es una explicación CORRECTA de la afirmación, marque A.
- Si la afirmación y la razón son VERDADERAS, pero la razón NO es una explicación CORRECTA de la afirmación, marque B.
- Si la afirmación es VERDADERA, pero la razón es una proposición FALSA, marque C.
- Si la afirmación es FALSA, pero la razón es una proposición VERDADERA, marque D
- Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones FALSAS, marque E.

Preguntas de análisis de postulados: Tipo de preguntas o ítem (tipo AP: análisis de postulados). Constan de: Una afirmación VERDADERA (tesis) y dos postulados también VERDADEROS, identificados con POSTULADO I y POSTULADO II. El/la discente debe analizar si los postulados se deducen lógicamente de la afirmación.

Del mismo modo, a pesar de que el Documento Maestro estableciera una evaluación presencial en la sede que seleccionaría el discente para ser aplicada en la plataforma tecnológica (en línea) inexplicablemente y cambiando las reglas de juego, la Escuela Judicial el 5 de abril de 2024 emitió el siguiente comunicado:

**COMUNICADO**
IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL
05/04/2024

El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, comunica a los discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial, que la **evaluación de la Subfase General, programada para los días sábado 4 y domingo 5 de mayo de 2024, se realizará en modalidad 100% virtual, en el lugar que determine cada discente.**

Nótese como arbitrariamente y sin justificación la Escuela Judicial modificó la forma de evaluación diseñada de manera presencial en la sede escogida para aplicar el examen de la Fase General de manera virtual, pues, así como modificó la metodología del curso hizo un cambio sustancial en la aplicación del examen, lo que evidencia el desconocimiento y desacato de las normas previamente reglamentadas en el IX Curso de Formación Judicial.

Así al auscultar el marco normativo del Sistema de Evaluación Académico, que tiene como finalidad la verificación de la aprehensión de habilidades y competencias desde una perspectiva **NO MEMORÍSTICA** podemos observar que la mayoría de las preguntas censuradas en este recurso no cumplen con los criterios propuestos y su construcción y claves de respuestas desconocen los acuerdos rectores y el mismo Documentos Maestro

Por tanto, a efectos de claridad del presente recurso, como pretensión del segundo argumento solicito:

PRETENSIÓN ARGUMENTO 2.

Reponer el contenido de la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024 *“por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX curso de Formación Judicial Inicial”* y su anexo, y en su lugar declarar la nulidad de los resultados de la subfase general por no acatar el Sistema de Evaluación Académico establecido en el Acuerdo PCSJA19-11400 19 de septiembre de 2019, *“Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”* así como en el Documento Maestro y en su lugar DISEÑAR una evaluación que cumpla con los estándares reglados, sin preguntas y claves de respuestas memorísticas o literales de la bibliografía presentada, en uso de las herramientas evaluativas acordadas y con el objetivo de evaluar las competencias y habilidades adquiridas en el Curso de Formación Judicial, y finalmente practicado de manera presencial en la sede escogida por cada discente.

3. Argumento Tercero: Defectos en las preguntas de la evaluación de la Fase General del IX Curso de Formación Judicial

Este tercer argumento, del cual amablemente espero se me otorgue una respuesta individual al momento de expedir la resolución que resuelva el presente recurso de reposición tiene como propósito que ya sea mediante acto administrativo individual o colectivo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla advierta los defectos en las preguntas de la evaluación de la Fase General del IX Curso de Formación Judicial según los criterios sustentados individualmente.

Así, para claridad del suscrito, del formador y eventualmente en sede judicial he designado el nombre a las preguntas según su orden numérico de acuerdo al orden cronológico de evaluación de cada programa iniciando por la P1 (pregunta 1) hasta la P336 (pregunta 336)

Explicado lo anterior haré la sustentación pregunta a pregunta con la finalidad de que en caso de que prospere la censura se determine que las preguntas no cumplen con los estándares de validez y confiabilidad, establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de

mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar los aciertos, se me concedan como válidas, y su valor sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que alguna de las censuras propuestas a las preguntas del examen prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Para resolver este tercer argumento, respetuosamente se solicita tener en cuenta que además de todas las consideraciones previas sobre el Acuerdo Pedagógico, solicito a La Escuela Judicial que tenga presente lo siguiente con el fin de tener criterios claros y objetivos de cara a mi derecho de contradicción y objeción de cada uno de los ítems en los que he puntuado como desaciertos. Se trata de dos marcos de referencia que aplican para el diseño y valoración de las pruebas objetivas.

El primer marco se compone de los principios teóricos y los criterios lingüísticos que son pertinentes en el estudio del éxito comunicativo dentro la semántica y la pragmática del texto, **aplicados a la vocación comunicativa de los ítems de una prueba objetiva**. El segundo marco consiste en una serie de consideraciones teóricas y de criterios que permiten determinar si el contenido de una prueba se configura como evidencia de su validez desde un punto de vista psicométrico. Esta validez, en últimas, implica la eficacia de discriminación del instrumento de evaluación, en el sentido de **distinguir entre quienes alcanzaron los objetivos del proceso de formación y los que no**.

a) El éxito comunicativo desde la semántica y la pragmática del texto aplicado a los ítems de pruebas objetivas

Para efectos de la valoración lingüística de los ítems a objetar en el presente recurso, cabe presentar los puntos de partida teóricos y conceptuales que están en la base de esa valoración. En concreto, es importante explicar la comunicación escrita como un fenómeno regulado por normas lingüísticas y de interacción dentro del cual cada participante (emisor, creador del ítem, y receptor, evaluado) cumple con unos procesos de los que depende el éxito de la comunicación en la evaluación. Para ello, será útil una descripción de estos procesos, el orden en el que ocurren, los factores de los que dependen y las normas que los rigen.

A grandes rasgos, estos procesos se pueden agrupar según el agente que los realiza. Serán procesos asociados con la elaboración y composición de un texto aquellos realizados por el emisor (constructor de ítems), mientras que aquellos realizados por el receptor (evaluado) serán procesos asociados con la decodificación e interpretación de un texto.

De acuerdo con Forrest *et al.* (2000), para emitir cualquier comunicación verbal (con palabras, orales o escritas) elaborada y compuesta, en primer lugar, el emisor parte de un contenido cognitivo que le quiere transmitir a su interlocutor. Este contenido cognitivo puede ser de varias naturalezas (conceptual, visual, proposicional, entre otros), y puede provenir de varios orígenes (memoria, percepción, creatividad, entre otros). En segundo lugar, de manera dinámica, el emisor selecciona fragmentos de información del contenido cognitivo, y los ordena jerárquicamente; posteriormente, hace lo propio, linealmente y, de acuerdo con el propósito comunicativo que persigue, con las proposiciones y referentes principales que quiere tratar, la clasificación de cada fragmento como información conocida o información nueva para el receptor, y los énfasis que quiera hacer (Forrest *et al.*, 2000). Estos procesos de selección y ordenamiento ocurren de manera simultánea y conjunta con la elección y empleo de signos lingüísticos que permitan exteriorizar y expresar tanto la información como su orden.

Como resultado de los procesos realizados por el emisor, se produce una unidad comunicativa (llamada discurso o texto según sea el caso), que consiste en un conjunto coherente y ordenado de enunciados lingüísticos regido por las normas de la interacción social comunicativa, de la organización textual y del sistema de la lengua (Bernárdez, 1982). La pretensión de cualquier emisor es que el significado de su discurso o texto exprese, de manera verbal, el contenido cognitivo que quería transmitir, de forma tal que sea comprensible para un receptor y se logre el propósito comunicativo del emisor, que siempre será el de conseguir determinado efecto, por sencillo que sea, en el receptor (Van Dijk, 1996).

No obstante, un discurso o un texto no expresa, por sí solo, el contenido cognitivo. Sería más preciso decir que el emisor pone a disposición del receptor la combinación coherente y ordenada de signos lingüísticos que elaboró para que el receptor los decodifique y los interprete de tal manera que logre formarse una representación de un contenido cognitivo (Forrest *et al.*, 2000). En un caso de éxito comunicativo, es decir, un caso en el que se cumpla el propósito comunicativo del emisor, la representación que se forma el receptor será lo más similar posible a la representación de la que partió el emisor (Forrest *et al.*, 2000; Van Dijk 1996).

Por su parte, para la decodificación, interpretación y formación de una representación cognitiva, el receptor se sirve de, por lo menos, tres tipos de conocimiento o marcos (Forrest *et al.*, 2000; Ricoeur, 2006; Van Dijk, 1996). En primer lugar, el receptor emplea su conocimiento intuitivo del sistema de la lengua para identificar lexemas (“palabras”), morfemas (partes de las palabras) y sintagmas (frases y oraciones), así como su sentido, y sus referencias básicas y genéricas. En segundo lugar, el receptor reconoce los elementos morfosintácticos (gramaticales) y pragmáticos que permiten establecer conexiones lógicas entre oraciones, e interpreta el significado de estas conexiones de acuerdo con conocimientos sobre el mundo, compartidos por una comunidad.

En tercer lugar, el receptor integra, a su tarea de interpretación, información sobre el contexto de la interacción comunicativa, y sobre normas y convenciones sociales de interacción comunicativa que sean pertinentes para aclarar o especificar los sentidos, las referencias y las intenciones que sean necesarias. Finalmente, hay que agregar que el receptor también hace uso, tanto del conocimiento sobre el mundo, como del conocimiento de marcas de énfasis propias de una lengua, para reconstruir la organización temática y jerárquica del discurso o texto. En otras palabras, además de la comprensión semántica y pragmática de los enunciados y las relaciones entre estos, también son necesarios otros conocimientos generales y lingüísticos para reconocer las ideas, temas y referentes principales de un discurso o texto.

Teniendo en cuenta los conocimientos y los procesos necesarios para la decodificación e interpretación de discursos y textos, es claro que el éxito comunicativo depende cuatro factores principalmente: a) el cumplimiento de las normas y convenciones formales, y de significado del sistema de la lengua que se use; b) el seguimiento de normas y convenciones de interacción comunicativas adecuadas para cada contexto; c) la pertinente selección, presentación de conocimientos y referentes relevantes y compartidos; y d) la correcta disposición, organización y jerarquización de la información. Al primer factor, lo denominaremos *adecuación gramatical*; al segundo, *adecuación pragmática*; al tercero, *adecuación referencial*; y, al cuarto, *adecuación temática*. En muchos casos, estos factores no se cumplen o incumplen de manera separada sino de manera conjunta y conectada.

Siempre que la intención de un emisor no sea engañar, confundir, evadir o algo similar, es razonable presuponer que el emisor intentará cumplir adecuadamente con esos cuatro factores recién descritos. Se espera que el emisor, razonablemente, intente que su discurso o texto sea exitoso comunicativamente para cumplir con su propósito (más allá de la comunicación). Además, en algunas ocasiones, también hay incentivos u obligaciones sociales para que el emisor lo haga; de hecho, esta suposición hace parte del estudio lingüístico de las interacciones verbales y se denomina el *principio de cooperación* (PC) (Van Dijk 1996; Grice 1991).

De acuerdo con el mencionado principio, el comportamiento de los participantes de un intercambio verbal puede estudiarse de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento de ciertas máximas abstractas que asegurarían el éxito de la comunicación en circunstancias ideales. En otras palabras, si suponemos las características ideales que debería tener un discurso o un texto para ser exitoso comunicativamente, podremos describir cómo y por qué un discurso o texto particular logra o no un propósito comunicativo en virtud del cumplimiento de esas características ideales, o a pesar de su incumplimiento o de un cumplimiento indirecto o parcial.

De acuerdo con la propuesta de Grice (1991), las máximas que componen el PC son cuatro: la de *cantidad*, la de *calidad*, la de *relación* y la de *manera*. La primera máxima tiene que ver

con la cantidad de información que el emisor debería presentar. La segunda máxima tiene en cuenta la veracidad de la información presentada. La tercera máxima se refiere a la relevancia de la información presentada. Finalmente, la cuarta máxima se relaciona con la forma de presentación de la información, en particular, con su claridad, brevedad y organización. A continuación, se presenta una descripción detallada de cada máxima.

I) Máxima de cantidad: El emisor debe ser tan informativo como lo requiera la situación, de tal manera que no provea muy poca información para ser comprendido correctamente, ni demasiada información al punto de que se vuelva confusa o difícil de procesar para el receptor.

II) Máxima de calidad: El emisor debe ser sincero, de tal manera que no digan algo contrario a la realidad o falso, o algo de lo que no tienen evidencia o información suficiente.

III) Máxima de relación: El emisor debe aportar información relevante de acuerdo con la situación comunicativa y las exigencias del contexto, así como la organización temática y la secuencia lineal del discurso o texto.

IV) Máxima de manera: El emisor debe ser claro, conciso y ordenado, y debe evitar expresarse de manera confusa, ambigua y vaga.

La gestión correcta de los factores de los que depende el éxito comunicativo y un cumplimiento del PC derivan en intereses, tareas y hasta responsabilidades aún más apremiantes para quien escribe. Tal como explica Ricoeur (2006), la creación de textos implica una serie de consideraciones diferentes a la producción de discursos orales. Por un lado, implica trabajar con las convenciones propias de la escritura de una lengua, incluyendo el uso de signos parasintácticos, es decir, signos no verbales que sirven para resaltar características sintácticas y semánticas de enunciados o grupos de enunciados tales como la puntuación o el espaciado que indica la separación entre párrafos. A diferencia de las convenciones y signos parasintácticos empleados en la comunicación oral (que son en gran parte intuitivos, como la duración, las pausas y la entonación), las convenciones y signos parasintácticos propios de la escritura requieren un entrenamiento formal.

Por otro lado, dado que, la gran mayoría de las veces, la lectura de un texto se realiza en un contexto espacial y temporal diferente a aquel en el que se escribió ese texto, quien escribe debe servirse lo menos posible de sentidos y referencias cuya comprensión dependa de elementos del contexto inmediato. Por ello, la calidad de las descripciones que el escritor haga de los referentes y las situaciones tratadas es indispensable para la comprensión de un texto escrito. Un caso límite de esto sucede cuando se tratan referentes y situaciones ficticias, pues es imposible, no sólo acudir a un contexto inmediato, sino también a cualquier contexto compartido en el mundo real.

Para efectos del presente recurso, se considerará la posibilidad de éxito comunicativo de los ítems de la prueba teniendo en cuenta principalmente los cuatro factores presentados anteriormente en conjunción con el cumplimiento del PC. Tanto los factores como las máximas que componen el PC se resumen en la siguiente tabla.

Factores de los que depende el éxito comunicativo	a) el cumplimiento de normas y convenciones formales, y de significado del sistema de la lengua que se use
	b) el seguimiento de normas y convenciones de interacción comunicativas adecuadas para cada contexto
	c) la pertinente selección, presentación o sugerencia de conocimientos y referentes relevantes y compartidos
	d) la correcta disposición, organización y jerarquización de la información
Máximas del principio de cooperación	I) Máxima de cantidad: el emisor debe ser tan informativo como lo requiera la situación, de tal manera que no provea muy poca información para ser comprendido correctamente, ni demasiada información al punto de que se vuelva confusa o difícil de procesar para el receptor.
	II) Máxima de calidad: El emisor debe ser sincero, de tal manera que no digan algo contrario a la realidad o falso, o algo de lo que no tienen evidencia o información suficiente.
	III) Máxima de relación: El emisor debe aportar información relevante de acuerdo con la situación comunicativa y las exigencias del contexto, así como la organización temática y la secuencia lineal del discurso o texto.
	IV) Máxima de manera: El emisor debe ser claro, conciso y ordenado, y debe evitar expresarse de manera confusa, ambigua y vaga.

Tabla. Principios para la valoración de la posibilidad de éxito comunicativo

Para finalizar, se debe precisar que, en el contexto de una prueba objetiva, los incentivos y obligaciones sociales que motivan el cumplimiento de los principios descritos son mayores. **En últimas, los diseñadores de los instrumentos de evaluación deben ajustarse al máximo a dichos principios con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad del proceso.** Si, por ejemplo, se presentan ítems mal escritos, incoherentes, sobredescritos o subdescritos, en los términos aquí presentados, **se podrá desconfiar de la efectividad y calidad del instrumento de evaluación.**

- b) Valoración de la validez a partir de la evidencia basada en el contenido desde la psicometría

Dentro de la psicometría uno de los principales conceptos relacionados con los instrumentos de medición es el de validez. Según la *American Educational Research Association –AERA, et al.*, (2014) la validez es el “grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una prueba para los usos propuestos de la prueba” (p. 11). AERA *et al.* (2014) proponen cinco factores que configuran la evidencia de validez: (1) la evidencia basada en el contenido de la prueba, (2) la evidencia basada en los procesos de respuesta, (3) la evidencia basada en la estructura interna, (4) la evidencia basada en relaciones con otras variables, (5) y la evidencia basada en las consecuencias de uso de las pruebas.

La *evidencia basada en el contenido de la prueba* está relacionada con las especificaciones de la prueba, así como con la redacción y el formato de los ítems, de tal manera que se haga un análisis de la relación entre el contenido de la prueba y el marco teórico propuesto para la evaluación (AERA *et al.*, 2014). Como lo mencionan Pedrosa, Suárez-Álvarez y García-Cueto (2013), el concepto de validez de contenido se ha incluido en la literatura de la medición desde la década de 1940 y ha estado ligado con el sustento teórico de una prueba, dada la conexión lógica que se debe demostrar entre el contenido del instrumento y la teoría sobre la que está construido. En otras palabras, se debe demostrar que los ítems representan todos los componentes del dominio a medir, así como que cada uno tiene una relación evidente con el dominio para el cual fue construido.

La *validez de contenido* también se ha caracterizado según el criterio de que el instrumento debería presentar un muestreo adecuado de las conductas que se busca evaluar (Escobar y Cuervo, 2008). Es decir, los ítems son suficientes para realizar la medición del constructo o dominios, tanto en cantidad, como en los aspectos que deberían medirse (componentes del constructo o dominio). Por lo anterior, la validación de cada uno de los ítems resulta de importancia para la evaluación propuesta y, por lo tanto, para la validez del instrumento usado.

Uno de los métodos más empleados para respaldar la evidencia de contenido de un instrumento es el juicio de expertos, el cual consiste recoger la opinión de personas altamente calificadas y profundamente informadas sobre las dimensiones o ítems a incluir como parte de la evaluación. Escobar y Cuervo (2008) listan algunas características de los expertos, entre las que se destacan que tengan experiencia en el tema a evaluar, la construcción de instrumentos o algún otro tema que se pueda ver relacionado con la evaluación; tener un amplio reconocimiento en el campo en el cual se necesita su experticia; y, además, las habilidades necesarias para la emisión de juicios imparciales.

Como lo mencionan Pedrosa, Suárez-Álvarez y García-Cueto (2013), la evaluación del contenido de los ítems o el instrumento a partir del juicio de expertos se realiza generalmente usando escalas Likert con el fin de tener una escala en común a partir de la cual se pueda obtener una calificación que determine si el ítem debe ser incluido en el instrumento de evaluación. Las categorías usadas por los expertos para llevar a cabo la evaluación pueden

variar según el autor. Uno de los referentes más citados, en lengua hispana⁴, es el artículo de Escobar y Cuervo (2008, p. 35) en el cual se proponen cuatro categorías desde las cuales se pueden hacer juicios de expertos:

- **Suficiencia:** Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de ésta.
- **Claridad:** El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas (en consonancia con los elementos lingüísticos descritos anteriormente).
- **Coherencia:** El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.
- **Relevancia:** El ítem es esencial o importante; es decir, debe ser incluido dado que evalúa la competencia a medir.

Dado que estas categorías están planteadas para hacer la validación de los ítems, usualmente, los validadores tienen acceso a la estructura del instrumento, que contiene las definiciones y dimensiones que constituirán la evaluación realizada con el instrumento. Para el presente recurso, en todo caso, dado que sólo se cuenta con los ítems reconstruidos y con los referentes del programa de formación (syllabus, lecturas), se puede acceder a tres criterios: claridad, coherencia y relevancia.

Conviene, entonces, tener algunos criterios que orienten la valoración de la claridad del ítem en términos formales y de contenido. Aiken (2003, p. 31) ofrece un listado de criterios para la escritura de ítems que pueden adoptarse para la valoración propuesta. A continuación, se listan los que se tendrán en cuenta para el presente recurso:

- 1) Incluya la mayor parte de la información en el contexto y el enunciado del ítem. Es ineficiente repetir las mismas palabras en cada opción y a los examinados les resulta menos difícil revisar opciones más cortas.
- 2) Si las opciones tienen un orden natural, como fechas o edades, es recomendable disponerlas en ese orden. De otro modo, ordénelas aleatoria o alfabéticamente (siempre que la alfabetización no proporcione señales para la respuesta correcta).
- 3) Procure que todas las opciones sean aproximadamente de la misma extensión, que sean gramaticalmente correctas y apropiadas en relación con el contexto y enunciado del ítem. Sin embargo, no deje que el tronco revele la opción correcta por medio de asociaciones verbales u otras señales.
- 4) Asegúrese de que todas las opciones sean plausibles para los examinados que no conocen la respuesta correcta, pero que solo una opción sea correcta o “la mejor”. Los errores populares son buenos distractores.

⁴ Algunos de los artículos donde se toma como referencia son Rodríguez, Urías y Valdés, 2020; Zamora, Serrano y Martínez, 2020; Galicia, Balderrama y Edel, 2017; Moreno y Monroy, 2016; Dorantes, Hernández y Tobón, 2016.

- 5) Evite, o al menos minimice, el uso de expresiones negativas como “no” en el contexto, enunciado del ítem o las opciones. En caso de hacerlo, resáltelo de forma que sea evidente para los examinados.
- 6) No deben usarse contextos, enunciados de ítem y opciones ambiguos o capciosos.
- 7) Use con moderación las expresiones “ninguno de los anteriores”, “todos los anteriores”, o “más de uno de los anteriores”. Además, evite el uso de expresiones de frecuencia como “siempre” o “nunca”.
- 8) Procure que cada ítem sea independiente de otros (que no se entrelacen o interrelacionen). Este criterio aplica solo para los ítems o contextos que no deberían estar relacionados con ítems diferentes a aquellos con los que debe tener relación evidente.

En cuanto a la coherencia y la relevancia, se debe agregar que estas categorías, cuando se trata de un proceso de formación, deben ponerse en consonancia con el diseño pedagógico de dicho proceso. En este caso, como ya se mencionó, se partió, no sólo de un Acuerdo Pedagógico, sino también de unos syllabus, los cuales contenían, como se puede ver en los anexos a este recurso, entre otros, los siguientes elementos: objetivo general del programa, objetivos específicos del programa, competencias genéricas, contenidos, objetivos de aprendizaje y bibliografía de consulta obligatoria.

Cabe precisar, en relación con el último componente mencionado, que éste también puede afectar la validez de la prueba en relación con la suficiencia y calidad de las fuentes de información propuesta en el proceso de formación. En esta medida, tendrá que reconocerse la jerarquía de fuentes tanto académicas como jurídicas con el fin de determinar si los ítems basados en determinadas fuentes cumplían con criterios de coherencia y relevancia.

Por demás, todos aspectos mencionados, en un análisis *ex post*, el cual debería ejecutar la Entidad, tendrán un efecto importante sobre el denominado índice de discriminación (Bazán, 2000): "la discriminación de una pregunta se mide por el grado en que la pregunta ayuda a ampliar las diferencias estimadas entre los que obtuvieron un puntaje total de la prueba relativamente alto de los que obtuvieron un puntaje relativamente bajo" (p.6). Es decir, este índice permite determinar qué tanto la respuesta del ítem está relacionada con las evidencias recolectadas para determinar los desempeños de los sujetos, o qué tanto se aleja de estas evidencias. En palabras más planas, la discriminación tiene que ver con la capacidad del ítem para distinguir entre quienes sí tienen la competencia o alcanzaron los objetivos del proceso de formación, y los que no.

En todo caso, a continuación, se presentan evidencias de que los ítems de la prueba no cumplen con los criterios tanto lingüísticos como psicométricos aquí mencionados. Adicionalmente, como es de esperarse, también se presentan evidencias de que los ítems objetados tampoco son precisos en términos de contenido.

Errores que afectan la calificación general de la evaluación ítem por ítem

Para comenzar, es importante aclarar que, si bien el protocolo de exhibición “prohíbe” la conducta de copia literal de las preguntas, en ningún momento, prohíbe la memorización o el uso de técnicas de reconstrucción de los datos: llámese taquigrafía, nemotecnia o cualquier recurso habido o por haber en aras de recuperar el contenido de los ítems aplicados en el examen. Adicionalmente, la Corte Constitucional, a través de la SU-067 de 2022 (la cual versa, precisamente, sobre esta Convocatoria 27), citando la T-1023 de 2006, la T-180 de 2015 y la T-227 de 2019, ha establecido que “la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes”.

En la medida de lo anterior, manifiesto que apliqué una serie de técnicas de reconstrucción y recuperación de la información con el fin de obtener la versión más fidedigna posible de los ítems que pretendo objetar. Por demás, insisto en que sería anticonstitucional que me prohibiese o sancionase de manera alguna por el hecho de transcribir aquí la reconstrucción que se logró del ítem en discusión. De nuevo, me asiste ese derecho (por demás, fundamental) a la prueba, con el fin de adelantar ésta y futuras acciones relacionadas con la convocatoria.

Conclusiones en perspectiva de vulneración de derechos

Los hechos y errores descritos vulneran mi derecho al debido proceso por el cambio de las reglas del concurso de méritos, y la vulneración de los principios de la buena fe, de la confianza legítima y de respeto al acto propio (SU-067 de 2022), materializado en el desconocimiento del principio de legalidad de las reglas vinculantes para la Escuela Judicial y para los discentes, fundamentos que me permiten deprecar las siguientes pretensiones en correlación con el deber de corrección de las irregularidades y equivocaciones en el concurso de méritos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, a través de su delegada, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022 precisó que:

la corrección de las actuaciones administrativas y los recursos de reposición y apelación que se emplean en el curso de las actuaciones administrativas, les brindan a aquellas la oportunidad de ajustar sus actuaciones a las normas pertinentes. Son mecanismos de autotutela, en los cuales la propia administración sujeta, bien sea de manera rogada o espontánea, sus determinaciones a los dictados del ordenamiento. Cuando ello no ocurra, los administrados podrán recurrir a los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011, que ponen en marcha la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este engranaje de instituciones, administrativas y judiciales depura los actos de la Administración de desaciertos e infracciones al ordenamiento.

Conforme los argumentos generales anteriores presento las objeciones individuales a las preguntas de la evaluación de la fase general del IX Curso de Formación Judicial en los siguientes términos:

PROGRAMA 1. HABILIDADES HUMANAS

CONTROL DE LECTURA

Pregunta 4 (P4)

Kotter, (2005), indica que: “la gestión en una empresa organizacional es la capacidad para cumplir con un plan mediante la organización y la dotación de personal, ejemplo de ello representa el ayudar a las personas normales, que se comportan de forma normal, a cumplir con éxito sus trabajos rutinarios. Así, la planificación permite cumplir resultados ordenados creando una estructura organizacional y un conjunto de cargos para cumplir los requerimientos del plan, dotando a esos puestos con individuos calificados y comunicando el plan a esas personas. En lo posible, los procesos de gestión deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos”.

Enunciado

Las expresiones deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos, expuesta por el autor, significa que los procesos de gestión

Distractores

Se deben idear sistemas para monitorear la implementación del plan y así evitar contingencias.

Se deben identificar desviaciones, y planificar la resolución de los problemas que estas representen.

No pueden centrarse en planes de emergencia porque desvían la atención en actividades poco esenciales.

Clave Correcta

No pueden depender de situaciones que se presenten de forma poco frecuente o de proyectos difíciles de alcanzar.

Incumplimiento de criterios comunicativos

Para empezar, el ítem se centra únicamente en medir la comprensión de lectura, dado que solo indaga por la manera en que el evaluado interpreta una expresión en concreto (“deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos”) como parte de un texto más amplio. Por lo tanto, se puede cuestionar si se miden las habilidades humanas en el contexto de las eventuales labores en la rama judicial. Se ahondará en este aspecto al momento de analizar el cumplimiento del acuerdo y del Syllabus.

Por otro lado, también se pueden objetar errores de puntuación en el contexto y en las opciones de respuesta (clave y distractores), además de errores de ortografía en el enunciado.

- En el contexto, se introduce una cita directa de la siguiente manera: Kotter, (2005), indica que: “la gestión en una empresa (...)”. Se detecta un uso inadecuado de los signos de puntuación porque hay dos comas entre sujeto y predicado, a saber, las comas que aíslan la fecha de la fuente. Esto se trata no solo de un error de puntuación, sino incluso de citación, dado que es posible que la persona que elaboró el ítem hay pensado que las comas que hay dentro del paréntesis cuando se tiene datos como autor, fecha y número de página se mantienen. Sin embargo, la forma correcta de introducir la cita es la siguiente: Kotter (2005) indica que: “la gestión ...”. Dado que la cita se asimila al sistema empleado por las normas de la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés), se puede acudir al manual de citación, donde se explica que el apellido del autor es parte del texto y la fecha se ubica entre paréntesis inmediatamente después del apellido en citas narrativas. Además, el apellido del autor puede ubicarse en cualquier lugar dentro de la oración siempre que eso tenga sentido. Así las cosas, el formato de citación, según las normas, es incorrecto.
- En el enunciado de un ítem, se suelen destacar aquellos términos o expresiones del contexto por lo cuales se quiere indagar. Eso debería aplicarse en la expresión “deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos”, pero no tiene ningún tipo de énfasis, por lo que el evaluado no podría saber con exactitud la extensión de la expresión por la cual se pregunta. Al respecto, la Ortografía de Real Academia Española explica que las comillas tienen usos metalingüísticos, es decir, “aquellos en los que un término, una expresión o un enunciado se emplean no para comunicar el mensaje que contienen, sino para decir algo de ellos, para comentarlo desde un punto de vista lingüístico”⁵. Así las cosas, la ausencia de dicho elemento no solo confunde al evaluado, sino que omite una de las recomendaciones ortográficas de la Real Academia Española.
- En el distractor que inicia con “se deben idear sistemas”, la inclusión del pronombre recíproco “se” genera errores con el enunciado. Hay que recordar que, en la construcción de ítems, puede suceder que el enunciado sea una parte de una oración

⁵ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. El uso de los signos ortográficos. En: Ortografía de la lengua española. Real Academia Española y Asociación de Academias de la lengua española, 2010.

y se espera que el evaluado la complete con alguna de las opciones de respuesta. Por este motivo, no puede haber errores gramaticales entre el enunciado y las opciones de respuesta, y un error gramatical no es un motivo que el evaluado deba considerar para excluir un ítem. En el distractor objeto de análisis, la inclusión del pronombre recíproco entre “los procesos de gestión” y “deben idear sistemas” deriva en un error gramatical, dado que este elemento suele funcionar como un complemento directo, pero en el distractor está entre sujeto y predicado. Lo mismo sucede con el distractor que inicia con “se deben identificar”.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Un primer aspecto que se debe mencionar es el uso inadecuado que se hace del documento base de elaboración del ítem. La fuente es parte de la unidad 1 del programa de habilidades humanas: KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83, nro. 11. pp. 17-25. Según los elementos de citación del contexto, se trata de una cita directa extensa tomada del artículo que no fue objeto de cambios u omisiones de información. Sin embargo, cuando se intenta rastrear la cita en el artículo, se encuentra que, en realidad, no solo no se trata de una cita directa, sino que es un fragmento de texto que surge al unir varias oraciones en un solo párrafo. Veamos:

“(1) la gestión en una empresa organizacional es la capacidad para cumplir con un plan mediante la organización y la dotación de personal, ejemplo de ello representa el (2) ayudar a las personas normales, que se comportan de forma normal, a cumplir con éxito sus trabajos rutinarios. Así, la planificación permite cumplir resultados ordenados creando una estructura organizacional y un (3) conjunto de cargos para cumplir los requerimientos del plan, dotando a esos puestos con individuos calificados y comunicando el plan a esas personas. (4) En lo posible, los procesos de gestión deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos”.

- (1) La gestión desarrolla la capacidad para cumplir con su plan mediante la organización y la dotación de personal: creando una estructura organizacional

KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83. nro.

- (2) lo difícil de lograr. El objetivo general de los sistemas y estructuras es ayudar a las personas normales, que se comportan de forma normal, a cumplir con éxito sus trabajos rutinarios, día tras día. No se

KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83. nro.

- (3) La gestión desarrolla la capacidad para cumplir con su plan mediante la organización y la dotación de personal: creando una estructura organizacional y un conjunto de cargos para cumplir los requerimientos del plan, dotando a esos puestos con individuos calificados, comunicando el plan a esas personas,

KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83. nro.

- (4) motivado o inspirado es prácticamente irrelevante. En lo posible, los procesos de gestión deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos. Esto significa que no

KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83. nro.

Por lo tanto, es sumamente cuestionable que se haya generado una presunta cita directa con base en fragmentos aislados del documento y que dichos fragmentos incluso hayan sido cambiados. Una cita directa debe contener las palabras textuales de un autor y, de no ser así, debe ser una cita indirecta. No obstante, el fragmento no puede ni siquiera ser tratado de esa manera por la presencia de las comillas.

Incumplimiento del acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta no cumplen con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- Si bien el programa de habilidades humanas busca “implementar procesos de formación por competencias en habilidades humanas” o “facilitar herramientas teórico prácticas”, el fin último de esto es mejorar el relacionamiento interpersonal, identificar conductas para dirigir y liderar equipos de trabajo, o prevenir el acoso laboral. Sin embargo, el ítem simplemente se limita a medir la comprensión de lectura de los evaluados y esto ni siquiera se realiza en relación con la gestión judicial.

Análisis de contenido

A partir de la presunta cita textual de Kotter, se pregunta al evaluado por el siguiente fragmento: “En lo posible, los procesos de gestión deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos”. En concreto, se le pide que, a partir de la expresión “deben acercarse a la ausencia de fallas y errores”, relacione qué significado le atribuye esto a los procesos de gestión. Entre las opciones posibles, se indica que la clave es la siguiente: “no pueden depender de situaciones que se presenten de forma poco frecuente o de proyectos difíciles de alcanzar”. Por lo tanto, la respuesta correcta es la siguiente: “La expresión deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos, expuesta por el autor, significa que los procesos de gestión no pueden depender de situaciones que se presenten de forma poco frecuente o de proyectos difíciles de alcanzar”. Sin embargo, llegar a esta respuesta implica por parte del evaluado un proceso de memoria de la lectura, dado que se basa en el siguiente fragmento de la lectura: “En lo posible, los procesos de gestión deben acercarse a la ausencia de fallas y riesgos. Esto significa que no pueden depender de lo infrecuente o de lo difícil de lograr”⁶.

Por otro lado, si se observa detenidamente la lectura, se tiene que dos de los distractores también son posibles como respuesta. Para empezar, consideremos el siguiente fragmento: “Por último, la gestión asegura el logro del plan mediante el control y la resolución de

⁶ KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83, nro. 11. pp. 17-25.

problemas: monitoreando con cierto detalle los resultados en relación al plan, tanto formal como informalmente, a través de informes, reuniones y otras herramientas; identificando desviaciones; y luego planificando y organizando la resolución de los problemas”⁷. Este fragmento, en últimas, tiene relación con las siguientes opciones:

- “se deben idear sistemas para monitorear la implementación del plan y así evitar contingencias”
- “se deben identificar desviaciones, y planificar la resolución de los problemas que estas representen”

Así las cosas, también son características de los sistemas de gestión y las dos opciones pueden considerarse correctas por parte del evaluado.

Con base en todo lo anterior, se tiene que el contexto del ítem no sigue criterios de citación adecuados y, como ya se indicó, no se trata ni siquiera de un fragmento textual. Sumado a esto, dicho contexto no podría permitirle al evaluado analizar adecuadamente el fragmento que se problematiza en el enunciado y la manera en que la lectura base de construcción del ítem comprende los procesos de gestión abre la posibilidad a más de una respuesta posible. Por lo tanto, hay más de una respuesta posible que incluso se derivan de un contexto erróneamente planteado.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P4**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P4** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Pregunta 5 (P5)

Kotter, (2005), indica que: “El liderazgo se ocupa de enfrentar el cambio, lo cual se hace necesario para sobrevivir y competir eficazmente en un entorno cada vez más competitivo y volátil. Así, para liderar a una organización hacia el cambio constructivo, se debe empezar por fijar una orientación: elaborando una visión del futuro junto con las estrategias para generar los cambios que son necesarios para lograr esa visión, y alinear a las personas”.

⁷Ibid.

Enunciado

La expresión alinear a las personas, expuesta por el autor, significa que en la actividad de liderazgo se debe

Distractores

Brindar capacitación a los que la necesiten, comunicar los planes a la fuerza laboral y decidir cuánta autoridad se va a delegar.

Escoger una estructura de cargos y de relaciones de dependencia y dotarla con las personas idóneas para los cargos.

Crear sistemas humanos que puedan implementar planes tan precisa y eficientemente como sea posible.

Clave

Comunicar la nueva orientación a quienes pueden crear coaliciones, comprenden la visión y están comprometidos con su logro.

Incumplimiento de criterios comunicativos

Para empezar, el ítem se centra únicamente en medir la comprensión de lectura, dado que solo indaga por la manera en que el evaluado interpreta una expresión en concreto (“alinear a las personas”) como parte de un texto más amplio. Por lo tanto, se puede cuestionar si se miden las habilidades humanas en el contexto de las eventuales labores en la rama judicial. Se ahondará en este aspecto al momento de analizar el cumplimiento del acuerdo y del Syllabus.

Por otro lado, también se pueden objetar errores de puntuación en el contexto y en las opciones de respuesta (clave y distractores), además de errores de ortografía en el enunciado.

- En el contexto, se introduce una cita directa de la siguiente manera: Kotter, (2005), indica que: “El liderazgo se ocupa de (...)”. Se detecta un uso inadecuado de los signos de puntuación porque hay dos comas entre sujeto y predicado, a saber, las comas que aíslan la fecha de la fuente. Esto se trata no solo de un error de puntuación, sino incluso de citación, dado que es posible que la persona que elaboró el ítem hay pensado que las comas que hay dentro del paréntesis cuando se tienen datos como autor, fecha y número de página se mantienen. Sin embargo, la forma correcta de introducir la cita es la siguiente: Kotter (2005) indica que “el liderazgo ...”. Dado que la cita se asimila al sistema empleado por las normas de la American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés), se puede acudir al

manual de citación, donde se explica que el apellido del autor es parte del texto y la fecha se ubica entre paréntesis inmediatamente después del apellido en citas narrativas. Además, el apellido del autor puede ubicarse en cualquier lugar dentro de la oración siempre que eso tenga sentido. Así las cosas, el formato de citación, según las normas, es incorrecto.

- En el enunciado de un ítem, se suelen destacar aquellos términos o expresiones del contexto por lo cuales se quiere indagar. Eso debería aplicarse en la expresión “alinear a las personas”, pero no tiene ningún tipo de énfasis, por lo que el evaluado no podría saber con exactitud la extensión de la expresión por la cual se pregunta. Al respecto, la Ortografía de Real Academia Española explica que las comillas tienen usos metalingüísticos, es decir, “aquellos en los que un término, una expresión o un enunciado se emplean no para comunicar el mensaje que contienen, sino para decir algo de ellos, para comentarlo desde un punto de vista lingüístico”. Así las cosas, la ausencia de dicho elemento no solo confunde al evaluado, sino que omite una de las recomendaciones ortográficas de la Real Academia Española.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Un primer aspecto que se debe mencionar es el uso inadecuado que se hace del documento base de elaboración del ítem. La fuente es parte de la unidad 1 del programa de habilidades humanas: KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83, nro. 11. pp. 17-25. Según los elementos de citación del contexto, se trata de una cita directa extensa tomada del artículo que no fue objeto de cambios u omisiones de información. Sin embargo, cuando se intenta rastrear la cita en el artículo, se encuentra que, en realidad, no solo no se trata de una cita directa, sino que es un fragmento de texto que surge al unir varias oraciones en un solo párrafo. Veamos:

Veamos:

“(1) El liderazgo se ocupa de enfrentar el cambio, lo cual se hace necesario para sobrevivir y competir eficazmente en un entorno cada vez más competitivo y volátil. (2) Así, para liderar a una organización hacia el cambio constructivo, se debe empezar por fijar una orientación: elaborando una visión del futuro junto con las estrategias para generar los cambios que son necesarios para lograr esa visión, (3) y alinear a las personas”.

(1) El liderazgo, por contraste, se ocupa de enfrentar el cambio. Parte del motivo por el que ha llegado a ser tan importante en años recientes, es que el mundo de los negocios se ha vuelto más competitivo y volátil. El cambio tecno-

(2) hacerlo un 5% mejor. Cada vez son más necesarios cambios mayores para sobrevivir y competir eficazmente en este nuevo entorno. Más cambios requieren

(3) Por contraste, para liderar a una organización hacia el cambio constructivo, se debe empezar por fijar una orientación: elaborando una visión del futuro (a menudo, del futuro distante) junto con las estrategias para generar los cambios que son necesarios para lograr esa visión.

KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83, nro. 11. Fragmento de la página 23.

Por lo tanto, es sumamente cuestionable que se haya generado una presunta cita directa con base en fragmentos del documento y que dichos fragmentos incluso hayan sido cambiados. Una cita directa debe contener las palabras textuales de un autor y, de no ser así, debe ser una cita indirecta. No obstante, el fragmento no puede ni siquiera ser tratado de esa manera por la presencia de las comillas.

Esta misma situación se repite en las opciones de respuesta, dado que estas son citas textuales del texto, pero sin la debida atribución de autoría. En efecto, esto no es esperable en la elaboración de ítems, pero tampoco lo es que los ítems no sean una creación original por parte de un grupo de expertos.

Opciones de respuesta	Fragmento del texto
crear sistemas humanos que puedan implementar planes tan precisa y eficientemente como sea posible.	Los ejecutivos “organizan” para crear sistemas humanos que puedan implementar planes tan precisa y eficientemente como sea posible. Usualmente,
escoger una estructura de cargos y de relaciones de dependencia y dotarla con las personas idóneas para los cargos.	esto exige cierta cantidad de decisiones potencialmente complejas. Una empresa debe escoger una estructura de cargos y de relaciones de dependencia; dotarla con las personas idóneas para los cargos;
brindar capacitación a los que la necesiten, comunicar los planes a la fuerza laboral y decidir cuánta autoridad se va a delegar.	brindar capacitación a aquellos que la necesiten; comunicar los planes a la fuerza laboral; y decidir cuánta autoridad se va a delegar y a quién. También es necesario

Incumplimiento del acuerdo y del Syllabus

Si bien el programa de habilidades humanas busca “implementar procesos de formación por competencias en habilidades humanas” o “facilitar herramientas teórico prácticas”, el fin último de esto es mejorar el relacionamiento interpersonal, identificar conductas para dirigir y liderar equipos de trabajo, o prevenir el acoso laboral. Sin embargo, el ítem simplemente se limita a medir la comprensión de lectura de los evaluados y esto ni siquiera se realiza en relación con la gestión judicial.

Análisis de contenido

A partir de la presunta cita textual de Kotter, se pregunta al evaluado por el siguiente fragmento: “Así, para liderar a una organización hacia el cambio constructivo, se debe empezar por fijar una orientación: elaborando una visión del futuro junto con las estrategias para generar los cambios que son necesarios para lograr esa visión, y alinear a las personas”. En concreto, se le pide que, a partir de la expresión “alinear a las personas”, relacione qué significado le atribuye esto a la actividad de liderazgo. Entre las opciones posibles, se indica que la clave es la siguiente: “comunicar la nueva orientación a quienes pueden crear coaliciones, comprenden la visión y están comprometidos con su logro”. Por lo tanto, la respuesta correcta es la siguiente: “La expresión alinear a las personas, expuesta por el autor, significa que en la actividad de liderazgo se debe comunicar la nueva orientación a quienes pueden crear coaliciones, comprenden la visión y están comprometidos con su logro”. Sin embargo, llegar a esta respuesta implica por parte del evaluado un proceso de memoria de la lectura, dado que se basa en el siguiente fragmento textual: “Sin embargo, la actividad de liderazgo equivalente es alinear a las personas. Esto significa comunicar la nueva orientación a quienes pueden crear coaliciones, comprenden la visión y están comprometidos con su logro.”⁸.

Respuestas posibles

Con base en todo lo anterior, se tiene que el contexto del ítem no sigue criterios de citación adecuados y, como ya se indicó, no se trata ni siquiera de un fragmento textual. Sumado a esto, dicho contexto no podría permitirle al evaluado analizar adecuadamente el fragmento que se problematiza en el enunciado y la manera en que la lectura base de construcción del ítem comprende el liderazgo, lo cual abre la posibilidad a más de una respuesta posible. Por lo tanto, hay más de una respuesta posible que incluso se derivan de un contexto erróneamente planteado.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P5**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P5** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Pregunta 25 (P25)

Un jefe, sistemáticamente evita incluir a un empleado en particular en las reuniones importantes, discusiones de casos o decisiones de equipo. Este empleado se mantiene al

⁸ KOTTER, John P. Lo que de verdad hacen los líderes. En: Harvard Business Review. 2005. Vol. 83, nro. 11. pp. 17-25.

margen de la información crucial y las oportunidades de aprendizaje. Aunque el jefe justifica su acción argumentando la falta de experiencia del empleado, otras personas con niveles similares de experiencia son regularmente incluidos. El comportamiento del jefe no solo afecta el desarrollo profesional del empleado, sino que manifiesta sentirse desmotivado. Adaptado de Tomado de “Cartilla laboral para la Rama Judicial” Consejo Superior de la Judicatura. 2014.

Enunciado

De acuerdo con el texto descrito, el comportamiento del jefe podría configurarse en las modalidades de acoso llamadas

- 1. discriminación laboral por la exclusión selectiva sobre el empleado.*
- 2. entorpecimiento laboral por la obstaculización de la labor del empleado.*
- 3. maltrato laboral por la indiferencia con que este trata al empleado.*
- 4. desprotección laboral por la desmotivación que sufre el empleado.*

Distractores

- 3 y 2 son correctas.
- 1 y 4 son correctas.
- 2 y 4 son correctas.

Clave

- 1 y 3 son correctas.

Incumplimiento de criterios comunicativos

El contexto del ítem 25 presenta una situación propia de la relación que se establece entre superior y subordinado. Al final del párrafo, se asegura que es “Adaptado de Tomado de (sic) “Cartilla laboral para la Rama Judicial” Consejo Superior de la Judicatura. 2014”. Como se observa, aparecen dos términos que describen la manera en que se redactó el texto, esto es, “Adaptado” y “Tomado”, que son dos conceptos diferentes, pues, por un lado, el hecho de adaptar un texto o párrafo indica que ya existe uno y que se le hacen modificaciones, generalmente, de forma; por otro lado, el hecho de tomar un texto de otro escrito sugiere que se transcribe literalmente tal como aparece en el documento original. Sin embargo, al revisar el texto fuente, se observa que dicha cartilla no contiene ningún caso como el que se propuso en el contexto y, al parecer, no presenta ejemplificaciones de casos de ningún tipo. Esto podría repercutir en el proceso de evaluación, al llevar al evaluado a un proceso de recordación, más que de análisis del caso propuesto.

Respecto a la redacción del texto, se observa que se utiliza una coma que separa “Un jefe” del resto de la oración, lo cual va contra las normas gramaticales, pues no se debe separar el sujeto del predicado, a menos que se introduzca una expresión explicativa, caso en el cual dicha expresión debe encerrarse entre comas. En este caso, podría decirse que “sistemáticamente” es una expresión explicativa, pero no se utilizó una coma después del término, por lo que se incurrió en el error de separar el sujeto del predicado.

Además de lo anterior, se observan algunas ambigüedades. En efecto, la segunda oración (“Este empleado se mantiene al margen de la información crucial y las oportunidades de aprendizaje.”) no es clara en determinar si lo aseverado se da por voluntad propia del empleado o es la consecuencia que se desprende de lo dicho en la primera oración; es decir, no hay un conector que establezca claridad en cuanto a esta situación, que, por demás, es clave en el análisis para determinar si hay acoso laboral, que corresponde al tema del caso. Otra ambigüedad detectada se presenta en la tercera oración (“Aunque el jefe justifica su acción argumentando la falta de experiencia del empleado, otras personas con niveles similares de experiencia son regularmente incluidos.”). En este caso, la ambigüedad se presenta por falta de claridad en el referente de la expresión “su acción”. Al respecto, dicha expresión puede referirse a “el jefe” o a “Este empleado”; la primera opción (“el jefe”) aludiría a lo que se presenta en la primera oración, es decir, a la acción de evitar incluir al empleado en reuniones y decisiones. Mientras tanto, la segunda opción (el empleado) remitiría a lo expresado en la segunda oración, esto es, a la acción de mantenerse al margen, siempre y cuando dicha oración signifique la voluntad del empleado de hacerlo; pero como se presenta ambigüedad al respecto, como se dijo anteriormente, aumenta la falta de claridad. En la tercera oración (“El comportamiento del jefe no solo afecta el desarrollo profesional del empleado, sino que manifiesta sentirse desmotivado.”), también se evidencia un problema de ambigüedad en relación con la dificultad de determinar quién es el que se “siente desmotivado”. Es de anotar que, en esta oración, se hace uso de la locución “sino”, que expresa una contraposición entre dos elementos, uno de los cuales es afirmativo y el otro, negativo. No obstante, en la oración se presentan dos elementos negativos: la afectación al desarrollo del empleado por el “comportamiento del jefe” y la desmotivación. Por lo tanto, el uso de la conjunción adversativa “sino” es inadecuada y genera ambigüedad, dado que no hay claridad en cuanto a cuál de los dos sujetos del caso se le atribuiría la desmotivación, si al jefe o al empleado.

Es evidente, entonces, que el texto citado no cumple con los criterios para que se dé el éxito comunicativo, pues incurre en falta de adecuación gramatical y referencial, que pueden llegar a afectar el análisis del caso por parte del evaluado y llevarlo a seleccionar una respuesta incorrecta.

En consecuencia, se incumplen máximas del principio de cooperación referentes, por un lado, a la máxima de cantidad, ya que la información presentada es confusa, y a la máxima de manera, en tanto se introducen ambigüedades en el contexto.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

En relación con los elementos psicométricos, lo expuesto anteriormente evidencia que el ítem falla en términos de claridad, pues la cita incurre en falta de adecuación gramatical al presentar ambigüedades que impiden determinar el sentido de las oraciones.

Por lo tanto, esto incide en la falta de coherencia que debe tener el ítem en relación con el indicador que se mide, que, en este caso, corresponde a la competencia indicada en el syllabus, dado que los problemas que presenta pueden llevar a un análisis erróneo del caso.

Fuente de información

En relación con la fuente citada, se puede observar que, en la sección referente a “Violencia y prevención del acoso laboral”, se incumplen varios de los factores de los cuales depende el éxito comunicativo. Por ejemplo, se omiten comillas en una cita directa, se coordinan elementos de diferente categoría, se repiten términos en un mismo enunciado (“Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inducir el propósito de inducir la renuncia”), se introducen tabulaciones que no son coherentes con dicha introducción, se presentan ambigüedades, se hace un uso inadecuado de la puntuación, entre otros.

Por lo anterior, es posible concluir que la fuente citada no es un texto adecuado para ser utilizado en un ítem de la prueba, pues incumple con factores de los que depende el éxito comunicativo, como la adecuación gramatical y la adecuación referencial, lo cual lleva al incumplimiento de la máxima de relación y de manera.

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuestas para fundamentar la formulación de la pregunta no cumplen con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

⇒ El caso se diseñó a partir de un documento que no cumple con los factores de los que depende el éxito comunicativo. En esta medida, se incumplió con los referentes del proceso de formación (Acuerdo, Syllabus) en lo siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes.

⇒ Por lo anterior, no es posible evaluar la competencia referente a lo siguiente: i) “Se basa en la necesidad de que los/as discentes posean y desarrollen la capacidad de aprender a aprender, analicen y sinteticen información, adquieran conocimientos de diferentes ámbitos de estudio, y gestionen información de diversas fuentes”.

⇒ Se incumple el criterio de claridad, pues el ítem presenta fallas en cuanto a factores sintácticos y semánticos, que pueden dar lugar a malas interpretaciones a la hora de seleccionar una respuesta para el enunciado.

Análisis de contenido

Como se describió en la sección referente al incumplimiento de criterios comunicativos, el ítem propone un caso en el contexto que incurre en falta de adecuación gramatical, ya que presenta ambigüedades y faltas de ortografía, que pueden incidir en un análisis defectuoso y, por consiguiente, en una mala elección de respuesta.

Por su parte, el enunciado habla de un “texto descrito” cuyo análisis permitirá la selección de los elementos listados, pero, en realidad, se trata de un caso que se ha diseñado a partir de una fuente inadecuada.

En cuanto a las opciones listadas (1. discriminación laboral por la exclusión selectiva sobre el empleado, 2. entorpecimiento laboral por la obstaculización de la labor del empleado, 3. maltrato laboral por la indiferencia con que este trata al empleado y 4. desprotección laboral por la desmotivación que sufre el empleado), aunque corresponden a modalidades del acoso laboral con su respectiva conducta, debe decirse que la opción 4, de acuerdo con el caso, no es coherente con lo que se presenta en el documento fuente, según el cual, la desprotección laboral refiere a “Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador. (sic)”. Al respecto, no es claro si la “desmotivación que sufre el empleado” pueda “poner en riesgo” su integridad y seguridad. Además, al incluir la “desmotivación” puede hacer caer en error al evaluado, ya que este aspecto se menciona en el caso del contexto.

Así pues, el ítem incumple con criterios de relevancia, coherencia y claridad para ser tenido en cuenta en la prueba.

Respuestas posibles

El segundo distractor (“1 y 4 son correctas”) podría tomarse como respuesta correcta, dado lo dicho en el apartado inmediatamente anterior, respecto a que contiene lo referente a la “desmotivación” del empleado y, éste, junto con la opción 1 se presentan en el caso del contexto.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P25**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P25** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me

conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Subsidiariamente solicito que como quiera en la respuesta masiva del 16 de julio de 2024 comunicada por la Unión Temporal Formación Judicial 2019, se imputaron aciertos parciales a las preguntas del criterio de evaluación Taller, respetuosamente solicito que en aplicación del principio de igualdad se me imputen los aciertos parciales en las preguntas de control de lectura que así lo permitan.

10. la calificación de los componentes de la prueba. Sírvanse informar, sí o no, si, en el marco de las actividades cuyos ítems incluían más de un espacio de respuesta, se imputaron aciertos parciales.

Sí se imputaron aciertos parciales.

En este caso la clave de respuesta correcta para la Escuela Judicial correspondió a las conclusiones 1 y 4, y las marcadas por mí a las conclusiones 1 y 3, en tal sentido acerté parcialmente al marcar la conclusión número uno, en tal sentido solicito se me conceda como válida parcialmente, y su valor equivalente a **0,625 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Pregunta 27 (P27)

En un texto sobre el clima laboral y el compromiso institucional, los autores manifiestan que: “La importancia del compromiso organizacional radica en que muestra un impacto directo en las actitudes y conductas de los empleados, tales como aceptación de metas, valores y cultura de la organización, menor ausentismo y baja rotación de personal entre otras (Betanzos Díaz y Paz Rodríguez, 2007). El compromiso organizacional toma una estructura orientada al cumplimiento de la misión y visión de la organización y sus beneficios, si los empleados no se encuentren comprometidos se produce una disminución en la eficacia de la organización (Soberanes y De la Fuente, 2009), la cual favorece el uso irracional de los recursos y en va en detrimento de la eficiencia”. Tomado de DOMÍNGUEZ, Luis, RAMÍREZ Álvaro & GARCÍA, Andrés. El clima laboral como un elemento del compromiso organizacional. Revista Nacional de Administración, 4 (1): (pp.59-70) enero-junio, 2013.

Enunciado

De acuerdo con el texto citado, el compromiso organizacional tiene impacto directo en la

1. *baja rotación del personal.*
2. *eficiencia de la organización.*
3. *misión de la organización.*

4. aceptación de metas de personal.

Distractores

1 y 3 son correctas.

3 y 2 son correctas.

2 y 4 son correctas.

Clave

1 y 4 son correctas.

Incumplimiento de criterios comunicativos

Un texto debe cumplir con factores de los que depende el éxito comunicativo; sin embargo, se observa que la cita transcrita en el contexto del ítem 27 incurre en varios problemas de adecuación gramatical. En efecto, presenta problemas de puntuación. En primer lugar, falta una coma antes de la expresión “entre otras”, en la primera oración; en segundo lugar, la oración que sigue (“El compromiso organizacional toma una estructura orientada al cumplimiento de la misión y visión de la organización y sus beneficios, si los empleados no se encuentren comprometidos se produce una disminución en la eficacia de la organización (Soberanes y De la Fuente, 2009), la cual favorece el uso irracional de los recursos y en va en detrimento de la eficiencia”), en realidad, está conformada por dos oraciones que deben separarse correctamente, es decir mediante punto o punto y coma, pero se utiliza una coma para ello (la coma de la palabra “beneficios”. Al utilizar la coma, un lector desprevenido podría pensar que la expresión condicional que sigue (“si los empleados no se encuentren (sic) comprometidos”) está referida a la primera parte (“El compromiso organizacional toma una estructura orientada al cumplimiento de la misión y visión de la organización y sus beneficios”). Dicho de otra manera, se puede presentar una mala interpretación de la oración condicional por el uso de esa coma. De manera que las dos opciones de interpretación serían las siguientes:

(i) “El compromiso organizacional toma una estructura orientada al cumplimiento de la misión y visión de la organización y sus beneficios, si los empleados no se encuentren (sic) comprometidos”.

(ii) “Si los empleados no se encuentren comprometidos (sic) se produce una disminución en la eficacia de la organización (Soberanes y De la Fuente, 2009), la cual favorece el uso irracional de los recursos y en va en detrimento de la eficiencia”.

Como vemos, el uso inadecuado de la coma en cuestión redundaría en un problema de semántica, pues se puede malinterpretar el significado de la oración y, por ende, repercute

en un problema de coherencia. Lo anterior puede llevar al lector a una incorrecta selección de respuesta.

También, hay un problema gramatical en la escritura de la palabra “encuentren”, pues debería ser “encuentran”, lo cual muestra descuido en la redacción del documento que se toma como fuente para el contexto del ítem.

Además, el texto de la cita presenta un problema de coherencia por inadecuado referenciación, en tanto la expresión “la cual”, en la octava línea, se refiere, según el texto, a la “disminución en la eficacia de la organización” y predica que ésta “favorece el uso irracional de los recursos y en va en detrimento de la eficiencia”. Sin embargo, la relación lógica sería, al contrario, es decir, el uso irracional de recursos y su consecuente disminución de eficacia (se presupone por parte de los empleados) ocasionan una disminución en la eficacia de la organización. En efecto, la relación que se establece es de causa-consecuencia y, según la lógica, siempre la causa va primero que la consecuencia.

Es evidente, entonces, que el texto citado no cumple con los criterios para que se dé el éxito comunicativo, pues incurre en falta de adecuación gramatical y referencial.

En consecuencia, se incumplen máximas del principio de cooperación referentes, por un lado, a la máxima de claridad, pues la redacción invierte la relación lógica de causa-consecuencia; por otro, a la máxima de relación, ya que el texto aportado para el ítem es descuidado y no se adecúa a las exigencias del contexto comunicativo de la prueba; y, finalmente, a la máxima de manera, en tanto el texto citado es confuso.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

En relación con los elementos psicométricos, lo expuesto anteriormente evidencia que el ítem falla en términos de claridad, pues la cita incurre en falta de adecuación gramatical. Adicionalmente, se incumple el criterio de relevancia, ya que realmente no evalúa la competencia a medir, sino que simplemente se solicita del lector una habilidad de comprensión lectora a nivel de lectura literal, pues el texto citado presenta información explícita que responde al enunciado.

Por lo tanto, esto incide en la falta de coherencia que debe tener el ítem en relación con el indicador que se mide, que, en este caso, corresponde a la competencia indicada en el syllabus.

Fuente de información

En relación con la fuente citada, se vio más arriba que no es un texto adecuado, ya que no cumple rigurosamente con las normas de redacción, pues se aparta de los factores que

determinan el éxito comunicativo. Presenta una redacción inadecuada que puede provocar malas interpretaciones a la hora de precisar el significado que el autor quiere difundir.

Lo anterior puede llevar a una incorrecta selección de la respuesta que se busca obtener del evaluado, tal como sucedió pues no se aclaró si el impacto directo del compromiso organizacional es positivo o negativo, lo que hizo confusa la pregunta.

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuestas para fundamentar la formulación de la pregunta no cumplen con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

⇒ La cita no cumple con los factores de los que depende el éxito comunicativo, dado que incurre en problemas comunicativos que pueden llevar al evaluado a hacer una mala interpretación de lo que se quiere comunicar. En esta medida, el ítem incumple con los referentes del proceso de formación (Acuerdo, Syllabus) en tanto la cita es explícita en los elementos que se indagan en el enunciado, y exigen del evaluado una simple lectura literal para determinar la respuesta correcta, por lo que no es posible evaluar la competencia referente a lo siguiente: i) “Se basa en la necesidad de que los/as discentes posean y desarrollen la capacidad de aprender a aprender, analicen y sinteticen información, adquieran conocimientos de diferentes ámbitos de estudio, y gestionen información de diversas fuentes”. Efectivamente, el ítem busca simplemente comprensión lectora a nivel de lectura literal. Es decir, encontrar en el texto información literal que responda al enunciado.

⇒ Por la falta de claridad, pues el ítem presenta fallas en cuanto a factores sintácticos y semánticos que pueden llevar a malas interpretaciones.

Análisis de contenido

Como se vio en la sección referente al incumplimiento de criterios comunicativos, el ítem se basa en una cita que incumple los criterios de los que depende el éxito comunicativo. Por lo tanto, el ítem aporta elementos confusos que pueden hacer caer al lector en error o que pueden llevarlo a escoger la respuesta que aparece de forma literal en la cita del contexto.

Al respecto, en relación con el enunciado, se pretende que el lector responda por los aspectos sobre los cuales incide directamente el compromiso organizacional. A tenor literal, dice “De acuerdo con el texto citado, el compromiso organizacional tiene impacto directo en la...”. Es decir, busca determinar, de varias opciones, sobre qué tiene impacto directo el compromiso organizacional. Luego propone cuatro opciones, a saber: “1. baja rotación del personal; 2. eficiencia de la organización; 3. misión de la organización, y 4. aceptación de metas de personal”, lo anterior sin especificar si el impacto directo es de carácter positivo o negativo.

Por lo tanto, el ítem incumple con criterios de relevancia, coherencia y claridad para ser tenido en cuenta en la prueba.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P27**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P27** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL O DE CASOS

Pregunta 33 (P33)

Respecto a esta pregunta, si bien cumple con el estándar de análisis jurisprudencial o de casos, pues se plantea un caso que impone el análisis del discente, lo cierto es que hay dos claves de respuesta ambiguas que hacen que se pierdan los criterios de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica, veamos.

La pregunta cuestiona el caso de un juez que debe emitir una sentencia de alto perfil de connotación ante medios de comunicación, pues involucra a una figura pública acusada de un fraude. Se expone que el togado recibe opiniones informales de sus superiores sobre el sentido del fallo, así como críticas de los medios de comunicación y protestas de la sociedad, todas enunciadas como influencias externas. Se pide que el decisor sea integral y se cuestiona sobre que componente de la inteligencia emocional se evidencia en el juez del caso.

La clave correcta para la escuela es autorregulación, mientras que la marcada por mí es autoconciencia.

Al respecto debe decirse que el texto obligatorio GOLEMAN, Daniel. (enero 2004). *¿Qué hace a un líder?* Harvard Business Review. (pp.3-11), en el cual se explican los conceptos de autoconciencia y autorregulación (para lo concerniente al argumento) define la **autoconciencia** como; *Autoconciencia significa tener una profunda comprensión de las emociones, fortalezas, debilidades, necesidades y motivaciones propias. Las personas que poseen un fuerte grado de autoconciencia no son ni extremadamente críticas ni confiadas en exceso. Más bien, son honestas consigo mismas y con los demás (página 5).*

Más adelante el texto refiere: *La autoconciencia incluye **la comprensión de los valores** y objetivos individuales. Alguien que tiene conciencia de sí mismo sabe hacia dónde se dirige y*

por qué. Será capaz, por ejemplo, de rechazar con convicción una oferta laboral tentadora en lo económico, pero que no encaja con sus principios u objetivos de largo plazo. Una persona que carece de autoconciencia tiende a tomar decisiones que pasan a llevar valores ocultos y por ende ocasionan dilemas internos (página 5)

Como se puede apreciar, del contexto de la definición de autoconciencia se infiere del texto que esta habilidad hace una clara referencia a la honestidad, la comprensión de emociones, motivaciones propias y más importante a la comprensión de los valores, incluso se advierte que alguien que cuente con esta habilidad emocional puede rechazar ofertas económicas porque no encajan en sus principios u objetivos a largo plazo, mientras que una persona que carezca de autoconciencia tiene la tendencia a tomar decisiones por valores ocultos que le pueden generar dilemas internos.

Entonces, si el juez del caso en evaluación debe conservar integridad y no ceder ante presiones de los medios, sus superiores jerárquicos o inclusive la comunidad en general, pues la conclusión lógica es que para evitarse dilemas en sus valores propios debe contar con inteligencia emocional en el apartado de autoconciencia, ya que estos factores e intereses externos no afectan sus objetivos personales.

Por otro lado, el mismo texto en comento en su página 7 define la autorregulación como; *“La autorregulación, que es como una constante conversación interior, es el componente de la inteligencia emocional que nos libera de ser prisioneros de nuestros sentimientos. Las personas inmersas en tal conversación tienen malos estados de ánimo e impulsos emocionales como todos los demás, pero hallan formas para controlarlos e incluso canalizarlos de manera útil.”*, es decir, desde el control de las emociones internas y no desde la evaluación de factores externos que en realidad ponen a prueba la autoconciencia de los valores propios verbigracias la integridad profesional.

Entonces, si lo que la pregunta busca evaluar es acerca de que habilidad emocional se debe aplicar por parte del juez del caso a fin de no ser afectado por factores externos, como presiones de sus superiores, de los medios o de la comunidad, la respuesta correcta según el texto y lo aprendido en el curso corresponde a la autoconciencia de sus valores propios y no a la autorregulación, pues nada se dijo acerca de los componentes de personalidad respecto del juez hipotético o si sus sentimientos internos le dominaban y tendría que controlarlos, caso distinto al del ejemplo.

En tal sentido y ante la latente ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P33** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 34 (P34)

En relación con esta pregunta lo primero que se debate es que no cumple con el criterio de la actividad objeto de evaluación denominada **análisis jurisprudencial o de casos** pues no busca que el discente ponga en práctica las propuestas metodológicas aprendidas, **en un determinado problema que será planteado por la Escuela Judicial**. Esta actividad debe inexorablemente consistir en la resolución de problemas a partir del análisis jurisprudencial o planteamiento de caso que, según el tipo de programa, podrán ser jurídicos o no jurídicos, es decir busca que luego de analizar un caso o problema determinado el discente llegue a una conclusión atendiendo las habilidades y competencias adquiridas.

Lo cierto es que el cuestionamiento aparentemente se muestra como un caso de análisis, empero contrario a lo esperado no exige análisis alguno, sino que pretende que el discente escoja entre varias opciones para que determine cuál es la más aproximada al criterio del evaluador. Recuérdese que el modelo de pregunta de selección múltiple con única respuesta se caracteriza por permitir que los/las discentes lean, **analicen** y **saquen conclusiones** para luego seleccionar entre varias opciones de respuesta, cosa que no sucede en el caso objetado, pues a pesar del contenido del texto de la pregunta no es posible que el discente llegue a una conclusión efectiva que le otorgue la respuesta correcta, sino por el contrario lo que se pide es que memorísticamente se escoja la respuesta más aproximada al criterio del evaluador, veamos.

La hipótesis refiere sobre un líder de despacho judicial notó en una reunión con su equipo que uno de los empleados ignoró las opiniones de varas compañeras al advertir que no tenían conocimiento dominante del tema, también las criticó e hizo prevalecer su criterio jurídico. Aunque no hubo quejas de las empleadas el juez sí notó su descontento, por lo que se propone implementar acciones en el despacho de intervención temprana para prevalecer el respeto y el trabajo en equipo. Luego consultó con recursos humanos y el comité de convivencia laboral sobre qué acciones podría emprender.

El formador pregunta sobre cuál de las acciones descritas son efectivas para intervenir de manera temprana el acoso laboral y a renglón seguido cambió el sentido del cuestionamiento al incluir la palabra “EXCEPTO”, con lo que en síntesis interrogaba sobre cual acción era la menos efectiva.

La clave de respuesta correcta para la Escuela corresponde al diseño de un protocolo sobre como tramitar las denuncias que formulen los empleados por acoso laboral.

La respuesta marcada por el suscrito corresponde a la promoción de una campaña que describa la ruta que se debe agotar para denunciar por acoso laboral y pegar carteles alusivos al interior del despacho.

Al respecto debe decirse en primer lugar, que el cuestionamiento no exige el análisis de un caso en concreto en el cual posterior a un adecuado análisis se llegue a la respuesta marcada por la Escuela, sino que básicamente cuestiona respecto al apartado exclusivo de acciones tempranas contra el acoso laboral según lo consignado en los textos obligatorios:

- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, Unidad de Recursos Humanos. Cartilla Laboral para la Rama Judicial. Bogotá: CENDOJ, 2014. 57p. (pp. 42-50).
- GÓMEZ, INGRID; HERNÁNDEZ, LINA. (2014) La comunicación en tres casos de acoso laboral. Revista Diversitas - Perspectivas en Psicología - Vol. 10, No. 2, 2014. (p.p.307-318).

Por tanto, al verificar el contenido programático vemos que lo único relacionado con el tema en específico corresponde al siguiente apartado (Página 45 de la Cartilla Laboral para la Rama Judicial):

4.7. Acciones preventivas

En el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es la dependencia responsable de diseñar mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral; para el diseño de tales mecanismos podrán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Diseñar acciones tendientes al mantenimiento de unas relaciones interpersonales adecuadas; algunas de aquellas acciones pueden ser desarrolladas por las Cajas de Compensación, con la Administradora de Riesgos Laborales, entre otras. (Presupuesto)
- Talleres de Relaciones Humanas o de integración. Facilitan la integración de los servidores de la entidad y el mejoramiento y mantenimiento de relaciones interpersonales adecuadas.
- Terapias Grupales
- Modalidad terapéutica en la cual se trabaja bajo programas establecidos, dirigidas a integrantes de un grupo que cuentan con una problemática común, logrando su planeación a futuro, así como el restablecimiento emocional, buscando su integración en cualquier ámbito.



El área de Recursos Humanos es la responsable de incluir dentro del proceso de inducción de los nuevos servidores judiciales el tema de acoso laboral, con el fin de que los mismos conozcan sobre sus derechos y obligaciones en este tema y así mismo sepan cómo actuar frente a estas situaciones.

De modo, que, al verificar el contenido del texto, vemos con claridad que lo enseñado se circunscribe a que la competencia de prevención del acoso laboral en la rama judicial es exclusiva de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que es la dependencia encargada de la inducción de los servidores al tema del acoso laboral, razón por la cual se expidió el Acuerdo 9820 de enero de 2023 por medio de la cual se crearon los Comités de Convivencia Laboral en la Rama Judicial.

Por tanto, resulta más que ambiguo que se me cuestione sobre cuáles de las acciones preventivas del acoso laboral al interior del despacho hipotético, cuando se me enseñó que las acciones preventivas ideales correspondían a:

- El diseño acciones tendientes al mantenimiento de unas relaciones interpersonales adecuadas a cargo de la ARL
- Talleres de Relaciones Humanas o de integración
- Terapias Grupales

- Modalidad terapéutica en la cual se trabaja bajo programas establecidos, dirigidas a integrantes de un grupo que cuentan con una problemática común

Ahora, en ningún apartado se refirió a escalas de eficacia entre las acciones preventivas del acoso laboral en la Rama Judicial, sino que de manera subjetiva el evaluador escogió (según su parecer) cuál de las claves de respuestas (que no fueron enseñadas en las lecturas obligatorias) era la correcta.

Así mismo, también resulta seriamente discutible que la acción de intervención temprana menos efectiva –recuérdese la palabra excepto- sea el diseño de un protocolo sobre el procedimiento para los miembros del despacho a fin de que tramiten sus denuncias, pues la sola existencia de un protocolo resulta mucho más efectiva que la exhibición de carteles alusivos a la ruta de denuncia de acoso laboral. Me explico con la mayor claridad posible, escogí la clave de los carteles alusivos porque la consideré mucho menos efectiva que la existencia de un protocolo formal de denuncia.

Por tanto, ante la subjetividad en la clave de respuesta genera una ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P34** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 36 (P36)

En relación con esta pregunta lo primero que se debate es que no cumple con el criterio de la actividad objeto de evaluación denominada análisis jurisprudencial o de casos pues no busca que el discente ponga en práctica las propuestas metodológicas aprendidas, en un determinado problema que será planteado por la Escuela Judicial. Esta actividad debe inexorablemente consistir en la resolución de problemas a partir del análisis jurisprudencial o planteamiento de caso que, según el tipo de programa, podrán ser jurídicos o no jurídicos, es decir busca que luego de analizar un caso o problema determinado el discente llegue a una conclusión atendiendo las habilidades y competencias adquiridas.

Sin embargo, esta pregunta en concreto en realidad plantea un cuestionamiento o control de lectura memorístico, pues la clave de respuesta exige un total control nemotécnico y no analítico, veamos.

La pregunta hace referencia al texto obligatorio “Desarrollo del talento humano basado en competencias” (Martha Alles páginas 248-277) y cuestiona sobre una organización que pretende implementar acciones de **codesarrollo** entre sus trabajadores, con el propósito de potenciar la competencia de liderazgo y evaluar sus resultados, en síntesis, la pregunta nos interroga sobre cómo se perfecciona o materializa el codesarrollo propuesto por la empresa para sus empleados.

Para la escuela la clave correcta corresponde a talleres que contemplen espacios de entrenamiento y retroalimentación de los empleados a cerca del liderazgo, es decir, a modo grupal.

La respuesta que marqué corresponde al diseño guías de desarrollo con lecturas y películas sobre cómo alcanzar el liderazgo, y que los empleados saquen conclusiones útiles para cada uno, es decir, a modo individual.

Al respecto debe decirse que la Escuela evaluó el componente de codesarrollo en su sentido amplio, empero no en contexto coherente, de allí que basta con revisar la lectura obligatoria en su paginado para ver el siguiente apartado de la página 273 del texto en mención:

Codesarrollo

Esta es la denominación que en nuestra metodología les damos a los **clásicos cursos de capacitación**, ya que entendemos que los mismos, para ser efectivos, deben tener un agregado específico, tal como se ha explicado en el capítulo 5: aun bajo la estructura de un seminario, curso o taller, estas actividades deben permitir poner en juego la competencia, y ofrecer además un espacio de reflexión sobre lo actuado.

El área de Formación de las organizaciones, o las personas responsables de este tipo de actividades, **pueden diseñar sus acciones de codesarrollo** a partir de las **guías de desarrollo**.

Las lecturas, películas y referentes pueden servir como objetos de estudio y análisis para lograr el codesarrollo.

La información suministrada en las guías de desarrollo puede servir de inspiración a personas con formación adecuada para el diseño de actividades de formación para adultos, en especial integrantes de una misma organización. Para ello sugerimos leer en especial el capítulo 5 del presente trabajo,

Como se puede apreciar, el mismo texto genera ambigüedad en la pregunta y sus claves de respuesta, pues resulta más que plausible que si un acápite de la lectura obligatoria con el título **codesarrollo** establece expresamente que es un símil de los *clásicos cursos de*

capacitación y que el área de formación de las mismas organizaciones puede diseñar acciones de *codesarrollo* a partir de *guías de desarrollo* en las cuales las lecturas, películas y referentes pueden ser objeto de estudio y análisis para lograr el reiterno “*codesarrollo*” es apenas lógico que la clave por mí marcada no es incorrecta, puesto que el mismo texto obligatorio la permite, en tal sentido y ante la latente ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P36** no cumplen con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mí erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

TALLER

Pregunta 38 (P38)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer como se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P38** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 38 de habilidades humanas tenía como clave correcta el apartado literal del resumen de la lectura “REYES, Julio (2012). Las cuatro dimensiones de la comunicación interna. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Cuaderno 40. pp 127-138 ISSN 1668-5229.” Como se describe en la imagen que sigue.

Fecha de recepción: julio 2011
Fecha de aceptación: octubre 2011
Versión final: abril 2012

Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna

Julio Reyes *

Resumen: Cada día son más las consultoras globales que se interesan en las comunicaciones internas, dado el impacto que tienen en cuatro grandes ámbitos de la gestión organizacional. Existe amplio consenso sobre el rol de las comunicaciones internas para alinear a los integrantes de una organización. Esto implica, orientarlos sobre las conductas necesarias para hacer real los objetivos estratégicos de la organización; y, al mismo tiempo, fortalecer aquellos comportamientos que constituyen la identidad y tangibilizan los valores corporativos. También sobre la importancia de tener colaboradores comprometidos, que no sólo conozcan, sino también valoren la propuesta que la organización hace para retenerlos y mantenerlos motivados. Finalmente, cada día es más evidente y relevante que una organización se vincule con su entorno y haga partícipes a sus colaboradores de su responsabilidad corporativa.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*gestión, conductas, objetivos e identidad*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto incluyó las palabras “*dimensiones, proyectos e innovación*”. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal

llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el resumen y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P38** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad y no en 7.5 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté $\frac{3}{4}$ del ítem en cuestión.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta **P38** puesto que erré al intercambiar la palabra conducta con dimensiones y si se observa con atención basta con buscar en cualquier texto de psicología para descubrir que la conducta humana se divide en cuatro dimensiones; biológica (desarrollo físico), cognitiva (cognoscitivo), evolutiva (emocional) y social o así lo han expresado Craig 1997 y 2009; Coon y Mitterer, 2010; Collin y col. 2012; kail y Cavanaugh, 2011; Morales, 2008 y Sarason, 1997, 2000 en su texto “Teorías del Desarrollo Humano” Página 2.

El desarrollo es multidimensional o interdisciplinario

RICE, 1997

El desarrollo humano es un proceso complejo que se divide en 4 dimensiones básicas: desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social.

Aunque cada dimensión subraya un aspecto particular del desarrollo hay una interdependencia considerable entre las áreas ejemplo las capacidades cognitivas pueden depender de la salud física y emocional como de la experiencia social cada dimensión refleja a las otras. Pero cada área es importante para entender el desarrollo lo que da un aspecto unidisciplinario.



Por lo que, al elegir dimensiones sobre conducta, el texto puesto en evaluación no pierde coherencia ni sentido, de modo que la respuesta es correcta porque básicamente la conducta se divide en dimensiones.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P38** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida en su totalidad, y los **2,5 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 39 (P39)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer como se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque

centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P39** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 39 de habilidades humanas tenía como clave correcta el apartado literal del resumen de la lectura “GOLEMAN, Daniel. (enero 2004). ¿Qué hace a un líder? Harvard Business Review” Como se describe en la imagen que sigue.

La autoconciencia incluye la comprensión de los valores y objetivos individuales. Alguien que tiene conciencia de sí mismo sabe hacia dónde se dirige y por qué. Será capaz, por ejemplo, de rechazar con convicción una oferta laboral tentadora en lo económico, pero que no encaja con sus principios u objetivos de largo plazo. Una persona que carece de autoconciencia tiende a tomar decisiones que pasan a llevar valores ocultos y por ende ocasionan dilemas internos. “La

ENERO 2004

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*autoconciencia, conciencia*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto incluyó las palabras “*motivación, conocimiento, autorregulación y orgullo*”. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada

conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P39** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida -parcialmente- la pregunta **P39** puesto que erré al intercambiar la palabra conciencia con conocimiento y si se observa con atención el tener *conciencia de sí mismo* es un claro sinónimo de tener *conocimiento de sí mismo*, y así lo ha ejemplarizado la Real Academia de la Lengua Española al señalar los sinónimos de la palabra conciencia⁹.

SINÓNIMOS O AFINES DE **conciencia**

- **conocimiento, consciencia, discernimiento, entendimiento, reflexión, percepción, pensamiento.**
- **moralidad, remordimiento, escrúpulo, pesar², reparo, recato, ético¹.**

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P39** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida parcialmente, y los **5 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

⁹ <https://dle.rae.es/conciencia>

Pregunta 41 (P41)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer como se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P41** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 41 de habilidades humanas tenía como clave correcta varios apartados literales del texto obligatorio “Desarrollo del talento humano basado en competencias” (Martha Alles páginas 248-277) Como se describe y resalta en la imagen que sigue.

La intencionalidad

En este punto de nuestra exposición queremos hacer hincapié en un concepto que nos parece de capital importancia para lograr el desarrollo de una competencia: *la intencionalidad*. Es decir, tomar conciencia de que a través de una determinada actividad se pueden lograr ciertos objetivos –en este caso en particular, el desarrollo de una competencia–. De alguna manera se obtiene un “valor agregado” al tomar conciencia de que las prácticas/acciones aportan al desarrollo. Quizá alguien juegue al fútbol o sea padre hace años y años... pe-

En la obra de Cole⁷ se da la siguiente definición de coaching: entrenamiento gerencial –individual o grupal– caracterizado por un entrenamiento en la tarea (on the job), acompañado por una evaluación continua y apoyo y consejo personales. El coaching hace referencia a entrenamientos intensivos a una o varias personas por otra cuyas capacidades son indiscutidas. En cuanto a la figura del coach, dice que debe ser una persona con altas capacidades, probadas ante sí mismo, ante sus pares y públicamente. Cole hace una clasificación interesante de los diversos tipos de coaching, a

Como bien surge de nuestra definición de desarrollo (“las acciones tendientes a alcanzar el grado de madurez o perfección deseado en función del puesto de trabajo que la persona ocupa en el presente o se prevé que ocupará más adelante”) y de la opinión tanto propia como de diferentes auto-

personas qué competencias deben desarrollar según las evaluaciones efectuadas (por ejemplo, en las evaluaciones de desempeño), y luego *les dice* cómo hacerlo. En base a esta perspectiva, el individuo no desarrolla las competencias que a él *le parecen* más importantes sino las que la organización ha determinado como necesarias para que sea exitoso en su puesto de trabajo.

Las guías de desarrollo deberán estar disponibles para que cada persona interesada en su crecimiento personal pueda decidir libremente, entre los caminos sugeridos, aquellos que coincidan con sus posibilidades y preferencias.

Esta última imagen dentro del acápite de autodesarrollo dirigido (página 270)

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente varios apartados resaltados en azul para que los discentes seleccionaran la definición literal de cada uno de los conceptos pedidos, se itera la intención del ítem P41 no requería la construcción

de conocimiento alguno, sino que básicamente para acertar se pedía que la memoria recordara exactamente la definición de los conceptos y no su contenido. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P41** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad no en 5 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 1/2 del ítem en cuestión.

Pregunta 42 (P42)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P42** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 42 de habilidades humanas tenía como clave correcta varios apartados literales del texto obligatorio “CARRO-SUÁREZ, Jorge, SARMIENTO-PAREDES, Susana & ROSANO-ORTEGA, Genoveva. (2017). La cultura organizacional y su influencia en la sustentabilidad empresarial. La importancia de la cultura en la sustentabilidad empresarial. Estudios Gerenciales, 33(145), Universidad ICESI (pp. 352-365.) Como se describe y resalta en la imagen que sigue.

2.1.1. *Involucramiento*

«Es el empoderamiento de la gente, la construcción personal alrededor de los equipos y el desarrollo de la capacidad humana en todos los ámbitos de la organización. Considera el compromiso de los diferentes trabajadores y su capacidad de influencia» (Denison et al., 2003,p. 208). Se subdivide en empoderamiento, orientación al equipo y desarrollo de capacidades.

2.1.2. *Adaptabilidad*

«Capacidad de responder a los cambios del entorno y a las nuevas exigencias de los clientes. Considera que las organizaciones bien integradas son, con frecuencia, las más difíciles de cambiar y que la integración interna y la adaptación externa pueden reforzarse entre sí» (Denison et al., 2003,p. 208). Se subdivide en aprendizaje organizacional, enfoque al cliente y creación del cambio.

2.1.3. *Misión*

«Se refiere al sentido claro de propósito o dirección que define las metas organizacionales y los objetivos estratégicos. Se expresa en la visión de lo que la organización quiere ser en el futuro» (p. 208). Este rasgo se puede observar en dirección e intención estratégica, metas y objetivos, y visión.

2.1.4. *Consistencia*

«Considera que el comportamiento de las personas se fundamenta en un conjunto de valores centrales; el personal posee la habilidad de lograr acuerdos —aun cuando existan diversos puntos de vista—, y las actividades de la organización están bien coordinadas e integradas» (Denison et al., 2003,p. 208). Las organizaciones que poseen esta característica tienen una cultura distintiva y fuerte que influye significativamente en el comportamiento de las personas. Se subdivide en coordinación e integración, acuerdos y valores centrales.

Este modelo también a menudo ha sido usado como parte del proceso de diagnóstico del perfil específico de cada organización con el fin de resaltar las fortalezas y debilidades de su cultura, sugiriendo estrategias que impulsen su efectividad (Denison et al., 2003).

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente varios apartados resaltados en azul para que los discentes seleccionaran la definición literal de cada uno de los conceptos pedidos, se itera la intención del ítem P42 no requería la construcción de conocimiento alguno, sino que básicamente para acertar se pedía que la memoria recordara exactamente la definición de los conceptos y no su contenido. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura

memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P42** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad no en 5 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 1/2 del ítem en cuestión.

PROGRAMA 2. INTERPRETACIÓN JUDICIAL Y ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA

CONTROL DE LECTURA

Pregunta 1 (P43)

“(…) el derecho, en sí, reconoce más tipos de fuentes formales tales como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, entre otros. Según (Gény 1900) “El límite de la interpretación de la ley es cuando se encuentra no sólo ante obscuridades e incertidumbres, sino ante lagunas. En este caso no es posible encontrar la voluntad del legislador (subjetiva). Es aquí donde aparecen otros procedimientos en la búsqueda de las reglas jurídicas: 1.- La interpretación que consiste en superar las incertidumbres y oscuridades de la ley. 2.- La libre investigación que consiste en la elaboración de las reglas jurídicas con independencia de la ley escrita (...)”

Enunciado

De acuerdo con el texto anterior, se concluye que la escuela que propone el criterio de interpretación judicial al que se refiere el texto citado es la escuela

Distractores

exegética.
histórica.
del sicologismo.

Clave

científica Francesa.

Incumplimiento de criterios comunicativos

Como se verá más adelante, la calidad de la fuente de información para este ítem es bastante deficiente. En esta medida, el cumplimiento de las normas gramaticales resulta ampliamente comprometido. Por ejemplo, en la segunda oración de la cita se observa que los autores o editores originales no diferencian entre cita narrativa y cita parentética, de tal manera que ponen entre paréntesis el autor y el año; así se deja sin objeto a la preposición *según* y se construye una secuencia de palabras que no sigue las reglas del español. Por demás, si se asumiese el contenido del paréntesis como si fuese el objeto de la preposición, en todo caso debería existir una coma después de esta locución preposicional y la cita debería iniciar en minúscula.

Ahora bien, en relación con el enunciado y su unidad gramatical con las opciones de respuesta, se tiene, en primer lugar, que se repite innecesariamente la palabra “escuela”; perfectamente, aquí se podría generar un elipsis de un vocablo que se sobreentendería claramente. De hecho, al no elidirlo se presenta una mayor carga cognitiva para la lectura del enunciado. En segundo lugar, precisamente, la clave de respuesta tiene un error de ortografía: “Francesa” con mayúscula. Como se puede observar en el Apéndice 5 del Diccionario Panhispánico de Dudas¹⁰, los gentilicios, como *francés*, no van en mayúscula en español. En todo caso, un error de ortografía en la clave de respuesta razonablemente hace dudar al evaluado por más que la identifique como correcta.

Adicionalmente, la forma en la que hace la citación resulta confusa, dado que no se jerarquiza qué está citando el constructor de ítems y qué está citando la fuente de información consultada. En particular, se evidencia que se usan el mismo tipo de comillas para ambos tipos de información. En esta medida, no le queda claro al evaluado qué pertenece a cada momento y contexto del proceso comunicativo.

En resumen, el ítem incumple normas y convenciones formales, y de significado del español, a la vez que no permite la interacción comunicativa adecuada para cada contexto. Además, falla en presentar y seleccionar conocimientos y referentes relevantes y compartidos, debido a una incorrecta disposición, organización y jerarquización de la información.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Para comenzar, en relación con los elementos psicométricos, la discusión anterior permite afirmar, sin lugar a dudas, que el ítem falla en relación con su claridad. Además, como se ha visto y se verá, el hecho de que se use una fuente de información de calidad dudosa lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se pretende

¹⁰ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario panhispánico de dudas [sitio web]. España; [Consultado: 16 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.rae.es/dpd/ayuda/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios>

medir¹¹. En últimas, el hecho de que la respuesta correcta se derive de que esa cita esté en un apartado con cierto identificador o cierto título no lo hace eficiente en términos de discriminación psicométrica. De hecho, el ítem está formulado en términos de una aptitud (o competencia) genérica, y no en términos de una competencia específica de interpretación judicial. Esto se confirma con el uso del lenguaje “[d]e acuerdo con el texto anterior, se concluye que (...)”.

A continuación, se desarrollan los detalles de estos elementos:

Fuente de información

La lectura pertenece a una revista denominada *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, la cual no tiene un alto impacto académico en comparación con otras publicaciones destacadas en el campo del derecho. Aunque la revista está indexada en bases de datos bibliográficas regionales, como Dialnet, que cubre publicaciones de América Latina y el Caribe, no se encuentra indexada en bases de datos bibliográficas de alto impacto internacional, como Web of Science, Scopus, EBSCOhost o ProQuest.

Asimismo, es una revista que maneja un incentivo económico para la publicación de sus escritos y aborda una cuestionable multiplicidad temática. Esto puede afectar el rigor, la profundidad, la calidad y las perspectivas en derecho de la revista. Igualmente, los autores carecen de reconocimiento y trayectoria en relación con las temáticas tratadas para formular la pregunta del cuestionario.

Por otro lado, no es posible establecer la obra de Gény que se usa para efectos de hacer las afirmaciones y presentación del autor alrededor de “fuentes formales”. En concreto, no está la referencia bibliográfica. De hecho, luego de una ardua búsqueda, se encontró que lo que, según el texto, era una cita directa de Gény, en realidad, pertenece a la obra *Introducción analítica del derecho* de Rolando Tamayo y Salmorán. Estos errores de citación son garrafales y rayan con la vulneración de derechos de autor, máxime cuando los autores de texto base para el ítem no citan a Tamayo y Salmorán; y, además, hacen creer que el parafraseo de este último autor sobre Gény son palabras de Gény.

Por demás, son múltiples los errores de cohesión, coherencia, citación, ortografía y rigor teórico del artículo en cuestión.

Uso inadecuado de fuentes secundarias

¹¹ Syllabus interpretación judicial y estructura de la sentencia. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, p. 5. “Competencia específica: Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial”.

La lectura en la que se basa la formulación de la pregunta es de carácter secundario. Esto es cuestionable, dado que se debería recurrir a fuentes primarias relacionadas con el autor y la escuela que se pretende presentar. Por otro lado, el artículo citado está estructurado y enfocado en el contexto ecuatoriano, con relación a su constitución. A pesar de que se menciona a Gény, no se hace con rigor académico y teórico, de igual forma no hay hipótesis y objetivos claros en el artículo que permitan sustentar la forma y el porqué se usa el autor para apoyar el artículo.

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta no cumplen con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ La cita proviene de un artículo que carece de rigor académico, y no satisface la comprensión teórica del contexto propio de la interpretación judicial. Más bien, se basa en una referencia vaga sobre una presunta apuesta de análisis de la Constitución del Ecuador. En esta medida, se incumplió con los referentes del proceso de formación (Acuerdo, Syllabus) en los siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoraren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico¹².
- ⇒ Por lo precario del contenido y el impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga, se genera confusión en la presentación del contenido teórico y metodológico, respecto de las competencias de interpretación judicial¹³.

Análisis de contenido

- ⇒ “El límite de la interpretación de la ley es cuando se encuentra no sólo ante obscuridades e incertidumbres, sino ante lagunas.”¹⁴

Respecto de este aparte existe una imprecisión y confusa presentación dado que Gény al referirse a *límite*, no se refiere al límite de la interpretación, sino que en estricto sentido al límite de la ley, pues la libre investigación científica reconoce los límites de la ley ¹⁵. En este sentido, los *límites de la interpretación de la ley* son superados por procedimientos, en términos del autor, como la analogía¹⁶.

¹² ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

¹³ Syllabus de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia, pp. 1-

¹⁴ TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando. Introducción analítica al estudio del derecho. 2da edición. México, D.F: Temis. 2011. [No citado por Trejo *et al.*, autores del texto base para el ítem]

¹⁵ GÉNY, Francisco. Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo. Granada: Editorial Comares, S.L, 2000, pp. 79,88,89,238, 240.

¹⁶ Ibidem, pp. 235, 240, 245,246, 501.

⇒ “La libre investigación que consiste en la elaboración de las reglas jurídicas con independencia de la ley escrita.”¹⁷

Con relación a la afirmación según la cual se crean reglas con “independencia de la ley”, Gény expresa que el ejercicio de elaboración o creación no se puede dar con la misma amplitud de la ley, o no puede modificar la ley¹⁸. Además, el autor considera que la ley es la primera fuente, y sólo opera la aplicación de la libre investigación científica cuando es errónea, ambigua o insuficiente [la ley]¹⁹. En este orden de ideas, es inapropiado y falta de pertenencia la cuestionada expresión, pues confunde al lector.

⇒ “De acuerdo con el texto anterior, se concluye que la escuela que propone el criterio de interpretación judicial al que se refiere el texto citado es la escuela”

La *libre investigación científica* no es una escuela. El propio autor (Gény) afirma que este término se refiera a la teorización de un método de interpretación, el cual implica una serie de procedimientos. En este sentido, también es equivocado referirse a *criterio*, dado que lo presentado en el confuso texto son postulados de la idea de *libre investigación científica*, y lo que da lugar a su aplicación no es un criterio sino un procedimiento²⁰.

Respuestas posibles

Visto todo lo anterior, y teniendo en cuenta que, está formulada de forma incorrecta la pregunta, las respuestas no tienen coherencia y cohesión frente a lo preguntado; es decir, no existe una respuesta correcta posible. En particular, es equivocada la referencia “escuela”, respecto de lo presuntamente correcto: la teoría del método de la *libre investigación científica*²¹. Se debe insistir acá que, al parecer, el constructor de ítems considera como respuesta correcta “La Escuela Científica Francesa” (sic) sólo porque la cita presentada aparece en el texto fuente en un apartado con ese título. En últimas, todos los elementos presentados anteriormente constituyen formas de inducir en error al evaluado, de tal manera que no pueda identificar la clave que el constructor pretendía.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P43**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P43** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

17 TAMAYO y SALMORAN, Op. Cit. [No citado por Trejo *et al.*, autores del texto base para el ítem]

18 Ibidem, pp. 468-469, 501.

19 Ibidem, pp. 195, 213, 468.

20 Ibidem, pp. 11, 12, 25, 235, 533, 534.

21 Ibidem, pp. 11, 176.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 2 (P44)

A continuación, encuentra una cita del Texto de Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre “la argumentación jurídica y sus teorías”:

(...) si en un caso de ejercicio de la libertad de prensa invoca un tercero su derecho a la intimidad. Ambos son derechos de raigambre constitucional y de igual jerarquía normativa: el derecho a la información y a la intimidad, pero ante un conflicto de intereses el juez debe decidir cuál de ambos derechos prevalecerá en el caso planteado (arts. 1, 14, 19, 38, 41, 42 y 43, Constitución Nacional). La tarea del juez no sólo refiere el caso a la ley por subsunción deductiva, sino que también refiere la ley al caso mediante principios y valoraciones. El caso está sometido a la ley por subsunción sólo después de que el juez mediante un proceso de selección y valoración la considera aplicable al caso planteado (...)

Enunciado

En la información expuesta, se hace referencia al método de interpretación denominado

Distractores

ponderación judicial.
subsunción normativa.
precedente judicial.

Clave

construcción normativa

Incumplimiento de criterios comunicativos

Se observa el incumplimiento algunas normas gramaticales y de ortografía. En primer lugar, se omite pronombre reflexivo “se” en la frase “A continuación, encuentra una cita (...)”, lo que lleva a pensar inicialmente al lector que se trata del imperativo en segunda persona del verbo encontrar. En segundo lugar, hay incorrecta ubicación de mayúscula en “Texto” y

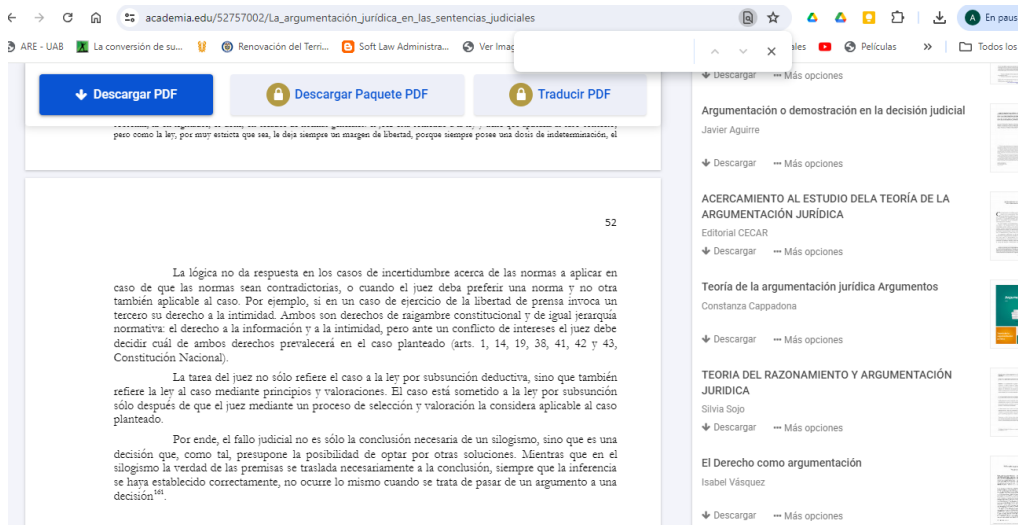
Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Fuente de información

Se afirma en la pregunta que la cita del texto corresponde a “*Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre la argumentación jurídica y sus teorías*”, sin embargo, el texto compartido por el mismo autor en Academia²³ corresponde a otro título, el cual se denomina “*La argumentación jurídica en las sentencias judiciales*” y responde a una tesis doctoral, la cual dirigió Amós Arturo Grajales, de manera que la cita no corresponde al texto presentado en la pregunta.



²⁴ Ibidem.



Tomado de la web de academia²⁵

Incumplimiento al Acuerdo y al Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta, no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ Dado que la cita carece de rigor en su citación y presentación, no se satisface la comprensión teórica del contexto propio de la interpretación judicial, sino que se basa en una referencia vaga, con lo cual se incumplió con el acuerdo en los siguiente puntos: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico.²⁶
- ⇒ Por la formulación errada de la pregunta, así como por la presentación de una referencia vaga y equivocada, se genera confusión en la presentación del contenido a nivel teórico y metodológico, respecto de las competencias de interpretación judicial²⁷.

Análisis de contenido

La formulación de la pregunta carece de un contexto claro, dado que el ejemplo puede derivar en dos respuestas posibles. Sin el contexto que aparece más arriba y abajo en el texto original, se induce a confusión y error, dado que, en el mismo texto, para casos que puedan tipificarse como difíciles, podría operar para la ponderación. Es este entendido, el caso puede resolverse válidamente desde dos perspectivas (“ponderación judicial” o “construcción

²⁵ Ibidem

²⁶ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

²⁷ Syllabus de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia, pp. 1-

normativa”). Se debe insistir en el hecho que el ítem apela a la memoria y no ninguna competencia específica del proceso de formación²⁸.

Por otro lado, y no menos importante, se debe anotar que en el caso colombiano, se aplica, a casos como el ilustrado en la cita en cuestión, la ponderación a través de *test constitucionales* contruidos por la jurisprudencia de la corte constitucional²⁹.

Un caso es fácil cuándo la solución es el resultado de aplicar una regla del sistema y dicha solución es consistente (lógicamente compatible) con las otras reglas del sistema y coherente (valorativamente compatible) con los principios del sistema. Por el contrario, es difícil cuando la solución no proviene directamente de la aplicación de una regla del sistema, sino que para ser encontrada requiere que se despliegue una intensa actividad deliberativa y justificativa.

Un caso fácil no exige deliberación, sino simple aplicación de la regla (*juris-dictio*, decir el derecho para el caso). Un caso difícil exige deliberación práctica (*juris-prudentia*, **ponderar** el derecho para el caso).

Desde el nuevo paradigma, la discrecionalidad del sujeto llamado a resolver el caso no se concibe ya como “libertad” sino como “responsabilidad”, como un deber. Por ello, cuanto más discrecional es un acto (menos reglado está) más justificación requiere.

Tomado de la web de Academia³⁰

Respuestas posibles

Visto todo lo anterior, y teniendo en cuenta que, está formulada la pregunta de forma incorrecta, razonablemente, se postulan dos respuestas con alta probabilidad de correctas. Éstas serían “construcción normativa” y “ponderación judicial”. Téngase presente, de nuevo, que constructor de ítems parece basarse única y exclusivamente en el hecho de que la cita aparece en un apartado con el título *Construcción normativa* para dar esa como respuesta correcta. En este sentido, como también se ha mencionado, el ítem no tiene vocación de discriminación efectiva.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P44**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P44** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en

²⁸ Syllabus interpretación judicial y estructura de la sentencia. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, p. 5. “Competencia específica: Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial”.

²⁹ QUINCHE, Manuel Fernando. “Los test constitucionales”. Bogotá – Colombia: Editorial Temis S. A., 2023, p. xii-xiii.

³⁰ NEGRI, Nicolás Jorge. “La Argumentación Jurídica En Las Sentencias Judiciales.”, p.26. Web.

aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 8 (P50)

Respecto a esta pregunta respetuosamente solicito se me adicione el puntaje conforme la RESOLUCIÓN No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 que en su parte motiva dispuso:

“Durante el proceso de análisis posterior a la aplicación de la evaluación, se obtuvieron indicadores psicométricos para todos los ítems que componían la prueba. Como resultado del proceso, se detectaron alertas en los índices de discriminación, lo cual indicó posibles problemas en su capacidad para medir adecuadamente el rendimiento de los discentes. Estas preguntas fueron revisadas minuciosamente por un grupo de expertos, quienes determinaron que las preguntas P35, P50, P143 y P295 no cumplían con los estándares esperados de validez y confiabilidad, por lo que en un esfuerzo por mantener la equidad en la evaluación, se optó por imputar el acierto a todos los aspirantes en estas preguntas específicas. Adicionalmente, para la pregunta P275 se identifica como un caso tipo 2, alerta de doble clave por lo que optó por reconocer el punto a los discentes que hubieren contestado cualquiera de las opciones validas”.

Por lo cual solicito se me adicione un total de **1,25 puntos** a mi puntaje parcial.

Pregunta 9 (P51)

(...) podemos afirmar que antes de evaluar argumentos se debe: 1) reconocer los razonamientos cuando aparecen; 2) identificar sus premisas y sus conclusiones; 3) reconstruirlos haciendo explícitos los enunciados tácitos (...) Así mismo, se señala en el texto que existen dos criterios para la identificación de premisas. (Bonorino R. y Peña J. Argumentación judicial, 2008, p. 28 y 38).

Enunciado

Para resolver los problemas o casos, de acuerdo con los criterios de la sentencia estructurada, existen dos criterios para la identificación de las premisas, estos son:

Distractores

Verdadero y falso
Argumento y argumentación
Tácito y expreso

Clave

Incumplimiento de criterios comunicativos

La cita presentada no se contextualiza de manera adecuada, dado que no se le anuncia al evaluado que lo que sigue a continuación es precisamente texto traído literalmente de alguna fuente de información. Además, el texto original se encuentra cercenado de tal manera que se omiten elementos relevantes para su comprensión. A ello, se agrega la desacertada omisión del uso de comillas. En esta medida, no hay una correcta jerarquización de la información. En relación con la coherencia que debe guardar el enunciado con el contexto, se identifica que no hay elementos léxicos (palabras), ni sintácticos (frases, oraciones), ni mucho menos semánticos que permitan identificar la relación entre el primero y el segundo. En últimas, no es evidente, comunicativamente, que “los criterios de la sentencia estructurada” tengan que ver con la evaluación de argumentos citados previamente. Esto sólo se podrá advertir a partir de una memorización de los contenidos de la fuente de información. Al parecer, se “juega” a borrar apartados del texto para ver si el evaluado los recuerda (o los “adivina”). Esto, como se verá, desvía los objetivos de la evaluación e impone cargas cognitivas innecesarias.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Para comenzar, en relación con los elementos psicométricos, la discusión anterior permite afirmar, sin lugar a dudas, que el ítem falla en relación con su claridad. Además, como se ha visto y se verá, el hecho de que se use una fuente de información de calidad dudosa lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se pretende medir³¹. Además, el ítem carece de claridad al no definir claramente qué se entiende por “criterios de la sentencia estructurada” y cuáles son los criterios específicos para la identificación de premisas. Esto sólo se podrá advertir a partir de una memorización de los contenidos de la fuente de información. Como ya se dijo, al parecer, se “juega” a borrar apartados del texto para ver si el evaluado los recuerda (o los “adivina”). Esto desvía los objetivos de la evaluación e impone cargas cognitivas innecesarias. Adicionalmente, la formulación de los distractores no presenta opciones mutuamente excluyentes ni equitativas, lo que afecta la validez de la evaluación.

Fuente de información

Aunque se menciona a Bonorino y Peña como fuente, no se presenta de manera clara y explícita cómo se relacionan los criterios mencionados con su obra. La referencia a páginas específicas (p. 28 y 38) sin una explicación detallada puede inducir a error si el contenido no

³¹ Syllabus interpretación judicial y estructura de la sentencia. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, p. 5. “Competencia específica: Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial”.

es accesible o conocido por los evaluados. Si bien el contexto menciona a Bonorino R. y Peña J., no se proporciona suficiente información sobre cómo estos autores definen y diferencian los criterios de identificación de premisas. Esto dificulta la validación de la clave correcta y podría ser confuso para los evaluados que no tengan acceso al texto original.

Uso inadecuado de fuentes secundarias

El ítem se basa en una interpretación que no se presenta de manera detallada y precisa. La falta de contexto y explicaciones adicionales sobre cómo se aplican los criterios mencionados afecta la validez del ítem.

Además, La lectura en la que se basa la formulación de la pregunta es de carácter secundario. Esto es cuestionable, dado que se debería recurrir a fuentes primarias relacionadas con el autor y el problema que se pretende presentar.

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta, no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

Dado que la cita proviene de un texto que adolece de rigor teórico, se incumplió con el acuerdo en los siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico.³²

Por lo precario de contenido e impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga, se incurre en imprecisiones de referencia respecto del uso de las categorías y conceptos, dado que se presentan de forma errada y sin rigor académico.

Análisis de contenido

La lectura pertenece a un texto editado en el año 2008. Esto es cuestionable, dado que existen muchos desarrollos y textos que tienen un alto impacto académico. Así mismo, se pudo acudir a fuentes primarias o textos que especializados del campo la estructura de la sentencia judicial.

Respecto de la cita es de forma incorrecta, dado que la cita no se ajusta a ningún sistema conocido, cuando se pretende citar dos páginas en teoría de forma textual.

³² ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, "Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el "IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

El texto tiene imprecisiones, lo cual genera confusión, dado que la cita se refiere a dos criterios para la identificación de premisas, lo cual dentro de la Unidad 1 del libro Argumentación judicial de Bonorino y Peña está en el contexto de la “estructura argumentativa”, cuyos objetivos a abordar son:

- “– Reflexionar sobre la naturaleza argumentativa de las sentencias judiciales
- Diferenciar las tareas de identificación y de reconstrucción de argumento y argumentaciones.
- Relacionar las nociones de fundamentación de la decisión y solidez de la argumentación”

En este sentido, la pregunta está mal construida y formulada, dado que se pregunta por la estructura de la sentencia, lo cual implica otro tipo de respuesta diferente al campo de la argumentación propiamente dicho, pues implica realmente se trata de las partes soporte de la sentencia judicial.

Por su parte, en el contexto, se menciona que existen dos criterios para la identificación de premisas según Bonorino R. y Peña J. (2008). Sin embargo, los distractores proporcionados (verdadero y falso, argumento y argumentación, tácito y expreso) no se alinean con los criterios mencionados en la clave correcta (semántico y lógico). Esta discrepancia sugiere una posible confusión o mala interpretación de los criterios propuestos por los autores citados. En resumen, las opciones de respuesta presentadas (distractores) no guardan una relación coherente y cohesiva con el enunciado. En particular, las opciones "verdadero y falso", "argumento y argumentación", "tácito y expreso" no se relacionan claramente con los criterios semánticos y lógicos mencionados en la clave correcta. Esto genera confusión y no permite una evaluación precisa del conocimiento de los evaluados. Estas objeciones destacan los problemas de claridad y relevancia del ítem, así como la falta de coherencia en las opciones de respuesta.

Respuestas posibles

Visto todo lo anterior, y teniendo en cuenta que, está formulada de forma incorrecta la pregunta, las respuestas no tienen coherencia y cohesión frente a lo preguntado; es decir, no existe una respuesta correcta posible. En particular, por las imprecisiones y equivocaciones antes formuladas, se trata de una pregunta sin fundamento en el texto citado; y que, además, reproduce generalizaciones apresuradas que no concuerdan con la realidad de las tesis interpretativas esbozadas por las escuelas.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P51**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P51** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener

la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 15 (P57)

Según Grajales y Negri (Sobre la argumentación jurídica y sus teorías, 2018, p. 50) explicando las ideas de Alexy “la ley de la ponderación se formula así: “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro” y se concreta a través de tres variables en la fórmula del peso”. “En cuanto a la afectación de los principios y al peso abstracto, según la afectación o el peso sea leve, medio o intenso y en cuanto a la seguridad de las premisas fácticas, según puedan calificarse de seguras, plausibles o no evidentemente falsas”.

Enunciado

A partir del texto enunciado, en los que existiera un empate, porque el peso de los dos principios es idéntico:

Distractores

debe aplicarse la regla de la proporcionalidad en sentido estricto.

la decisión de dar prioridad al principio que tiene una mayor relevancia social

los jueces son libres de acudir a su subjetividad para resolver el caso.

Clave

entrarían en juego las reglas sobre la carga de la argumentación.

Incumplimiento de criterios comunicativos

El uso inadecuado de las comillas confunde al receptor y pone, sobre él, una carga cognitiva innecesaria. Ello se debe a que induce a pensar que el texto después de dicha palabra es otro

distinto. Además, no es evidente comunicativamente, que, a partir del texto que contextualiza el ítem, se puede extraer la clave. Parecería que simplemente quien elaboró el ítem se limitó a omitir una parte posterior del texto citado. Con ello, buscaba que a través de un proceso memorístico el estudiante recordara la continuación del texto para obtener o “adivinar” la respuesta. Esto desvía los objetivos de la evaluación e impone, una vez más, cargas cognitivas innecesarias.

Por demás, la cita no estrictamente textual y se encuentra ampliamente cercenada. El texto termina siendo un parafraseo que se anuncia erradamente como una cita textual. Esto afecta gravemente la confiabilidad del ítem, por cuanto un evaluado que haya procesado la lectura tendrá mucha dificultad para recuperar información que no es precisa o se tergiversa.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Como se ha visto y se verá, el hecho de que se use una fuente de información mal referenciada lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se pretende medir. En últimas, el hecho de que la respuesta correcta se derive de que esa cita esté en un apartado con cierto identificador o cierto título no lo hace eficiente en términos de discriminación psicométrica. De hecho, el ítem está formulado en términos de una aptitud (o competencia) genérica, y no en términos de una competencia específica de interpretación judicial; a saber, según el syllabus: **“Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial.”³³**

Como se vio, este ítem tiene posee problemas comunicativos, los cuales redundan, en últimas, en cargas cognitivas innecesarias para el discente; a saber: (1) falta de contexto; (2) presentación de un parafraseo como cita textual.

Fuente de información

La lectura pertenece a un texto editado en el año 2018. Esto es cuestionable, dado que existen muchos desarrollos y textos que tienen un alto impacto académico. Así mismo, se debió acudir a fuentes primarias o textos que especializados del campo la argumentación jurídica. En el caso concreto, esto implica haber acudido a fuentes primarias como, por ejemplo: *Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios* y *Teoría de los Derechos Fundamentales*, ambos de Robert Alexy.

Respecto de la cita, se presenta de forma incorrecta, dado que no corresponde al texto suministrado para consulta obligatoria.

33 Syllabus de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia, pp. 5

Se afirma en la pregunta que la cita del texto corresponde a “*Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre la argumentación jurídica y sus teorías*”, sin embargo, el texto compartido por el mismo autor en Academia³⁴ corresponde a otro título, el cual se denomina “*La argumentación jurídica en las sentencias judiciales*” y responde a una tesis doctoral, la cual dirigió Amós Arturo Grajales, de manera que la cita no corresponde al texto presentado en la pregunta.



Tomado de la web de academia³⁵



Tomado de la web de academia³⁶

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

³⁴ NEGRI, Nicolás Jorge. “La Argumentación Jurídica En Las Sentencias Judiciales.” Web. https://www.academia.edu/52757002/La_argumentaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica_en_las_sentencias_judiciales

³⁵ Ibidem

³⁶ Ibidem

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta, no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ Dado que la cita proviene de un texto que adolece de rigor teórico, se incumplió con el acuerdo en los siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico³⁷.
- ⇒ Por lo precario de contenido e impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga y no perteneciente al texto de consulta da lugar a imprecisiones de referencia respecto del uso de las categorías y conceptos, dado que se presentan de forma errada y si rigor académico.

Análisis de contenido

- El texto carece de conectores lógicos que guíen al lector a través de la real ruta argumentación pretendida para luego dar las alternativas de respuesta. Esto dificulta la relación entre las distintas variables y conceptos presentados, además de las falencias teóricas y de referencia al traer una fuente secundaria que interpreta y presenta erradamente a Alexy.
- Sin un contexto que explique por qué es relevante la mal citada ley de la ponderación, el lector adolece de elementos incoherentes para entender su aplicación o importancia en situaciones prácticas, que por lo demás, debería exponerse desde el contexto jurídico colombiano como, por ejemplo, a través de lo que Manuel Quinche denominó "test constitucionales", los cuales son contruidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana.
- Repetición y ambigüedad: La repetición de términos como "afectación" y "peso" sin una clara definición o explicación contribuye a la confusión. La cohesión se ve comprometida cuando los términos no se relacionan adecuadamente entre sí.
- El fragmento tiene una falta de cohesión entre la definición de la ley de la ponderación y la explicación de las variables que se usan en la fórmula del peso. La transición entre estos conceptos no es fluida y correcta, porque la ley de la ponderación no es la metodología de trabajo en la argumentación en sí, sino que es un paso que implica ver la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, es decir, un paso dentro de la metodología de la argumentación a nivel constitucional³⁸.

³⁷ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, "Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que registrará el "IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021.", pp. 7 -10.

³⁸ ALEXY, Robert. "Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios". Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 99-100. Y ALEXY, Robert. "Teoría de los

- El aparte final sobre "afectación o el peso" y "seguridad de las premisas fácticas" está desconectada de la ley de la ponderación en sí, no sólo porque el autor de la fuente primaria no expresa esa tesis, sino porque la relación entre la afectación de principios y la calificación de las premisas no queda clara. Así también, la referencia a afectación de principios se analiza en el paso relacionado con la ley de la colisión³⁹.
- No tiene la referencia de un marco teórico preciso. Además, no se proporciona un contexto suficiente para entender la ley de la ponderación ni cómo se relaciona con otras teorías o principios de aplicación práctica, dado que la referencia es demasiado vaga.

En suma, el texto presenta serias deficiencias a nivel teórico al carecer de claridad y profundidad. La conexión entre ideas brilla por su ausencia, puesto no existen transiciones coherentes. Además, la falta de un marco teórico que ofrezca un punto de partida afecta las condiciones semánticas del texto. En este sentido, el texto está redactado con oscuridad, incertidumbre e indeterminación.

Respuestas posibles

Dadas las condiciones negativas del texto ya explicadas, el efecto frente a las posibles respuestas implica una conducción a interpretaciones caóticas y erróneas. Esto podría configurar ambigüedad por falta de rigor y clarificación semántica. Por otro lado, no se concluye que, sobre la base del marco teórico del autor de la fuente primaria la respuesta de la carga de la argumentación, dado que la metodología de ponderación implica pasos y subpasos que valoran la condición de la medida de ser adecuada, necesaria y proporcional al fin constitucional que se busca.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P57**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P57** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento

derechos fundamentales". España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 72-78, 530-540.

³⁹ Ibidem, pp. 72-78, 530-540.

de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 16 (P58)

Según Grajales y Negri (Sobre la argumentación jurídica y sus teorías, 2018, p. 56) “la idea de que los jueces cumplen una tarea más o menos sencilla y simple, semejante a un razonamiento silogístico en el que la premisa menor se subsume en la premisa mayor para deducir o inferir a partir de ello la conclusión para el caso concreto -conforme con lo dispuesto por el legislador histórico u originario-, es algo que difiere hoy en día enormemente de la realidad”.

Enunciado

A partir del texto enunciado, se puede inferir que los jueces en la actualidad ejercen

Distractores

una actividad compleja que exige el uso de la voluntad para ponderar los textos normativos.

una actividad compleja que debe basarse sobre el conocimiento y la racionalidad.

una actividad compleja que no depende solo del conocimiento, sino que implica la voluntad.

Clave

una actividad compleja que NO solo es racional, sino que también es discursiva.

Incumplimiento de criterios comunicativos

El texto usado para dar contexto al enunciado no es afortunado en su redacción. Se encuentra una oración de sesenta y siete palabras que no favorece la lectura y agrega una carga cognitiva innecesaria en el receptor. Adicionalmente, no es dable admitir que exista una inferencia en entre lo que se dice en el texto y la clave, dado la naturaleza discursiva de la actividad del juez no se consigna en dicho texto. Lo anterior confunde al dicente, quien espera poder extraer del texto la clave. Se está asumiendo que la deducción es cercana semánticamente a la racionalidad; por supuesto, como se verá, esto es totalmente errado.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Como se ha visto y se verá, el hecho de que se use una fuente de información mal referenciada lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se

pretende medir. En últimas, el hecho de que la respuesta correcta se derive de que esa cita esté en un apartado con cierto identificador o cierto título no lo hace eficiente en términos de discriminación psicométrica. De hecho, el ítem está formulado en términos de una aptitud (o competencia) genérica, y no en términos de una competencia específica de interpretación judicial; a saber, según el syllabus: **“Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial.”⁴⁰**

Fuente de información

La lectura pertenece a un texto editado en el año 2018. Esto es cuestionable, dado que existen muchos desarrollos y textos que tienen un alto impacto académico. Así mismo, se debió acudir a fuentes primarias o textos que especializados del campo la argumentación jurídica y lógica jurídica.

Respecto de la cita, se presenta de forma incorrecta, dado que no corresponde al texto suministrado para consulta obligatoria.

Se afirma en la pregunta que la cita del texto corresponde a *“Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre la argumentación jurídica y sus teorías”*, sin embargo, el texto compartido por el mismo autor en Academia⁴¹ corresponde a otro título, el cual se denomina *“La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”* y responde a una tesis doctoral, la cual dirigió Amós Arturo Grajales, de manera que la cita no corresponde al texto presentado en la pregunta.

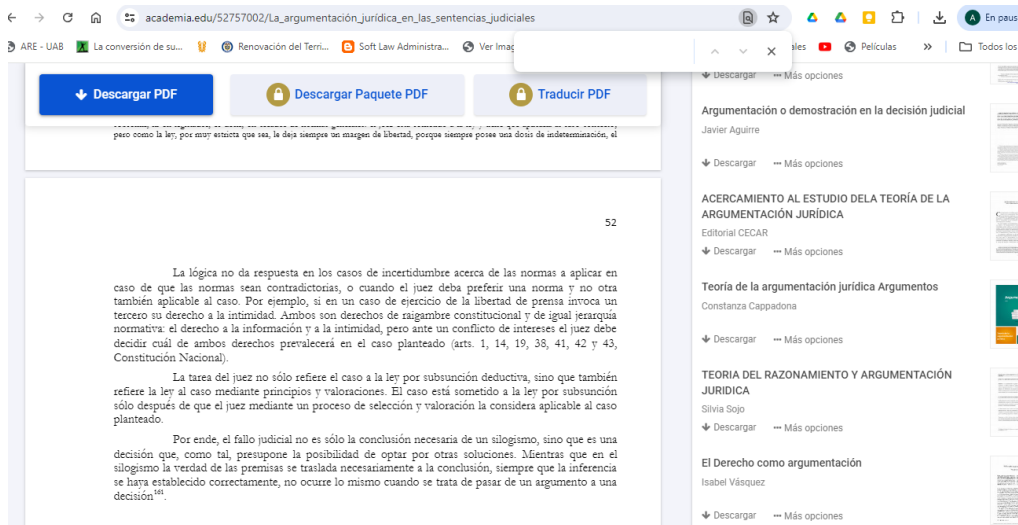


Tomado de la web de academia⁴²

40 Syllabus de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia, pp. 5

41 NEGRI, Nicolás Jorge. "La Argumentación Jurídica En Las Sentencias Judiciales." Web. https://www.academia.edu/52757002/La_argumentaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica_en_las_sentencias_judiciales

42 Ibidem



Tomado de la web de academia⁴³

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta, no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ Dado que la cita proviene de un texto que adolece de rigor teórico, se incumplió con el acuerdo en los siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico⁴⁴.
- ⇒ Por lo precario de contenido e impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga y no perteneciente al texto de consulta da lugar a imprecisiones de referencia respecto del uso de las categorías y conceptos, dado que se presentan de forma errada y sin rigor académico.

Análisis de contenido

- El texto sugiere que la función de los jueces en la actualidad es más compleja que la simple aplicación de un razonamiento silogístico, no obstante, no proporciona ejemplos concretos que respalden esta afirmación, así como la diferenciación de contextos y ramas en las que difieren los modelos de decisión judicial. En este sentido, sin evidencia o ilustraciones claras, así como un contexto, la afirmación es vaga y poco convincente, porque son fragmentos de un texto que apela a la memoria sin fundamentación y ubicación teórica.

⁴³ Ibidem

⁴⁴ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, "Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el "IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021.", pp. 7 -10.

- La falta de un desarrollo más detallado lleva patente confusiones y ambigüedades sobre qué aspectos específicos de la labor judicial se consideran complejos, pues no sabemos a qué se refiere con complejidad, es decir, si es a nivel teórico, epistemológico, hermenéutico, pragmático, deontológico, entre otros.
- El uso de términos o expresiones como "sencilla", "simple", "realidad" o "es algo que difiere hoy en día enormemente de la realidad" es problemático, ya que puede interpretarse y entenderse de diversas maneras, lo cual nos lleva al campo de la incertidumbre, indeterminación y relatividad.
- La ambigüedad en la elección de palabras es prueba de malentendidos y precariedad sobre la real naturaleza del razonamiento de la decisión judicial. Además, no se define y establece correctamente el contraste entre "razonamiento silogístico" y "es algo que difiere hoy en día enormemente de la realidad".
- La afirmación del texto a través de su expresión "razonamiento silogístico" sugiere una discusión que se superó entre los años 1970 y 1980⁴⁵, adicionalmente son múltiples las discusiones, detalles y contextos, los cuales no se refieren, causando una posible falacia de generalización. Adicionalmente, falla la conexión de contraste con la diferencia de realidad de hoy en día.
- No todos los casos en sede judicial son iguales, y hay situaciones en las que el razonamiento silogístico puede ser adecuado y efectivo, con lo cual generalizar sin contexto es falaz. Adicionalmente, parece referirse a un contexto muy diferente al actual, el cual tiene problemas diferentes al que ambiguamente cita, pues no sabemos si la cuestionada idea "...de que los jueces cumplen una tarea más o menos sencilla y simple..." habla de la actualidad o el siglo XIX con una cultura y escuela jurídica formalista. Al desestimar contextos y sacar fragmentos de contextos concretos del autor, se está confundiendo al lector respecto de la perspectiva del texto, puesto que se puede dar la impresión de que los autores ignoran la diversidad de contextos en los que operan los jueces.
- No se menciona que autores coinciden en que la función del juez difiere de la realidad, asimismo, no se citan fuentes específicas ni se proporciona un contexto comparativo y de contraste. Esto limita la capacidad del lector para evaluar la validez y verdad de la afirmación. Sin un marco de teórico adecuado, el argumento puede parecer aislado y carente de fundamento en la literatura existente, dado que son cortes de fragmento sin espacios clarificados.

⁴⁵ Ver RODRÍGUEZ, César. "La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin", 5 ed, Colombia: Siglo del Hombre Editores - Universidad de los Andes, 2005,

- La falta de un análisis crítico y rigor académico de la cita, claramente plantea una omisión de contraste con otras posturas para entender la finalidad del ejercicio. También, este aspecto, debilita la credibilidad del argumento, ya que no se considera la pluralidad de enfoques en la argumentación jurídica en el sentido que plantea el fragmento.

Respuestas posibles

Dadas las condiciones negativas del texto ya explicadas, el efecto frente a las posibles respuestas implica una conducción a interpretaciones caóticas y erróneas, lo cual configura ambigüedad por falta de rigor y clarificación semántica.

Por otro lado, no se concluye que, sobre la base del marco teórico del autor de la fuente la respuesta de “Una actividad compleja que NO solo es racional, sino que también es discursiva”, dado que por coherencia podría ser posible la respuesta “Una actividad compleja que exige el uso de la voluntad para ponderar los textos normativos” que es precisamente la marcada por el suscrito.

Ahora bien, si observamos el texto completo, que además está mal citado, encontramos que se maneja una idea y contexto diferente, dado que en la línea argumental se genera un cambio de enfoque y temática, pues en el siguiente párrafo del texto de Grajales y Negri⁴⁶ referido en la pregunta. Para ilustrar se presenta el texto:

No obstante, los procesos judiciales –en particular los que transitan por las instancias extraordinarias o sede constitucional- constituyen una actividad racional y discursiva, en el que las decisiones contenidas en las sentencias definitivas son (o deberían ser y exteriorizarse) como una derivación de la combinación de un conjunto de elementos y factores que son valorados por los jueces: la cuantificación del daño a la persona, por ejemplo, proviene de la derivación del valor vida o integridad psicofísica y de los principios constitucionales de no dañar a otro -alterum non laedere- y de reparación plena o integral, a la par de las circunstancias particularidades de cada caso: la entidad del daño; el contexto económico y social del damnificado; la edad y situación familiar de la víctima; etc.).

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P58**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P58** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener

⁴⁶ Recordemos que, se afirma erradamente en la pregunta que, la cita del texto corresponde a “Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre la argumentación jurídica y sus teorías”, sin embargo, el texto compartido por el mismo autor en Academia corresponde a otro título, el cual se denomina “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales” y responde a una tesis doctoral, la cual dirigió Amós Arturo Grajales, de manera que la cita no corresponde al texto presentado en la pregunta.

la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 18 (P60)

Según Robert Alexy (Teoría de la argumentación jurídica, 1997, p. 262) “una de las dificultades decisivas del uso de los precedentes (es que) nunca hay dos casos completamente iguales. Siempre cabe encontrar una diferencia”. Además, “es posible que un caso sea igual a otro caso anteriormente decidido en todas las circunstancias relevantes, pero que sin embargo se desee decidir de otra manera porque, entre tanto, ha cambiado la valoración de estas circunstancias”.

Enunciado

A partir del texto enunciado, los jueces al momento de separarse del precedente deben respetar

Distractores

El principio de la inercia.

La carga de la universalidad.

El principio de la razón suficiente.

Clave

La carga de argumentación.

Incumplimiento de criterios comunicativos

La cita presentada no se contextualiza de manera adecuada. Se encuentra cercenada de tal manera que se omiten elementos relevantes para su comprensión. Además, no es evidente comunicativamente, que, a partir del texto que contextualiza el ítem, se puede extraer la

clave. Parecería que simplemente quien elaboró el ítem se limitó a omitir una parte posterior del texto citado. Con ello, buscaba que a través de un proceso memorístico el estudiante recordara la continuación del texto para obtener o “adivinar” la respuesta. Esto desvía los objetivos de la evaluación e impone, una vez más, cargas cognitivas innecesarias.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Como se ha visto y se verá, el hecho de que se use una fuente de información mal referenciada lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se pretende medir. En últimas, el hecho de que la respuesta correcta se derive de que esa cita esté en un apartado con cierto identificador o cierto título no lo hace eficiente en términos de discriminación psicométrica. De hecho, el ítem está formulado en términos de una aptitud (o competencia) genérica, y no en términos de una competencia específica de interpretación judicial; a saber, según el syllabus: **“Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial.”⁴⁷** Además, el ítem es limitado y no proporciona un contexto amplio que permita a los evaluados comprender plenamente el principio en discusión. Además, la formulación de los distractores no presenta opciones mutuamente excluyentes ni equitativas, lo que afecta la validez de la evaluación.

Fuente de información

La cita del texto de la “Teoría de la argumentación jurídica” no sólo implica la página 262, sino que también la página 263, lo cual falta al rigor de la referencia bibliográfica por omitir en realidad de donde proviene exactamente y con completitud.

Tomar citas de forma aislada con la omisión de contexto y la real discusión que plantea el autor, resulta en un ejercicio vago y ambiguo que lleva a tener un espacio de indeterminación. Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta, no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ Dado que la cita proviene de un texto que adolece de rigor teórico, se incumplió con el acuerdo en los siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico⁴⁸.

⁴⁷ Syllabus de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia, pp. 5

⁴⁸ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

- ⇒ Por lo precario de contenido e impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga y no perteneciente al texto de consulta da lugar a imprecisiones de referencia respecto del uso de las categorías y conceptos, dado que se presentan de forma errada y si rigor académico.

Análisis de contenido

El texto de Robert Alexy resalta la complejidad del uso de precedentes en el contexto jurídico. Enfatiza que nunca hay dos casos completamente iguales y que las valoraciones de las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Esto implica que, al separarse de un precedente, los jueces deben tener en cuenta el contexto y las razones que justifican su decisión.

No obstante, dado que se cita un fragmento sin contexto de una fuente primaria, con la pretensión de plantear una respuesta por acudir a la memoria, se debe anotar que falta a la coherencia y contexto claro. Además, dificulta entender el propósito del ejercicio, dado que no se puede conectar las citas con las respuestas probables, más cuando el texto tiene una línea de argumentación que establece otro criterio como la pretensión de corrección como condición presente en cada decisión judicial. Esto implica justificar en el sentido de carga de argumentación.

Aunque se puede argumentar que la razón de elección de respuesta es suficientemente importante, lo cual lleva precisamente a su elección, realmente no refleja con precisión la idea de que los jueces deben presentar una carga de argumentación específica al separarse de un precedente, considerando las circunstancias cambiantes. Lo anterior, porque se cortan y pegan fragmentos de forma descontextualizada y ambigua.

Respuestas posibles

Dadas las condiciones vagas del texto ya explicadas, el efecto frente a las posibles respuestas implica una conducción a interpretaciones caóticas y erróneas. Esto genera un espacio de ambigüedad por falta de rigor y clarificación semántica y de contexto. Por otro lado, no se concluye que, sobre la base del marco teórico del autor de la fuente primaria, la respuesta sea *la carga de la argumentación*, dado que renglones más adelante en la línea argumental del autor, se habla de la corrección como una apuesta por la pretensión de universalidad como elemento que da lugar al cambio de valoraciones.

En este sentido para poder establecer que es plausible la separarse del precedente se deben respetar los presupuestos y línea de argumentación del autor. Esto se debe a que la carga de la argumentación como justificación es posterior a la consideración de la pretensión de corrección, señalada en la página 263 del texto mal citado. Adicionalmente, se acude a la memoria y no a un ejercicio de análisis y razonamiento sobre la base del marco teórico referido.

“...Es posible que un caso sea igual a otro caso anteriormente decidido en todas las circunstancias relevantes, pero que sin embargo se desee decidir de otra manera porque, entre tanto, ha cambiado la valoración de estas circunstancias. **Si se quisiera adherirse solo al principio de universalidad sería imposible tal diferente decisión. Pero esta exclusión de cualquier cambio sería entonces incompatible con el hecho de que toda decisión plantea una pretensión de corrección. Por otro lado, el cumplimiento de la pretensión de corrección forma parte precisamente del cumplimiento del principio de universalidad, aunque sea solo una condición.** Condición general es que la argumentación sea justificable. En esta situación aparece como cuestión de principio la exigencia del respeto a los precedentes, admitiendo el apartarse de ellos, pero endosando en tal caso la carga de la argumentación a quien quiera apartarse m. Rige pues el principio de inercia perelmaniano que exige que una decisión solo puede ser cambiada si puede aducirse razones suficientes para ello. Cuando resulte satisfecha la carga de la prueba solo puede, desde luego, determinarse a la vista de los participantes, reales o imaginarios, en el discurso ”. (negrita fuera del texto)

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P60**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P60** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 19 (P61)

Según Robert Alexy (Teoría de la argumentación jurídica, 1997, p. 264) “el uso del precedente supone también una contribución a la seguridad jurídica y a la protección de la confianza en la aplicación del Derecho. La seguridad jurídica y la protección de la confianza no son ciertamente los únicos fines”.

Enunciado

A partir del texto enunciado, se puede inferir que los jueces:

Distractores

Están obligados a aplicar siempre el precedente para garantizar el principio de la igualdad, más que la seguridad jurídica y la protección de la confianza.

Están obligados siempre a aplicar el precedente para garantizar la seguridad jurídica y la protección de la confianza, entre otros principios.

NO están obligados a aplicar el precedente, pero pueden inspirarse en él y aplicarlo para desarrollar la seguridad jurídica y la protección de la confianza.

Clave

Están obligados en principio a aplicar el precedente, pero puede separarse de él, aunque afecten la seguridad jurídica y la protección de la confianza.

Incumplimiento de criterios comunicativos

La cita presentada no se contextualiza de manera adecuada. Se encuentra cercenada de tal manera que se omiten elementos relevantes para su comprensión. Además, no es evidente comunicativamente, que, a partir del texto que contextualiza el ítem, se puede extraer la clave. Parecería que simplemente quien elaboró el ítem se limitó a omitir una parte posterior del texto citado. Con ello, buscaba que a través de un proceso memorístico el estudiante recordara la continuación del texto para obtener o “adivinar” la respuesta. Esto desvía los objetivos de la evaluación e impone, una vez más, cargas cognitivas innecesarias.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Como se ha visto y se verá, el hecho de que se use una fuente de información mal referenciada lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se pretende medir. En últimas, el hecho de que la respuesta correcta se derive de que esa cita esté en un apartado con cierto identificador o cierto título no lo hace eficiente en términos de discriminación psicométrica. De hecho, el ítem está formulado en términos de una aptitud (o competencia) genérica, y no en términos de una competencia específica de interpretación judicial; a saber, según el syllabus: **“Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial.”⁴⁹** Además, el ítem es limitado y no proporciona un contexto amplio que permita a los evaluados comprender plenamente el principio en discusión. Además, la formulación de los distractores no presenta opciones mutuamente excluyentes ni equitativas, lo que afecta la validez de la evaluación.

Fuente de información

49 Syllabus de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia, pp. 5

La cita del texto de la “Teoría de la argumentación jurídica” está aislada de la real discusión que plantea el autor. Esto resulta en un ejercicio vago y ambiguo que lleva a tener un espacio de indeterminación. No obstante, en el caso particular brilla por su ausencia la referencia de contextos propios del haber jurídico nacional como, por ejemplo, las Sentencias C-836 de 2001 y C-621 de 2015⁵⁰. Estas establecen las condiciones reales del ejercicio y condiciones para apartarse del precedente judicial.

Así también, aunque las opciones de respuesta están relacionadas con el texto de Robert Alexy, la conexión lógica y coherencia no son planteadas correctamente y no son lo suficientemente fuertes, desde el punto de vista de una inferencia lógica. Además, las opciones parecen ser interpretaciones sueltas y vagas de la cita sin un marco claro que las una y dé elementos de coherencia y cohesión textual. Con lo anterior, se da lugar a confusiones sobre cuál es la respuesta correcta.

Por último, existen ediciones más nuevas y con correcciones del texto después de 1997.
Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta, no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ Dado que la cita proviene de un texto que adolece de rigor teórico, se incumplió con el acuerdo en los siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico⁵¹.
- ⇒ Por lo precario de contenido e impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga y no perteneciente al texto de consulta da lugar a imprecisiones de referencia respecto del uso de las categorías y conceptos, dado que se presentan de forma errada y si rigor académico.

Análisis de contenido

El enunciado que se presenta es vago y ambiguo, dado que se toma un fragmento arbitrariamente, sin contexto. En este sentido, el fragmento "A partir del texto enunciado, se puede inferir que los jueces:" no especifica claramente qué tipo de inferencia se espera. Por el contrario, plantearse así lleva a la incertidumbre e indeterminación.

⁵⁰ Ver LÓPEZ, Diego. “El derecho de los jueces”. Bogotá: Legis, 2ª ed., 2006.

⁵¹ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

Visto lo anterior, se conduce al lector a la confusión sobre lo que realmente se está evaluando en el ejercicio. De igual forma, al no proporcionar un contexto suficiente sobre el papel del precedente en la argumentación de las decisiones judiciales, se incurre en el ejercicio en yerros. Ello se debe a que se configuran dificultades para comprender lo en realidad evaluado, especialmente, si no están familiarizados con la obra de Alexy en su extensión y totalidad, dado que el material que se suministró es precario para conocer a un autor tan prolijo y relevante en el mudo del derecho.

Algunas opciones son contradictorias o se presentan de manera confusa. Esto fortalece la idea ya planteada de que no se puede aplicar la “inferencia” en el ejercicio. Por ejemplo, la opción que expresa que los jueces “están obligados a aplicar siempre el precedente” es problemática y confusa, porque no refleja la complejidad y extensión teórica del argumento de Alexy, quien sugiere que hay flexibilidad en la aplicación del precedente, siempre y cuando se acuda a la pretensión de corrección y a la justificación como carga de la argumentación.

La falta de claridad en la opción que dice que los jueces “están obligados en principio a aplicar el precedente, pero puede separarse de él” es una formulación confusa. Además, podría interpretarse de múltiples maneras, dado que la presentación en la redacción debería ser más precisa para evitar ambigüedades.

Al presentar la afirmación de que los jueces “están obligados a aplicar siempre el precedente” de forma aislada y sin contexto, se genera una posible falacia de falsa generalización, ya que se ignora la realidad de que los jueces según otras corrientes tienen cierta discreción en su aplicación, la cual sí es entendida por el autor y la lectura obligatoria que se presenta:

“...Es posible que un caso sea igual a otro caso anteriormente decidido en todas las circunstancias relevantes, pero que sin embargo se desee decidir de otra manera porque, entre tanto, ha cambiado la valoración de estas circunstancias. Si se quisiera adherirse solo al principio de universalidad sería imposible tal diferente decisión. Pero esta exclusión de cualquier cambio sería entonces incompatible con el hecho de que toda decisión plantea una pretensión de corrección. Por otro lado, el cumplimiento de la pretensión de corrección forma parte precisamente del cumplimiento del principio de universalidad, aunque sea solo una condición. **Condición general es que la argumentación sea justificable. En esta situación aparece como cuestión de principio la exigencia del respeto a los precedentes, admitiendo el apartarse de ellos, pero endosando en tal caso la carga de la argumentación a quien quiera apartarse m. Rige pues el principio de inercia perelmaniano que exige que una decisión solo puede ser cambiada si puede aducirse razones suficientes para ello. Cuando resulte satisfecha la carga de la prueba solo puede, desde luego, determinarse a la vista de los participantes, reales o imaginarios, en el discurso.**⁵²”. (negrita fuera del texto)

⁵² Alexy, Robert, “Teoría de la argumentación jurídica”, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1997, p. 263.

Aunque la cita de Alexy es una fuente primaria, el texto no proporciona un contexto teórico más amplio que explique por qué el precedente es importante en la argumentación jurídica. Con ello, se limita y confunde respecto de la profundidad del análisis y causa que el lector bajo evaluación se ponga en un campo de total indeterminación e imposibilidad de responder por carecer de contexto, cohesión y coherencia textual.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P61**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P61** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 20 (P62)

Según el texto Argumentación Judicial (Bonorino R. y Peña J., 2008, p. 29) “la sentencia judicial está formada no sólo por la parte resolutive, sino también por los considerandos (segmento en el que el juez da las razones que justifican su decisión). Una sentencia puede ser reconstruida como un argumento, en el que la resolución ocupa el lugar de la conclusión y cuyas premisas se formulan en los considerandos”.

Enunciado

Teniendo en cuenta el texto de donde se tomó la cita, es **INCORRECTO** afirmar que una condición de una decisión judicial justificada o bien fundamentada es

Distractores

que la estructura de la sentencia constituya un razonamiento lógico.

que los enunciados fácticos y normas jurídicas usadas sean aceptables.

que se redacten argumentos para apoyar cada una de las premisas.

Clave

que las pruebas permitan demostrar válidamente los hechos afirmados.

Incumplimiento de criterios comunicativos

Como se verá más adelante, la calidad de la fuente de información para este ítem es bastante deficiente. En relación con la coherencia que debe guardar el enunciado con el contexto, se identifica que no hay elementos léxicos (palabras), ni sintácticos (frases, oraciones), ni muchos menos semánticos que permitan identificar la relación entre el primero y el segundo. En últimas, no es evidente, comunicativamente, que “teniendo en cuenta el texto de donde se tomó la cita” se pueda determinar que sea INCORRECTO afirmar que una condición de una decisión judicial justificada o bien fundamentada es que las pruebas permitan demostrar válidamente los hechos afirmados. Esto sólo se podrá advertir a partir de un contexto amplio que permita al evaluado inferir correctamente de qué forma se podría asegurar que una sentencia judicial puede ser reconstruida como un argumento y, en ese sentido, demostrar que es incorrecto que las pruebas permitan demostrar válidamente los hechos afirmados⁵³.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Para comenzar, en relación con los elementos psicométricos, la discusión anterior permite afirmar, sin lugar a dudas, que el ítem falla en relación con su claridad. Además, como se ha visto y se verá, el hecho de que se use una fuente de información de calidad dudosa lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se pretende medir⁵⁴. Además, el ítem es limitado y no proporciona un contexto amplio que permita a los evaluados comprender plenamente el principio en discusión. Además, la formulación de los distractores no presenta opciones mutuamente excluyentes ni equitativas, lo que afecta la validez de la evaluación.

A continuación, se desarrollan los detalles de estos elementos:

⁵³ “...Los elementos que configuran el concepto de argumentación (en un plano muy abstracto) serían los cuatro siguientes: 1) Argumentares siempre una acción relativa a un lenguaje. Podría decirse que es un uso del lenguaje que se caracteriza (frente a otros usos: descriptivo, prescriptivo, etc.) por la necesidad de dar razones: se argumenta cuando se defiende o se combate una determinada tesis y se dan razones para ello. Por lo demás, hay argumentos, o fragmentos de argumentos, que no consisten en un uso explícito del lenguaje; al menos, del lenguaje hablado o escrito. 2) Una argumentación presupone siempre un problema, una cuestión (de índole muy variada), cuya respuesta tiene que basarse en razones apropiadas al tipo de problema de que se trate. 3) Una argumentación supone tanto un proceso, una actividad, como el producto o resultado de esa actividad. Como actividad, la argumentación es todo lo que tiene lugar entre el planteamiento del problema y la solución del mismo; como resultado, en una argumentación cabe distinguir siempre estas tres entidades: premisas, conclusión e inferencia (la relación que se da entre las premisas y la conclusión). 4) Argumentar es una actividad racional, en el doble sentido de que es una actividad orientada a un fin y en el de que hay criterios para evaluar una argumentación; o sea, siempre parece tener sentido preguntarse si una argumentación es buena o mala, mejor o peor que otra, aparentemente buena pero en realidad mala, etcétera. ATIENZA, Manuel. “Curso de argumentación jurídica”, España: Editorial Trotta, S.A., 2013, pp. 109-110.

⁵⁴ Syllabus interpretación judicial y estructura de la sentencia. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, p. 5. “Competencia específica: Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial”.

Fuente de información

Aunque se menciona a Bonorino y Peña como fuente, no se presenta de manera clara y explícita cómo se relacionan los criterios mencionados con su obra. La referencia a páginas específicas (p. 29) sin una explicación detallada puede inducir a error si el contenido no es accesible o conocido por los evaluados. Si bien el contexto menciona a Bonorino R. y Peña J., no se proporciona suficiente información sobre cómo estos autores formulan el ejemplo para dar sustento a la definición de un argumento. Esto dificulta la validación de la clave correcta y podría ser confuso para los evaluados que no tengan acceso al texto original.

El ítem se basa únicamente en la obra de Bonorino y Peña. Esto restringe la perspectiva teórica de los examinados. En un campo tan amplio y debatido como la argumentación judicial, es fundamental incluir múltiples fuentes para proporcionar una comprensión más completa y matizada del principio de caridad y otros principios interpretativos.

La fuente citada es de 2008. Dado que el campo de la argumentación judicial es dinámico, la inclusión de fuentes más recientes podría ofrecer desarrollos y matices que no están presentes en la obra de Bonorino y Peña. Esto garantizaría que los examinados estén al tanto de las últimas teorías y prácticas en el área.

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta, no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ Dado que la cita proviene de un texto que adolece de rigor teórico, se incumplió con el acuerdo en los siguientes: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico.⁵⁵.
- ⇒ Por lo precario de contenido e impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga, se incurre en imprecisiones de referencia respecto del uso de las categorías y conceptos, dado que se presentan de forma errada y sin rigor académico.

Análisis de contenido

La lectura pertenece a un texto editado en el año 2008. Esto es cuestionable, dado que existen muchos desarrollos y textos que tienen un alto impacto académico. Así mismo, se debió acudir a fuentes primarias o textos que especializados del campo la argumentación jurídica. La

⁵⁵ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, "Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el "IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

formulación del ejemplo puede no reflejar adecuadamente la relación entre premisas y conclusión tal como se define en el enunciado.

El enunciado "Teniendo en cuenta el texto de donde se tomó la cita, es INCORRECTO afirmar que una condición de una decisión judicial justificada o bien fundamentada es" puede generar confusión sobre cuál de las condiciones mencionadas no está cubierta explícitamente en el texto citado. La relación entre las premisas y la conclusión, tal como se menciona en el texto citado, no se detalla lo suficiente como para que los evaluados puedan identificar claramente cuál afirmación es incorrecta.

Las opciones como "que las pruebas permitan demostrar válidamente los hechos afirmados" y "que se redacten argumentos para apoyar cada una de las premisas" pueden no ser vistas como condiciones directamente relacionadas con la estructura lógica de una sentencia judicial, pero pueden ser consideradas relevantes para una decisión judicial bien fundamentada en un sentido más amplio.

Algunas opciones pueden parecer igualmente válidas o inválidas, lo que dificulta la identificación clara de la respuesta correcta. La cita de Bonorino y Peña proporciona una base para entender la estructura de la sentencia judicial, pero no ofrece suficiente contexto sobre qué constituye específicamente una decisión judicial bien fundamentada. Ello deja espacio para interpretaciones diversas. La cita se enfoca en la estructura lógica de la sentencia, pero no aborda explícitamente todas las condiciones mencionadas en las opciones. Esto puede llevar a la confusión.

Basarse únicamente en la obra de Bonorino y Peña limita la perspectiva teórica y puede no reflejar todas las condiciones necesarias para una decisión judicial justificada según otros autores o teorías jurídicas. Además, la obra citada es de 2008 y el campo de la argumentación judicial puede haber evolucionado desde entonces. Incluir fuentes más recientes podría proporcionar una visión más completa y actualizada. La validez del ítem puede ser cuestionada si no refleja adecuadamente las condiciones esenciales para una decisión judicial justificada tal como se entienden en la teoría y práctica jurídica actual.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P62**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P62** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en

aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 23 (P65)

A continuación, encuentra una cita del Texto de Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre “la argumentación jurídica y sus teorías”:

“(…) La crítica que se formula a esta concepción es que la aplicación del derecho no se reduce a una simple subsunción. La subsunción sólo es posible cuando la ley utiliza conceptos unívocos o conceptos numéricos, pero fuera de estos dos, todos los demás conceptos son susceptibles de extensión. Por lo tanto, la mayoría de los supuestos de aplicación del derecho son al mismo tiempo supuestos de creación del derecho. (...)”

Enunciado

Con base en la información anterior, es menos posible aplicar el método de la subsunción cuando son casos

Distractores

imposibles
trágicos.
difíciles.
fáciles.

Clave

trágicos.

Incumplimiento de criterios comunicativos

No es evidente comunicativamente, que, a partir del texto que contextualiza el ítem, se puede extraer la clave. Parecería que simplemente quien elaboró el ítem se limitó a omitir una parte posterior del texto citado. Con ello, buscaba que a través de un proceso memorístico el discente recordara la continuación del texto para obtener o “adivinar” la respuesta. Esto desvía los objetivos de la evaluación e impone, una vez más, cargas cognitivas innecesarias.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Como se ha visto y se verá, el hecho de que se use una fuente de información mal referenciada lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se pretende medir. En últimas, el hecho de que la respuesta correcta se derive de que esa cita esté en un apartado con cierto identificador o cierto título no lo hace eficiente en términos de discriminación psicométrica. De hecho, el ítem está formulado en términos de una aptitud (o competencia) genérica, y no en términos de una competencia específica de interpretación judicial; a saber, según el syllabus: **“Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial.”⁵⁶**

Fuente de información

La lectura pertenece a una tesis del año 2018. Esto es cuestionable, dado que existen muchos desarrollos y textos que tienen un alto impacto académico. Así mismo, se debió acudir a fuentes primarias o textos que especializados del campo la argumentación jurídica y lógica jurídica.

Respecto de la cita, se presenta de forma incorrecta, dado que no corresponde al texto suministrado para consulta obligatoria, asimismo, la cita formalmente no corresponde a ningún sistema. De igual forma, se afirma en la pregunta que la cita del texto corresponde a *“Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre la argumentación jurídica y sus teorías”*, sin embargo, el texto compartido por el mismo autor en Academia⁵⁷ corresponde a otro título, el cual se denomina *“La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”* y responde a una tesis doctoral, la cual dirigió Amós Arturo Grajales, de manera que la cita no corresponde al texto presentado en la pregunta.

⁵⁶ Syllabus de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia, pp. 5

⁵⁷ NEGRI, Nicolás Jorge. “La Argumentación Jurídica En Las Sentencias Judiciales.” Web.https://www.academia.edu/52757002/La_argumentaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica_en_las_sentencias_judiciales



Tomado de la web de academia⁵⁸



Tomado de la web de academia⁵⁹

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta, no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ Dado que la cita proviene de un texto que adolece de rigor teórico, se incumplió con el acuerdo en los siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta

⁵⁸ Ibidem

⁵⁹ Ibidem

calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico⁶⁰.

⇒ Por lo precario de contenido e impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga y no perteneciente al texto de consulta da lugar a imprecisiones de referencia respecto del uso de las categorías y conceptos, dado que se presentan de forma errada y sin rigor académico.

Análisis de contenido

- El fragmento parte de una “crítica” indeterminada a una concepción del derecho también indeterminada, lo cual origina que el lector evaluado carezca de contextos y presupuestos sobre los cuales se le va a evaluar. Casi que el ejercicio se asemeja a una actividad de adivinación por no darse los elementos mínimos para un ejercicio de este tipo.
- La crítica a la “subsunción” no está suficientemente desarrollada. Se menciona que la aplicación del “derecho no se reduce a una simple subsunción”, pero no se explican claramente las implicaciones de esta afirmación. Esto deja al lector evaluado en un escenario de ambigüedad sobre qué se propone como alternativa de respuesta y la finalidad del ejercicio.
- Dado que la crítica a la subsunción en sí no está suficientemente desarrollada y se menciona que la aplicación del derecho no se reduce a una simple subsunción, se deja al lector evaluado en un contexto de ambigüedad y vaguedad sobre qué se propone como alternativa, más cuando se afirma que la subsunción solo es posible con conceptos unívocos o numéricos. Esto recae en una simplificación en exceso el método sin allegar soportes de estas afirmaciones.
- Existen numerosas interpretaciones y aplicaciones de la subsunción que pueden incluir conceptos más complejos, aunque no sean estrictamente unívocos. Esta afirmación puede llevar a una comprensión errónea de cómo funciona la subsunción en la práctica jurídica. Ello se debe a que no se suministra contexto y enfoque en la tesis planteada, dado que se tomó un fragmento sin establecer contexto y el sentido real de la problematización del texto del cual se tomó el fragmento.
- La falta de un desarrollo más detallado lleva a patentes confusiones y ambigüedades sobre qué aspectos específicos de la labor judicial se consideran complejos, pues no sabemos a qué se refiere con “todos los demás conceptos”, “conceptos numéricos” o

⁶⁰ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, “Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

“supuestos de creación del derecho”; es decir, si es a nivel teórico, epistemológico, hermenéutico, pragmático, deontológico, entre otros.

- Las expresiones indeterminadas y confusas respecto del ejercicio incumplen presupuestos básicos para el entendimiento, dado que estas expresiones se pueden interpretar y entenderse de diversas maneras. Esto nos lleva al campo de la incertidumbre, indeterminación y relatividad.
- La afirmación del texto a través de su expresión “simple subsunción” sugiere una discusión que se superó entre los años 1970 y 1980⁶¹. Adicionalmente, son múltiples las discusiones, detalles y contextos que se desarrollan alrededor de la referencia ambigua de “concepción”. Con ello, se causa incertidumbre e indeterminación en el desarrollo del ejercicio.
- Existe una injustificada inobservancia de referencias. La “crítica” no se apoya en referencias a teorías o autores que respalden la afirmación de que la subsunción es insuficiente y el propósito de establecer este punto, dado que, como se explicara más adelante con detalle, no hay relación lógica entre el contexto, enunciado y opciones de respuesta. Sin una base teórica sólida, la crítica pierde credibilidad y puede ser vista como una opinión personal más que como un argumento soportado y fundamentado.
- El fragmento de texto no aborda las implicaciones prácticas de la crítica a la subsunción, pues la crítica parte del contexto de la “aplicación”. No obstante, no se discute cómo los jueces pueden manejar la ambigua referencia a que “los demás conceptos son susceptibles de extensión “. Esto deja la crítica incompleta. La falta de conexión con la realidad judicial puede hacer que la crítica parezca una opinión y desconectada de la práctica real.
- La expresión "conceptos numéricos" no está definida en el contexto jurídico, por lo tanto, no sabemos si ¿Se refiere a normas que utilizan cifras específicas o porcentajes?, de manera que la ambigüedad lleva a confusiones sobre qué se entiende exactamente por "numéricos". Con lo anterior, también se presenta erradamente al derecho de forma unívoca a aspectos circunscritos al orden cuantitativo, con lo cual se ignora la riqueza y complejidad de los conceptos jurídicos que son cualitativos. Muchos conceptos jurídicos son inherentemente argumentativos y no pueden ser reducidos a cifras o cantidades.
- La falta de un análisis crítico y rigor académico de la cita, claramente plantea una omisión de contraste con otras posturas para entender la finalidad del ejercicio.

⁶¹ Ver RODRÍGUEZ, César. “La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin”, 5 ed, Colombia: Siglo del Hombre Editores - Universidad de los Andes, 2005,

También, este aspecto, debilita la credibilidad del argumento, dado que no se considera la pluralidad de enfoques en la argumentación jurídica en el sentido que plantea el fragmento.

Inexistencia de relación lógica entre el contexto, enunciado y opción de respuesta “casos trágicos”

A partir de lo postulado por Manuel Atienza y para ilustrar las fallas teóricas y lógicas vamos a presentar lo que la literatura acreditada considera por casos trágicos, con lo cual se prueba que no existe coherencia y cohesión entre el contexto, enunciado y opción de respuesta.

Clasificación de Casos

Casos Fáciles: Aquellos que tienen respuestas claras y no generan controversia⁶².

Casos Difíciles: Situaciones en las que puede haber una única respuesta correcta, pero que requieren un análisis más profundo⁶³.

Casos Trágicos: Son aquellos en los que no hay ninguna respuesta que pueda considerarse correcta. En estos casos, la aplicación del derecho no puede lograr una justicia satisfactoria⁶⁴.

Límites de la Argumentación Jurídica:

Para Manuel Atienza uno de los pocos autores que han hablado de los casos trágicos, estos casos no representan un simple empate entre respuestas. Muestran los límites de la racionalidad y de la argumentación jurídica. En estos casos, el operador jurídico debe reconocer que las herramientas argumentativas disponibles no son suficientes para resolver la situación de manera justa⁶⁵.

El autor critica la visión de que los casos trágicos son meramente el resultado de inconmensurabilidad de valores o causas psicológicas. En cambio, sostiene que son el resultado de sociedades injustas⁶⁶, donde la conciencia de lo trágico debe recordar a los juristas su deber de contribuir al cambio social para disminuir la dimensión de lo trágico en el derecho⁶⁷.

⁶² ATIENZA, Manuel. “Curso de argumentación jurídica”, España: Editorial Trotta, S.A., 2013, p. 812.

⁶³ Ibidem, p. 812.

⁶⁴ “*hay casos trágicos: aquellos en los que no es que haya más de una respuesta correcta, sino que no hay ninguna; en los que es imposible realizar la justicia a través del Derecho. Que no haya ninguna que pueda considerarse correcta no quiere decir tampoco que sean casos de empate. Es muy raro, efectivamente, encontrarse con que a favor de las (normalmente) dos posibles respuestas a un caso haya razones que tengan exactamente el mismo peso.*”. Ibidem, p. 812.

⁶⁵ Ibidem, pp. 812 -817.

⁶⁶ Ibidem, pp. 812 -817.

⁶⁷ Ibidem, pp. 812 -817.

Por último, se enfatiza la importancia de la deliberación en el ejercicio del derecho, que requiere empatía y capacidad de distanciamiento. Asimismo, Atienza se inspira en el trabajo de Anthony Kronman. Éste defiende la idea de un jurista prudente que posee la capacidad de deliberar sobre fines y valores, lo cual está en un contexto social. Sin embargo se aparta, porque cree que se debe tener es conciencia de la injusticia social⁶⁸.

Respuestas posibles

Dadas las condiciones negativas del texto ya explicadas, el efecto frente a las posibles respuestas implica una conducción a interpretaciones caóticas y erróneas. Esto configura ambigüedad por falta de rigor y clarificación semántica.

Por otro lado, no se concluye que, sobre la base del precario marco teórico del autor de la fuente la respuesta de “trágicos”, por carecer de un nexo que genere elementos de cohesión textual. Por otro lado, estando los “casos difíciles”, en el marco de casos que difícilmente se soluciona por subsunción, nos da elementos para considerar otra opción de respuesta válida.

La opción "trágicos" no se deriva lógicamente del texto proporcionado. El texto menciona que la subsunción es posible cuando se utilizan conceptos unívocos o numéricos. Sin embargo, no establece que los casos trágicos sean un tipo de caso que impida la aplicación de la subsunción. La relación entre la naturaleza trágica de un caso y la dificultad para aplicar la subsunción no está explícitamente fundamentada en el texto.

Por último, si observamos el texto completo, que además está mal citado, encontramos que se maneja una idea y contexto diferente, dado que en la línea argumental se genera un cambio de enfoque y temática, pues en el párrafo del texto de Grajales y Negri⁶⁹ referido en la pregunta no se puede concluir la respuesta como correcta(trágicos). Para ilustra se presenta el texto:

“La crítica que se formula a esta concepción es que la aplicación del derecho no se reduce a una simple subsunción. La subsunción sólo es posible cuando la ley utiliza conceptos unívocos o conceptos numéricos, pero fuera de estos dos, todos los demás conceptos son susceptibles de extensión. Por lo tanto, la mayoría de los supuestos de aplicación del derecho son al mismo tiempo supuestos de creación del derecho. Se suelen distinguir al respecto los casos

⁶⁸ “...La conciencia de lo trágico, el sentimiento de pesar o de sacrificio debe cumplir, precisamente, la función de recordar a los jueces (a los juristas) su deber (como ciudadanos) de contribuir al cambio social, de manera que disminuya la dimensión de lo trágico en el Derecho. Y si deben —o debemos— tener algo de mala conciencia es porque todos (o casi todos) Somos algo responsables (aunque, naturalmente, en grados muy distintos) de esa injusticia de base.” - Ibidem, p. 814.

⁶⁹ Recordemos que, se afirma erradamente en la pregunta que, la cita del texto corresponde a “Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre la argumentación jurídica y sus teorías”, sin embargo, el texto compartido por el mismo autor en Academia corresponde a otro título, el cual se denomina “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales” y responde a una tesis doctoral, la cual dirigió Amós Arturo Grajales, de manera que la cita no corresponde al texto presentado en la pregunta.

denominados fáciles, difíciles, trágicos o problemáticos. Son casos fáciles aquellos en los que no existen dificultades en identificar la norma a aplicar y el supuesto de hecho objeto de decisión; por ejemplo, aquellos en que la norma utiliza conceptos unívocos (aeronave, cheque, hecho imponible, etc.), o cuando utiliza conceptos numéricos, cuando establece la mayoría de edad a los dieciocho años, o requiere la existencia de tres testigos en los testamentos o determina que el muro medianero debe tener como mínimo tres metros de altura. El caso se considera fácil, en la medida en que el ordenamiento otorga un único sentido a las expresiones aeronave, cheque y hecho imponible, o en el hecho de que expresiones como dieciocho años, tres testigos y tres metros de altura constituyen conceptos numéricos de fácil comprobación. De allí que se afirme que en los casos fáciles sea más evidente la aplicación del derecho como subsunción.”⁷⁰.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P65**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P65** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 26 (P68)

Según el texto de Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre la argumentación jurídica y sus teorías “dentro de las críticas que se suelen hacer al formalismo, se encuentra su concepción y/o mirada escéptica con relación a la interpretación jurídica, teniendo en cuenta que, los sistemas jurídicos NO son necesariamente completos ni consistentes; por ende, se advierte entonces, que los jueces NO solo aplican la norma creada por el legislador en un sistema formal, sino que, en algunos casos, los jueces crean derecho.”

Enunciado

⁷⁰ NEGRI, Nicolás Jorge. “La Argumentación Jurídica En Las Sentencias Judiciales.”
Web.https://www.academia.edu/52757002/La_argumentaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica_en_las_sentencias_judiciales

De acuerdo con el texto enunciado, para que el juez valore la importancia de una correcta interpretación judicial como criterio de excelencia jurídica, se conoce que la situación en la que el juez crea derecho es en

Distractores

las normas generales sin solución.
los postulados de la Ratio decidendi.
los precedentes jurisprudenciales.

Clave

las lagunas y antinomias jurídicas.

Incumplimiento de criterios comunicativos

La redacción de la pregunta tiene varios problemas. Para empezar, las primeras palabras del contexto “dentro de las críticas que se suelen hacer al formalismo” lleva a pensar que existe un párrafo antecedente que resulta necesario para captar la estructura lógica de la pregunta. Para dar claridad al lector, resulta imperativo ubicar al principio del texto información que ofrezca un punto de partida seguro o cambiar la redacción del contexto de modo que no genere esta sensación de incompletitud.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Para comenzar, en relación con los elementos psicométricos, la discusión anterior permite afirmar, sin lugar a dudas, que el ítem falla en relación con su claridad. Como se verá, en relación con su coherencia y relevancia, se evidencian problemas en el sentido que, tanto la forma como el contenido, permiten evidenciar la falta de comprensión del tema objeto de evaluación por parte de los constructores de ítems, dado que no es posible inferir la presunta respuesta correcta del enunciado, puesto que la complejidad de las corrientes y tradiciones jurídicas que apoya la tesis de creación por el derecho por parte de los jueces es muy diversa.

Fuente de información

La lectura pertenece a una tesis del año 2018. Esto es cuestionable, dado que existen muchos desarrollos y textos que tienen un alto impacto académico. Así mismo, se debió acudir a fuentes primarias o textos que especializados del campo la argumentación jurídica y lógica jurídica.

Respecto de la cita, se presenta de forma incorrecta, dado que no corresponde al texto suministrado para consulta obligatoria, asimismo, la cita formalmente no corresponde a

ningún sistema de citación. Asimismo, el texto mal citado, como se evidenciará más adelante, ni siquiera pertenece al rango de lectura obligatoria.

De igual forma, se afirma en la pregunta que la cita del texto corresponde a “*Amós Arturo Grajales y Nicolás Jorge Negri, Sobre la argumentación jurídica y sus teorías*”, sin embargo, el texto compartido por el mismo autor en Academia⁷¹ corresponde a otro título, el cual se denomina “*La argumentación jurídica en las sentencias judiciales*” y responde a una tesis doctoral, la cual dirigió Amós Arturo Grajales, de manera que la cita no corresponde al texto presentado en la pregunta.



Tomado de la web de academia⁷²



⁷¹ NEGRI, Nicolás Jorge. “La Argumentación Jurídica En Las Sentencias Judiciales.” Web.https://www.academia.edu/52757002/La_argumentaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica_en_las_sentencias_judiciales

⁷² Ibidem

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta no está dentro de las lecturas obligatorias del syllabus.

Análisis de contenido

- No se acude a fuentes autorizadas para dar sustento a la pregunta. Así mismo, no es posible establecer el origen de la postura nivel teórico, para efectos de tener contexto y elementos de juicio para establecer una línea argumental y lógica, por otro lado, esta postura u “opinión” es muy criticada, dado que rompe con los principios de seguridad jurídica e igualdad (como trato igual).⁷⁴
- La falta de un análisis crítico y rigor académico de la cita claramente plantea una omisión de contraste con otras posturas para entender la finalidad del ejercicio. También, este aspecto debilita la credibilidad del argumento, ya que no se considera la pluralidad de enfoques en la argumentación jurídica en el sentido que plantea el fragmento.
- La afirmación del texto a través de su expresión “el juez crea derecho” sugiere una discusión que se reavivó entre los años 1970 y 1980⁷⁵. Adicionalmente, son múltiples las discusiones, detalles y contextos que se desarrollan alrededor de la referencia ambigua de “concepción y/o mirada escéptica”, con lo cual se causa incertidumbre e indeterminación en el desarrollo del ejercicio.
- Existe una injustificada inobservancia de referencias. El fragmento “de las críticas que se suelen hacer al formalismo, se encuentra su concepción y/o mirada escéptica con relación a la interpretación jurídica” no se apoya en referencias a teorías o autores que respalden la afirmación. Esto muestra la insuficiencia y carencia de propósito al establecer este punto con precariedades teóricas.
- Además, como se explicará más adelante con detalle, no hay relación lógica entre el contexto, enunciado y opciones de respuesta. Sin una base teórica sólida, la crítica pierde credibilidad y puede ser vista como una opinión más que como un argumento soportado y fundamentado, pues existen posiciones acreditadas contrarias. En efecto, la creación del derecho no sólo se predica las lagunas y antinomias jurídicas, ya que hay corrientes más radicales que se omitieron en un marco de diálogo con la teoría crítica y el realismo jurídico.

⁷³ Ibidem

⁷⁴ DWORKIN, Ronald. “El imperio de la justicia”, 2 ed. España: Editorial Gedisa, 2012, p. 125

⁷⁵ Ver RODRÍGUEZ, César. “La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin”, 5 ed, Colombia: Siglo del Hombre Editores - Universidad de los Andes, 2005,

- El uso de términos como "concepción escéptica" y "mirada escéptica" es vago, ambiguo y carece de precisión contextual. No se define claramente qué se entiende por "escepticismo" en el desarrollo de la línea argumental. Esta falta de origenó confusiones sobre la postura que se está criticando. Un análisis más riguroso y serio debería especificar si se refiere a un escepticismo metodológico, ontológico o epistemológico. desde la teoría jurídica se aborda a partir de feminismo jurídico, teoría crítica, *critical legal studies*, entre otras.
- El texto menciona que los sistemas jurídicos "NO son necesariamente completos ni consistentes", pero no proporciona un marco teórico que respalde esta afirmación, lo cual nos lleva preguntarnos ¿de qué sistema habla? o ¿a cuál tradición jurídica se refiere?
- Aunque es cierto que el derecho puede presentar lagunas y contradicciones, sería necesario citar teorías o autores que sustenten esta idea, como la teoría de la indeterminación del derecho, la teoría realismo jurídico, el positivismo, entre otras, pues múltiples perspectivas abordan estos elementos. En este sentido, sin este respaldo y rigor, la afirmación se queda en un enunciado vacuo.
- La lógica del argumento principal está en disputa (críticas al formalismo/ creación del derecho), por lo tanto, no es clara y sí es ambigua.
- La creación del derecho implica un acto de voluntad que va más allá de la interpretación. Esto puede generar confusiones respecto al rol del juez en el contexto colombiano, incluso hasta ser calificado como delito⁷⁶. Además, nuestra tradición jurídica se centra en el *civil law* y el formalismo jurídico (actualmente en transición). Este punto debe ser desarrollado con mayor claridad y cuidado, especialmente considerando que en tradiciones como el *common law* este aspecto es plausible.

En el mismo sentido, el tema de la creación del derecho en Colombia y su relación con el rol del juez merece un análisis profundo, riguroso y cuidadoso. La tensión entre la autonomía de la voluntad, el formalismo jurídico, la seguridad jurídica y la interpretación judicial debe ser gestionada con atención para asegurar que el sistema jurídico no solo sea coherente y predecible, sino también justo y adaptable a las necesidades de la sociedad.

Finalmente, la educación continua y la formación judicial, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de control judicial, son elementos clave para alcanzar un equilibrio de poderes, garantizar el respeto a los pilares constitucionales y promover un canon deontológico.

⁷⁶ Corte Constitucional, Sentencias C-335/08, T-118 de 1995, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-31202018 (48908), HERNÁNDEZ, Ricardo. "Configuración del delito de prevaricato en Colombia: análisis de la normatividad vigente, doctrina y jurisprudencia". Colombia: Universidad Católica de Colombia, 2021., SCARPATÍ, Rueda, "El delito de prevaricato judicial en el derecho penal colombiano", Colombia: Universidad de la Costa, 2023.

- El texto sugiere una simplificación del rol judicial al carecer de marcos teóricos respetables y rigor lógico. Esto descarta la fortaleza de la tesis de la 'creación del derecho', plausible en la tradición anglosajona. Además, no aborda las implicaciones de esta afirmación en el contexto colombiano.
- La creación de derecho por parte de los jueces es un tema controvertido que requiere un análisis más profundo. ¿Qué es crear derecho en el rol judicial? ¿Qué criterios utilizan los jueces para 'crear' derecho? ¿Cuáles son sus límites? ¿Se trata de un acto legítimo o de una invasión de funciones o competencias del legislativo? La falta de discusión sobre estos aspectos deja el argumento vago, confuso, incompleto y superficial.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P68**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P68** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL O DE CASOS

Pregunta 33 (P75)

En relación con esta pregunta lo primero que se debate es que no cumple con el criterio de la actividad objeto de evaluación denominada análisis jurisprudencial o de casos pues no busca que el discente ponga en práctica las propuestas metodológicas aprendidas, en un determinado problema que será planteado por la Escuela Judicial. Esta actividad debe inexorablemente consistir en la resolución de problemas a partir del análisis jurisprudencial o planteamiento de caso que, según el tipo de programa, podrán ser jurídicos o no jurídicos, es decir busca que luego de analizar un caso o problema determinado el discente llegue a una conclusión atendiendo las habilidades y competencias adquiridas.

Sino que por el contrario pretende evaluar a modo de control de lectura el texto "ALCIVAR TREJO, C., CALDERÓN CISNEROS, J. y TAMARIZ BAQUERIZO, E. La diversidad de las

escuelas de interpretación jurídica con relación a la Constitución del Ecuador. En: Contribuciones a las Ciencias Sociales, Universidad Tecnológica Ecotec, febrero 2014. www.eumed.net/rev/cccss/27/interpretacion-juridica.html pp. 2 – 10.", pues la construcción de la pregunta refiere esencialmente no a un análisis a fin de llegar a una conclusión, sino por el contrario a recordar el contenido de la lectura obligatoria.

La pregunta cuestionaba *-para efectos de análisis-* se refiere acerca de una comunidad indígena que ha ocupado un terreno durante 9 años. Que el predio es reclamado por una empresa privada que posee un título de propiedad con 25 años de antigüedad, pero nunca hizo uso del terreno. La comunidad indígena ha hecho varias construcciones. Y la empresa propietaria solicita el desalojo de la comunidad ante los tribunales.

Seguidamente se solicitaba al dicente que acorde con la lectura "La diversidad de las escuelas de interpretación jurídica con relación a la Constitución del Ecuador", evaluara cuatro afirmaciones respecto a cómo las escuelas Exegética y Sociológica resolverían el caso del desalojo de la comunidad indígena, para ello se nos pedía que marcáramos las dos opciones más acertadas entre las siguientes:

1. La escuela exegética se centraría en el análisis del título de propiedad legalmente registrado a nombre de la empresa privada, concluyendo que la propiedad debe ser restituida a su titular, ordenando el desalojo de la comunidad indígena.
2. La escuela sociológica consideraría el impacto social del desalojo y los derechos fundamentales de la comunidad indígena, fallando a favor de la comunidad y permitiéndoles permanecer en el terreno.
3. La escuela exegética ignoraría completamente el título de propiedad de la empresa privada y fallaría a favor de la comunidad indígena debido a su uso prolongado del terreno.
4. La escuela sociológica resolvería el caso exclusivamente basándose en el análisis literal del título de propiedad, sin considerar el impacto social o los derechos fundamentales de la comunidad indígena.

Para lo cual marqué que las respuestas correctas correspondían a la 2 y 3, siendo que la Escuela registró como claves correctas la 1 y 4.

Como se verá más adelante, la calidad de la fuente de información para este ítem es bastante deficiente. Más allá de esto, hay dos problemas con la presentación del ítem. Por un lado, se presenta un doble enunciado: "(...) **evalúe las siguientes afirmaciones** (...)” y “**de acuerdo con el texto anterior, se concluye**”. Por otro lado, este último enunciado induce a error en la medida en que habla del “texto anterior” como si el contexto fuese una cita textual de la fuente de información invocada. Por demás, ese tipo de expresiones en el enunciado, como se verá, nos remiten a una prueba de aptitudes (comprensión de lectura) y no a análisis de casos o jurisprudencia.

En relación con los elementos psicométricos, la discusión anterior permite afirmar que el ítem falla en relación con su claridad. Además, el hecho de que se use una fuente de información de calidad dudosa lo hace incoherente con el syllabus y poco relevante en relación con la competencia que se pretende medir⁷⁷.

En primer lugar, la lectura pertenece a una revista denominada *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, la cual no tiene un alto impacto académico en comparación con otras publicaciones destacadas en el campo del derecho. Aunque la revista está indexada en bases de datos bibliográficas regionales, como Dialnet, que cubre publicaciones de América Latina y el Caribe, no se encuentra indexada en bases de datos bibliográficas de alto impacto internacional, como Web of Science, Scopus, EBSCOhost o ProQuest.

Asimismo, es una revista que maneja un incentivo económico para la publicación de sus escritos y aborda una cuestionable multiplicidad temática. Esto puede afectar el rigor, la profundidad, la calidad y las perspectivas en derecho de la revista. Igualmente, los autores carecen de reconocimiento y trayectoria en relación con las temáticas tratadas para formular la pregunta del cuestionario.

En segundo lugar, la lectura reconstruye a la escuela de la exégesis sin mencionar a un solo autor que pertenezca a esta escuela. Esto a pesar de que se trata de una escuela con tres generaciones de juristas⁷⁸ y que duró casi un siglo (de 1825 a 1900). Además de no citar al autor que por primera vez reconstruyó a esta escuela, y cuya obra es un clásico en la materia: el jurista Julien Bonnecase con su célebre publicación de 1804 *L'ecole d'exegese en droit civil*.

En tercer lugar, la lectura incurre en imprecisiones teóricas tales como redundancias expositivas. A modo de ejemplo, en el título 3 de la lectura “Análisis de la diversidad de las Escuelas de Interpretación Jurídica” se explica dos veces el mismo tema con nominaciones diferentes: por una parte, se expone la escuela histórica; y, por otra, se expone la escuela de la interpretación savigniana, cuando por todos es sabido que Savigny es el gran expositor de la Escuela Histórica del Derecho⁷⁹.

Por último, en la lectura no es posible establecer la obra de Gény que se usa para efectos de hacer las afirmaciones y presentación del autor alrededor de “fuentes formales”. En concreto,

⁷⁷ Syllabus interpretación judicial y estructura de la sentencia. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, p. 5. “Competencia específica: Conoce y aplica los diferentes conceptos y métodos de interpretación judicial, necesarios para un razonamiento correcto y que responda al compromiso social de la función judicial”.

⁷⁸ Juristas de la primera generación (1825-1830): C. Delvincourt, A. Proudhon, C.B.M. Toullier, G.A. Chabot de l'Allier y P.A. Merlin. Juristas de la segunda generación (1830-1880): A. Duranton, C. Demelombe, R.T. Troplong, F. Laurent, F. Moulon, V. Marcadé, A.M. Demante, C. Aubry y C. Rau. Juristas de la tercera generación (1880-1900): T. Huc y H. Baudry-Lacantinerie. Cfr. CHIASSONI, Pierluigi. Lima: Palestra, 2017, p. 302.

⁷⁹ VON SAVIGNY, Friedrich Karl. “La Escuela Histórica del Derecho”. En: *El ámbito de lo jurídico. Lecturas de pensamiento jurídico contemporáneo*. Barcelona: Crítica, 1994, pp. 22-31.

no está la referencia bibliográfica. De hecho, luego de una ardua búsqueda, se encontró que lo que, según el texto, era una cita directa de Gény, en realidad, pertenece a la obra *Introducción analítica del derecho* de Rolando Tamayo y Salmorán. Estos errores de citación son garrafales y rayan con la vulneración de derechos de autor, máxime cuando los autores de texto base para el ítem no citan a Tamayo y Salmorán; y, además, hacen creer que el parafraseo de este último autor sobre Gény son palabras de Gény.

Por demás, son múltiples los errores de cohesión, coherencia, citación, ortografía y rigor teórico del artículo en cuestión. Por ejemplo, es evidente que los autores del texto no diferencian entre cita narrativa y cita parentética, de tal manera que ponen entre paréntesis el autor y el año en lugares en los que esto genera errores gramaticales.

La lectura en la que se basa la formulación de la pregunta es de carácter secundario. Esto es cuestionable, dado que se debería recurrir a fuentes primarias relacionadas con el autor y la escuela que se pretende presentar. Por otro lado, el artículo citado está estructurado y enfocado en el contexto ecuatoriano, con relación a su constitución. A pesar de que se menciona a Gény, y varias escuelas, como la de la Exégesis, no se hace con rigor académico y teórico, de igual forma no hay hipótesis y objetivos claros en el artículo que permitan sustentar la forma y por qué se usa el autor y escuelas para apoyar el argumento.

Incumplimiento del Acuerdo Pedagógico y del Syllabus

La lectura y la cita propuesta para fundamentar la formulación de la pregunta no cumplen con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

La cita proviene de un artículo que carece de rigor académico, y no satisface la comprensión teórica del contexto propio de la interpretación judicial. Más bien, se basa en una referencia vaga sobre una presunta apuesta de análisis de la Constitución del Ecuador. En esta medida, se incumplió con los referentes del proceso de formación (Acuerdo, Syllabus) en los siguiente: i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes, ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico⁸⁰.

Por lo precario del contenido y el impacto académico, así como por la presentación de una referencia vaga, se genera confusión en la presentación del contenido teórico y metodológico, respecto de las competencias de interpretación judicial⁸¹.

Análisis de contenido

⁸⁰ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, "Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el "IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

⁸¹ Syllabus de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia, pp. 1-

El contenido de la pregunta presenta varios errores e imprecisiones, así como un uso inadecuado del texto citado. La pregunta señala que, con base en la lectura "La diversidad de las escuelas de interpretación jurídica con relación a la Constitución del Ecuador", se deben evaluar afirmaciones respecto de cómo las escuelas Exegética y Sociológica resolverían el caso presentado del desalojo de la comunidad indígena. Sobre el particular:

Primero. El texto citado, en el título 3 “Análisis de la diversidad de las Escuelas de Interpretación Jurídica” expone las siguientes escuelas: la Escuela Histórica, la Escuela Científica Francesa, el Sicologismo y la Escuela del Derecho Libre, la Escuela Exegética, la Escuela de la Libre Investigación Científica, la Escuela de la Interpretación Objetiva, la Escuela de la Interpretación Savigniana, la Escuela Histórica Evolutiva y la Escuela Teleológica. Obsérvese, por ende, que es imposible contestar con base en dicho texto la pregunta formulada, ya que no se expone la “Escuela Sociológica”, por la que se pregunta.

Segundo. La pregunta resulta indeterminada y anacrónica. Se afirma que Indeterminada, porque la interpretación (como acto de atribución de significado a un texto normativo) siempre versa sobre un objeto (lo que se interpreta). Sin embargo, en la pregunta no se da ningún objeto de interpretación; no se expone ninguna disposición constitucional o legal a ser interpretada. También, resulta anacrónica y confusa, porque la Escuela exegética se desarrolló durante el S. XIX en una época en la que no existía el Estado Constitucional, y donde claramente la fuente principal del derecho eran los códigos napoleónicos.

De esto, se siguen varios errores. La pregunta supone que la escuela exegética se centraría en el análisis del título de propiedad legalmente registrado a nombre de la empresa privada, concluyendo que la propiedad debe ser restituida a su titular, ordenando el desalojo de la comunidad indígena. Pero esta razón, en realidad no se sigue de las tesis interpretativas de la Escuela de la Exégesis. Si identificamos, como lo hace la lectura que se debía usar como base para responder, las tesis interpretativas de la Escuela Exegética, esta escuela defiende la primacía del significado jurídico literal e intencional del autor de una norma. Si en el presente caso tomamos la Constitución como fuente normativa, entonces podríamos considerar que la intención del Constituyente era proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación, en este sentido, a las comunidades indígenas, incluso en este tipo de casos. De esta manera, el método exegético podría darle la razón a la comunidad indígena.

En todo caso, los anterior dependería exclusivamente de las disposiciones normativas a interpretar. En consecuencia, se tiene una de dos opciones: o bien la pregunta supone que la Escuela exegética daría primacía a la ley sobre la Constitución, pero ésta en realidad no es una tesis de interpretación jurídica sino de teoría de las fuentes del derecho; o bien la pregunta supone que hay una antinomia entre normas que protegen al propietario y a la comunidad indígena. Así, el exégeta le daría la razón al propietario; pero, de nuevo, esta no es una tesis de interpretación jurídica sino de resolución de antinomias.

Tercero. La pregunta parece confundir una tesis interpretativa con una tesis ideológica, como si los exégetas fueran partidarios de la propiedad sobre todas las cosas. Por esta razón, parece un equívoco y una inducción al error asociar tesis teóricas de la interpretación con una determinada posición ideológica. La anterior afirmación implicaría que exégeta sería sinónimo de “defensor de la propiedad privada” y escuela sociológica sería sinónimo de “defensor de comunidades indígenas”. En esta medida, claramente, se reproducen estereotipos no fundados, basados en falacias de generalización apresuradas. En todo caso, estas últimas no se siguen del texto citado.

Visto todo lo anterior, y teniendo en cuenta que, está formulada de forma incorrecta la pregunta, las respuestas no tienen coherencia y cohesión frente a lo preguntado; es decir, no existe una respuesta correcta posible. En particular, por las imprecisiones y equivocaciones antes formuladas, se trata de una pregunta sin fundamento en el texto citado (se pregunta por una escuela no expuesta en el texto); y que, además, reproduce generalizaciones apresuradas que no concuerdan con la realidad de las tesis interpretativas esbozadas por las escuelas.

Por tanto, ante la subjetividad en la clave de respuesta genera una ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P75** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

PROGRAMA 3. JUSTICIA TRANCISIONAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA

CONTROL DE LECTURA

Pregunta 4 (P88)

El actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes consagrado en el Código de la infancia y la adolescencia CIA, comparado con el sistema anterior, es un sistema de justicia especial o de responsabilidad en cuanto que, por una parte, desde el punto de vista sustancial, lo medular es la responsabilidad penal y las correspondientes consecuencias jurídicas -

sanciones- aplicables al o la adolescente que comete un delito y, de otro, la especialidad está determinada por la condición de niño y la edad del sujeto pasivo de la acción penal.

Enunciado

De acuerdo con el texto, la idea que se opone a la postura central defendida por el autor respecto del actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA consiste en

Distractores

considerar la edad y condición del adolescente como aspectos relevantes en el proceso judicial

considerar la edad y condición del adolescente como aspectos relevantes en el proceso judicial. (sic) (distractor repetido)

centrarse en la responsabilidad penal y las consecuencias jurídicas, a diferencia del sistema penal formal.

Clave

adoptar un enfoque punitivo similar al sistema penal formal

Incumplimiento de criterios comunicativos

EL contexto carece de la debida citación pues es un párrafo tomado del “Plan de formación de la rama judicial. Programa de formación especializada área penal, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Justicia Restaurativa”, que además fue alterado en la medida que el original, no contiene la expresión “Código de la infancia y la adolescencia”, y las palabras “sistema de justicia especial” se encuentran en cursiva.

En el enunciado se menciona como puntos de partida de la respuesta que: “De acuerdo con el texto” y luego, “la postura central defendida por el autor” sin que haya mención o una mínima identificación de estos. Aunado a lo anterior, en los distractores se repiten dos opciones de respuesta generándose un escenario de confusión y de falta de rigurosidad en la construcción de la prueba.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

El ítem carece de los elementos psicométricos de suficiencia y coherencia. Respecto del primero, en el contexto se desarrolla una caracterización del actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes sin desarrollar la comparación con el sistema anterior, ni mucho menos con otros sistemas, por lo que, con la sola caracterización no es

posible ni siquiera inferir a que es oponible, como lo pretende la instrucción dada en el enunciado. Ello incide en la falta de coherencia entre el enunciado, los distractores y la clave o respuesta correcta, pues con el contenido del contexto no se puede establecer que el sistema penal formal sea algo opuesto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Es claro que la construcción del ítem mide una aptitud de comprensión verbal y lógica, en el sentido de que las opciones de respuesta se encontrarían en el ítem al establecer en el enunciado que: “De acuerdo con el texto”, sin embargo, a partir del contexto no es posible desarrollar el enunciado o inferir información de manera necesaria y suficiente. Ahora bien, no se trató de un control de lectura, sino de medir la capacidad de comprensión de un texto, desconociendo la finalidad del instrumento de evaluación propuesto por parte de la Escuela Judicial en el Acuerdo Pedagógico.

Si la Escuela Judicial reguló que haría un control de lectura bajo una metodología de aprendizaje basado en problemas, no podía cambiar abruptamente la competencia a evaluar y cambiarla por la medición de una competencia de aptitud verbal y lógica, asociada a la comprensión básica de un texto, que solamente implicaba la reconstrucción proposicional de la información propuesta en el enunciado.

Lo anterior es una evidencia del inadecuado diseño, no solo de este ítem, sino de todos los ítems del instrumento de evaluación, el cual no midió las competencias que reguló en el acuerdo pedagógico, de tal manera que las evaluaciones realizadas el 19 de mayo y el 2 de junio de 2024 no puede considerarse como un instrumento objetivo de medición de competencias en esta fase del curso concurso, expresamente por ítems de esta naturaleza que no están diseñados para realizar un control de lectura de temas y contenidos, sino para medir una capacidad o aptitud de comprensión, propia de la fase I de esta etapa de selección.

El ítem mide una competencia diferente a la que reguló la Escuela Judicial que mediría (control de lectura). En este sentido, debió el ítem ser un control de lectura de contenido, y no la medición de una competencia aptitudinal de comprensión de textos.

Teniendo en cuenta que la medición de la competencia de comprensión textual no era la competencia regulada en el Acuerdo Pedagógico a evaluar, es claro que el instrumento de evaluación presenta serios problemas de pertinencia y relevancia de la medición de la competencia.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que, incluso con la medición equivocada de la competencia, la clave de respuesta resulta evidente, a juzgar incluso por la redacción de dos distractores con la misma información, por lo que el ítem incumple con el principio fundamental de las pruebas objetivas: desconoce el principio de discriminación psicométrica, puesto que alguien que no haya leído ningún texto del programa de justicia transicional podía

,incluso, seleccionar la respuesta correcta, creando una injusticia entre quienes si leyeron el material y se formaron en contenidos y quiénes no.

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

Teniendo en consideración los elementos del ítem que generaron cargas cognitivas innecesarias, aunado a la equívoca construcción del ítem para la medición de competencias acordes con el syllabus, se concluye que este ítem no es un instrumento que permita medir la competencia consistente en “motivar la fundamentación y la argumentación jurídica para la resolución de casos con base en los principios de la Justicia Restaurativa” y, además, carece del rigor académico.

Análisis de contenido

La falta de citación debida afecta la idoneidad del ítem en la medida que, al tratarse una lectura obligatoria, los evaluados, conociendo la fuente, hubieran tenido más elementos cognitivos para escoger la respuesta correcta; más aún, porque en el siguiente párrafo del módulo del que extrajo el contexto, se puede leer: “Comparando con el sistema penal formal tradicional, caracterizado por el enfoque retributivo -en el cual lo importante es el castigo como medio disuasivo para evitar la delincuencia juvenil – el SRPA consagrado en el CIA [...]” con lo que se podía establecer de manera efectiva la comparación y oposición del enunciado.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P88**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P88** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 23 (P107)

"La justicia restaurativa, desde los puntos de vista sustancial y procedimental, está conformada por una serie de elementos fundamentales como son el reencuentro, el reconocimiento, la responsabilidad, la reparación o restauración, la reconstrucción y la reintegración. Victimario

y víctima se encuentran o reencuentran en el programa restaurativo para el diálogo, la reflexión y la autocuestionamiento. El ofensor se entera del sufrimiento del ofendido, dimensiona los efectos del daño ocasionado y el otro conoce la situación o las causas o razones que llevaron a aquél a actuar. Los dos indican sus necesidades, expectativas o intereses. El ofensor reconoce que cometió un delito, que irrogó un daño y que su interlocutor es el ofendido que lo sufre. La víctima reconoce al primero como vulnerador de sus derechos y comprende las circunstancias o motivos que originaron su obrar. El ofensor adquiere consciencia del daño y asume su responsabilidad con las respectivas obligaciones de reparar o restaurar. En general, se considera la reparación como las acciones de arreglo pactadas para superar la afectación. La reparación material se realiza mediante la compensación, la devolución, o la indemnización. La reparación simbólica consiste en ofrecimiento de disculpas, manifestación de arrepentimiento, solicitud de ser perdonado. La reparación se divide en restitución y restauración. En aquella se pretende devolver a la víctima a la situación anterior al conflicto, como restituir la tierra al desplazado. En la última, el daño es irreparable no se puede volver a la situación anterior al delito, no es posible devolver lo “perdido”, entonces, hay que restaurar a la víctima en su dignidad. La reparación del daño genera la reconciliación entre las partes que han solucionado el conflicto, la reconstrucción de la relación que antes tenían, o, incluso, la construcción de un nuevo nexo. El ofensor se reincorpora al grupo para evitar el aislamiento y la estigmatización de la pena. Así mismo, incluye la reinserción de la víctima a la colectividad, no pocas veces marginada con ocasión de la conducta injusta. De esta manera, se recupera la confianza en el victimario y se reconstruye el tejido social roto con el comportamiento injusto."

Enunciado

De acuerdo con el texto anterior, las afirmaciones que se oponen a la idea central defendida en el mismo son:

Distractores

La justicia restaurativa se centra en la reconstrucción consensuada de relaciones sociales y la reintegración del ofensor a la comunidad.

El reencuentro entre ofensor y víctima son vitales para generar el reconocimiento y la reparación.

Clave

La justicia restaurativa se centra en la culpabilidad del ofensor y sopesa los derechos de la víctima.

La reparación simbólica menoscaba los derechos económicos de la víctima."

Contenido del ítem

La evaluación de competencias de conocimiento mediante textos extensos, como el presentado, enfrenta dificultades significativas que pueden ser consideradas antipedagógicas, ya que generan cargas cognitivas exageradas que afectan la concentración. En primer lugar, la complejidad y la extensión del texto pueden resultar abrumadoras, dificultando la capacidad para identificar y retener los conceptos clave en el tiempo que tiene el evaluado para responder el instrumento de evaluación.

Además, el texto no defiende una idea central de manera clara, sino que presenta diversas ideas relacionadas con la justicia restaurativa, lo que puede contribuir a la confusión y dificultar la evaluación. La estructura lineal y la falta de ejemplos específicos limitan la capacidad de los estudiantes para contextualizar y aplicar los conceptos en situaciones prácticas. La ausencia de definiciones claras y la densidad del contenido pueden llevar a una interpretación fragmentada, lo que dificulta la evaluación precisa de las competencias adquiridas.

Análisis de las afirmaciones:

Afirmación 1: "La justicia restaurativa se centra en la reconstrucción consensuada de relaciones sociales y la reintegración del ofensor a la comunidad."

- Esta afirmación no se opone a la idea central del texto, ya que se menciona que la justicia restaurativa incluye la reconstrucción de relaciones y la reintegración del ofensor.

Afirmación 2: "El reencuentro entre ofensor y víctima son vitales para generar el reconocimiento y la reparación."

- Esta afirmación no se opone a la idea central del texto, que subraya la importancia del reencuentro y reconocimiento para la reparación.

Afirmación 3: "La justicia restaurativa se centra en la culpabilidad del ofensor y sopesa los derechos de la víctima."

- Esta afirmación no se opone a la idea central del texto, ya que, aunque el enfoque principal de la justicia restaurativa está en la reparación del daño y la reconstrucción de relaciones, esto no puede ocurrir sin reconocer la culpabilidad del ofensor y los derechos de la víctima, atado especialmente al estándar de justicia con enfoque restaurativo.

- El texto detalla cómo el proceso de justicia restaurativa implica que el ofensor asuma la responsabilidad por sus acciones y reconozca el daño causado a la víctima. Esta aceptación de culpabilidad es crucial para que se puedan llevar a cabo acciones de reparación o restauración, que son elementos fundamentales del enfoque restaurativo. La culpabilidad del ofensor no es el fin en sí mismo, sino el punto de partida para las acciones reparadoras que buscan restaurar la dignidad de la víctima y reconstruir el tejido social. Además, los derechos de la víctima son considerados y sopesados a lo largo del proceso, la víctima tiene la oportunidad de expresar sus necesidades, expectativas e intereses, y que el ofensor debe ser consciente de éstas al asumir su responsabilidad. La justicia restaurativa, por lo tanto, no solo se centra en la culpabilidad del ofensor, sino también en equilibrar esto con los derechos y necesidades de las víctimas para lograr una reconciliación y restauración efectiva.

Afirmación 4: "La reparación simbólica menoscaba los derechos económicos de la víctima."

- Esta afirmación se opone a la idea central del texto, que no menciona que la reparación simbólica menoscabe los derechos económicos de la víctima, sino que la considera parte importante de la reparación y en perspectiva complementaria.

Conclusión: De acuerdo con el texto anterior, y el sentido negativo de la instrucción del enunciado ("las afirmaciones que se oponen a la idea central defendida en el mismo son"), es imperativo concluir que ninguna de las opciones de respuesta -combinadas- sería correcta, pues la única afirmación que se opone a la idea central es la afirmación 4. Como se explicó con antelación, la afirmación 3 es coherente con la idea general del texto, ya que reconoce que la justicia restaurativa requiere tanto el reconocimiento de la culpabilidad del ofensor como la consideración de los derechos de la víctima, elementos ambos necesarios para la reparación del daño y la reconstrucción de las relaciones sociales.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P107**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P107** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

TALLER

Pregunta 40 (P124)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar

la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P124** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 40 (P124) del módulo de Interpretación Judicial y Estructura de la Sentencia tenía como clave correcta un apartado literal del texto obligatorio “BOLÍVAR, Aura P., SÁNCHEZ, Nelson & UPRIMNY, Rodrigo (s/f). Restitución de Tierras en el marco de la justicia transicional civil. Módulo de Formación autodirigido. Plan de Formación de la Rama Judicial. Bogotá. Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, (pp. 107-

150).” Más exactamente el contenido en la página 21, como se describe en la imagen que sigue.

Comisiones de la verdad y reconciliación

Estas comisiones son órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. Aunque las comisiones de la verdad no son un sustituto de la acción judicial, sí ofrecen cierta posibilidad de explicar el pasado, por lo que han sido particularmente útiles en aquellas situaciones en las que emprender el enjuiciamiento por crímenes masivos era imposible o poco probable, fuera por falta de capacidad del sistema judicial o por una amnistía de hecho o de derecho.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*temporales, judicial y pasado*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto incluyó las palabras “*permanentes, penal y presente*”. Entonces uno se cuestiona, dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P124** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad y no en 3.34 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 1/3 del ítem en cuestión.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida parcialmente la pregunta **P124** puesto que erré al intercambiar la palabra judicial

con penal y si se observa con atención basta con leer el artículo 250 de la Constitución Nacional para establecer que la especialidad penal es una acción judicial, es decir, toda acción penal, es una acción judicial en una relación especie-género, por lo que al marcar *que las comisiones de la verdad no son un sustituto de la acción penal*, no representa una diferencia significativa con marcar *que las comisiones de la verdad no son un sustituto de la acción judicial*, lo que indudablemente no hace perder el sentido o la coherencia del texto, pues recuérdese aquí no se evalúa lo literal sino la adquisición de competencias.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P124** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida parcialmente, y los **3,33 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial en un total de **6,67 puntos** (es decir sumar los 3,33 puntos corregidos por la objeción a los 3,33 puntos acertados en la prueba).

PROGRAMA 4. ARGUMENTACIÓN JUDICIAL Y VALORACIÓN PROBATORIA

CONTROL DE LECTURA

Pregunta 2 (P128)

A partir de los postulados de la teoría de la argumentación jurídica, se establece que la justificación interna se refiere a un procedimiento de tipo deductivo, en el cual se parte de una premisa mayor, una premisa menor y se obtiene una conclusión, lo cual implica que la premisa mayor se corresponde con una norma jurídica, la premisa menor con los hechos, y la conclusión con la sentencia judicial.

Enunciado

De acuerdo con el texto anterior, desde el punto de vista del razonamiento jurídico, la sentencia judicial encuentra argumentada racionalmente su justificación interna si

Distractores

existe reciprocidad lógica entre la premisa mayor y la premisa menor.

existe reciprocidad lógica entre los hechos y la sentencia judicial.

existe reciprocidad logica (sic) entre la norma juridica (sic) y la conclusión.

Clave

existe reciprocidad lógica entre ambas premisas y la desición (sic).

Incumplimiento de criterios comunicativos

Para comenzar, el texto que se presenta no está adecuadamente contextualizado. Se afirma lo anterior en la medida en que no se establece el autor o teoría a partir del cual o la cual se hacen las afirmaciones que lo contienen. Como se verá, el mismo programa, con un texto como el del profesor Manuel Atienza⁸², muestra que **no hay una teoría** de la argumentación, sino diversas teorías, distintas entre ellas. En esa medida, un evaluado competente extrañará el contexto de cuál teoría es la referida en el texto.

Por su parte, en el enunciado, se presenta el término “razonamiento jurídico” como tratando de hacerlo equivalente a argumentación jurídica, sin éxito por supuesto. Posteriormente, se presentan las opciones de respuesta con errores garrafales de ortografía. Lo más grave de todo es que la clave de respuesta tiene uno de los peores errores de todos: **“decisión”**. Un evaluado competente dudará de una respuesta que tenga ese tipo de error. Por demás, el contenido de las opciones de respuesta es absolutamente vago; parece inventado, como traído de la ficción.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Para comenzar, en relación con los elementos psicométricos, la discusión anterior permite afirmar, sin lugar a dudas, que el ítem falla en relación con su claridad. Como se verá, en relación con su coherencia y relevancia, se evidencian problemas en el sentido de que la pregunta y las opciones de respuesta son vagas, falsas o imprecisas.

⁸² ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica. Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

Incumplimiento del Acuerdo y del Syllabus

El texto propuesto para fundamentar la formulación de la pregunta no cumple con los siguientes elementos propuestos en el acuerdo y el syllabus:

- ⇒ Dado que el texto carece de rigor teórico, se incumplió con el acuerdo en los siguiente:
 - i) impartir una formación especializada, integral y de alta calidad para los aspirantes,
 - ii) suministrar herramientas que faciliten y mejoren las decisiones judiciales, iii) proveer contenidos digitales con rigor e impacto académico⁸³.
- ⇒ Por lo precario de contenido e impacto académico, se da lugar a imprecisiones de referencia respecto del uso de las categorías y conceptos, dado que se presentan de forma errada y sin rigor académico.

Análisis de contenido

Como ya se mencionó, la ausencia de una referencia para ubicarse teórica o conceptualmente hace imposible desarrollar tarea cognitiva alguna. Sin saber a la luz de qué autor nos estamos ubicando, no sabremos tampoco si las afirmaciones que se hacen son verdaderas, razonables o, por lo menos plausibles.

Este error ortográfico en la clave de respuesta genera la pérdida de confiabilidad suficiente para que se pierda la seguridad de la pregunta **P128**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P128** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 3 (P129)

⁸³ ACUERDO PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, "Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el "IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021., pp. 7 -10.

De acuerdo con Manuel Atienza, “La argumentación es, en realidad, una acción —o un proceso— con la que se pretende obtener un resultado: lograr la adhesión del auditorio, pero sólo por medio del lenguaje, es decir, prescindiendo del uso de la violencia física o psicológica”.

Enunciado

De acuerdo con lo anterior, el elemento de la argumentación al que se refiere es

Distractores

- al auditorio.
- a la persuasión.
- a la demostración.

Clave

al discurso.

Incumplimiento de criterios comunicativos

Para comenzar, se introduce, una cita descontextualizada e incorrecta del profesor Atienza. Se dice que descontextualizada e incorrecta, porque allí Atienza está citando a Perelman & Olbrechts-Tyteca, en su *Tratado de argumentación*. Sin esta información, se apelaría a la memoria del evaluado para que recuerde ese fragmento particular; en todo caso, se impone una carga cognitiva innecesaria, dado que un evaluado competente sabrá que esa no es la postura de Atienza.

Por otra parte, el enunciado no es coherente en absoluto con el contexto. En efecto, este enunciado implica una afirmación según la cual el texto está haciendo referencia a “un elemento de la argumentación”. Sin embargo, el texto se refiere a la argumentación en general. En esta misma medida, las opciones de respuesta no guardan coherencia alguna ni con el contexto, ni con el enunciado.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Para comenzar, en relación con los elementos psicométricos, la discusión anterior permite afirmar, sin lugar a dudas, que el ítem falla en relación con su claridad. Como se verá, en relación con su coherencia y relevancia, se evidencian problemas en el sentido que, tanto la forma como el contenido, permiten evidenciar la falta de comprensión del tema objeto de evaluación por parte de los constructores de ítems. De hecho, lo que se presenta constituye una cita de una cita, y se tergiversa enormemente.

Fuente de información

La fuente de información es confiable y está dentro de las obligatorias. Sin embargo, como ya se dijo, se encuentra mal citada en tanto no es cierto que esa postura sea de Atienza, sino que es una cita que Atienza hace de Perelman & Olbrechts-Tyteca (*Tratado de argumentación*). En esta medida, es clara la falta de comprensión del desarrollo histórico de los conceptos por parte del constructor de ítems. Pareciese que, al azar, se seleccionase un párrafo para completar de manera totalmente antihistórica, antiacadémica y antirigurosa.

Análisis de contenido

De nuevo, el mayor reproche de contenido para este ítem tiene que ver con el error de citación, con consecuencias graves en términos de comprensión y cargas cognitivas. Se debe precisar, además de todo lo anterior, que la cita proviene del *Capítulo Tercero: Perelman y la nueva retórica, del libro las Razones del derecho*, de Manuel Atienza⁸⁴. Evidentemente, como ya se ha dicho repetidamente, no es una postura del profesor Atienza.

Por demás, lo que termina haciendo el constructor de ítems es tomar otro fragmento del capítulo en el que se habla, ahí sí, de tres elementos de la argumentación: “En la argumentación se pueden distinguir tres elementos: el *discurso*, el *orador* y el *auditorio*” (p. 49). De nuevo, se trata de Atienza citando a Perelman y compañía. Una vez más, es falso que el discurso se defina o se caracterice como pretende el constructor de ítems hacernos creer.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta genera un grado de incongruencia suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P129**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P129** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 17 (P143)

Respecto a esta pregunta respetuosamente solicito se me adicione el puntaje conforme la RESOLUCIÓN No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 que en su parte motiva dispuso:

84 ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. UNAM. 2005.

“Durante el proceso de análisis posterior a la aplicación de la evaluación, se obtuvieron indicadores psicométricos para todos los ítems que componían la prueba. Como resultado del proceso, se detectaron alertas en los índices de discriminación, lo cual indicó posibles problemas en su capacidad para medir adecuadamente el rendimiento de los discentes. Estas preguntas fueron revisadas minuciosamente por un grupo de expertos, quienes determinaron que las preguntas P35, P50, P143 y P295 no cumplían con los estándares esperados de validez y confiabilidad, por lo que en un esfuerzo por mantener la equidad en la evaluación, se optó por imputar el acierto a todos los aspirantes en estas preguntas específicas. Adicionalmente, para la pregunta P275 se identifica como un caso tipo 2, alerta de doble clave por lo que optó por reconocer el punto a los discentes que hubieren contestado cualquiera de las opciones validas”.

Por lo cual solicito se me adicione un total de **1,25 puntos** a mi puntaje parcial.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL O DE CASOS

Pregunta 34 (P160)

En relación con esta pregunta lo primero que se debate es que no cumple con el criterio de la actividad objeto de evaluación denominada análisis jurisprudencial o de casos pues no busca que el discente ponga en práctica las propuestas metodológicas aprendidas, en un determinado problema que será planteado por la Escuela Judicial. Esta actividad debe inexorablemente consistir en la resolución de problemas a partir del análisis jurisprudencial o planteamiento de caso que, según el tipo de programa, podrán ser jurídicos o no jurídicos, es decir busca que luego de analizar un caso o problema determinado el discente llegue a una conclusión atendiendo las habilidades y competencias adquiridas.

Lo cierto es que el cuestionamiento aparentemente se muestra como un caso de análisis, empero contrario a lo esperado no exige análisis alguno, sino que pretende que el discente escoja entre varias opciones para que determine cuál es la más aproximada al criterio del evaluador. Recuérdese que el modelo de pregunta de selección múltiple con única respuesta se caracteriza por permitir que los/las discentes lean, **analicen** y **saquen conclusiones** para luego seleccionar entre varias opciones de respuesta, cosa que no sucede en el caso objetado, pues a pesar del contenido del texto de la pregunta no es posible que el discente llegue a una conclusión efectiva que le otorgue la respuesta correcta, sino por el contrario lo que se pide es que memorísticamente se escoja la respuesta más aproximada al criterio del evaluador.

En síntesis, la pregunta pretende evaluar a modo de control de lectura el texto " CANOSA SUÁREZ, Ulises. La prueba en procesos orales, civiles y de familia, Plan de Formación de la Rama Judicial - Módulo de aprendizaje auto dirigido. Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bogotá. 2013", pues la construcción de la pregunta refiere esencialmente no a un análisis a fin de llegar a una conclusión, sino por el contrario a

recordar el contenido de la lectura. A este argumento debe adicionársele que además de tornarse un control de lectura y no un análisis de caso, el apartado del que La Escuela Judicial optó por evaluar no hace parte de las páginas obligatorias de lectura, sino que es un apartado contenido en la página 56 de los cuales no se nos pidió leer dentro del Syllabus del módulo evaluado. Tal como se aprecia en la siguiente imagen:

El proceso oral es de presentes, no de ausentes, como era el escrito, donde el juez estaba distante, las partes lejanas, algunos órganos de prueba actuaban por escrito como los peritos y los únicos que tenían contacto con el juez eran los abogados.

La presencia en la audiencia se facilita y promueve con el apoyo de la tecnología. El parágrafo primero del artículo 107 del CGP permite que las partes y demás intervinientes participen en la audiencia a través de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técnico, siempre que por causa justificada el juez lo autorice. De la misma manera podrán practicarse las pruebas (artículo 171 CGP).

Entonces, se tiene que el evaluador tomó este aparatado literal del texto y cuestionó a los discentes que cito: *Según lo planteado en el texto*, ¿cuál es una diferencia clave entre el proceso oral y el proceso escrito en cuanto a la práctica de pruebas? Para lo cual otorgó cuatro opciones con una única respuesta correcta.

Aquí ya se puede notar la ambigüedad de la pregunta, pues no se colige con claridad si el evaluador pretende que se elija una respuesta según lo planteado en el texto, o si pretende que el discente analice cual de las opciones es *clave* o cuente con un mayor estatus de *clave* frente a las otras. Ahora no conforme con la ambigüedad de las preguntas, a la censura debe adicionársele la ambigüedad de las claves de respuestas, que para el sustento debido⁸⁵ son las siguientes:

- a. en el proceso escrito los peritos siempre comparecían personalmente ante el juez.*
- b. en el proceso escrito existía mayor cercanía entre el juez, las partes y los abogados.*
- c. en el proceso oral la presencia de los sujetos procesales se facilita con el uso de tecnología.*

⁸⁵ Me acojo al criterio expuesto en la Sentencia SU-267 de 2022 que sostiene que “la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes»

d. en el proceso oral se prescinde totalmente del uso de medios escritos para la práctica de pruebas.

Por tanto, la pregunta exige que conforme al texto se escoja entre las opciones la más *clave* entre el proceso oral y el proceso escrito en cuanto a la práctica de pruebas, deducción que se colige del texto y no del análisis propio del evaluado el cual podría analizar y sustentar con argumentos válido la respuesta que considere más correcta, recuérdese que el texto del Dr. Canosa en ningún apartado categoriza las opciones dadas por la Escuela Judicial, por tanto el primer argumento de cesura corresponde a que la pregunta P160 es un control de lectura y no un caso de análisis, prueba reinante de ello es que cualquier persona sin discriminar no la podría diferenciar de las preguntas 45, 46 y 47 de este mismo módulo, las cuales cuentan con la misma estructura.

Por tanto, ante la subjetividad en la clave de respuesta que genera una ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P160** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mí erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta P160, en atención a que la clave de respuesta escogida por mí tiene mayor grado de acierto que la propuesta por el formador como válida, como paso a explicar.

De la lectura del texto se nos pidió a los discentes escogiéramos la diferencia *clave* entre el proceso escrito y el proceso oral, pero en cuanto a la práctica de las pruebas, no a la relación o asistencia de los sujetos al proceso, por tanto, si se nos preguntó un aspecto relacionado con las práctica probatoria la respuesta más acertada es que en el proceso oral a diferencia del escritural se prescinde de medios escrito para la práctica de pruebas (opción de clave marcada por mí) pues es la única opción de respuesta que refiere sobre práctica probatoria comparando el sistema oral del sistema escritural. No se entiende como la clave correcta refiere sobre la presencia de los sujetos procesales por el uso de medios tecnológicos, pues eso en nada afecta la práctica probatoria.

Por tanto, si lo que se preguntaba era relacionado a práctica de pruebas, lo coherente es que la respuesta correcta refiera precisamente a un aspecto probatorio y no de simple presencia en el proceso.

Por tanto, ante la subjetividad en la clave de respuesta que genera una ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P160** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 35 (P161)

Contexto de la pregunta

En una ciudad intermedia de Colombia, se está llevando a cabo un proceso penal contra Juan Pérez, acusado de tráfico de drogas y asociación para delinquir. La Fiscalía General de la Nación presentó como evidencia principal varias grabaciones telefónicas que supuestamente incriminan a Pérez en actividades delictivas. Las grabaciones fueron obtenidas sin una orden judicial válida. La Policía Nacional interceptó las llamadas de Pérez basándose en información anónima, pero sin la autorización judicial requerida para la interceptación de comunicaciones. Esta violación al debido proceso fue descubierta durante el juicio, cuando la defensa de Pérez cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas. Posteriormente, la Fiscalía presentó evidencia adicional derivada de la información obtenida en las grabaciones ilícitas. Esto incluyó testimonios de co-acusados que confesaron su participación en la red de tráfico de drogas, basándose en la información obtenida de las grabaciones.

Enunciado

En el caso expuesto, usted debe decidir sobre la admisión o exclusión de las confesiones derivadas de las grabaciones telefónicas obtenidas sin orden judicial, así, las confesiones

Distractores

Pueden ser admitidas si la Fiscalía logra demostrar que las grabaciones no influyeron significativamente en la decisión judicial.

Pueden ser admitidas si la información anónima que llevó a la obtención de las grabaciones era suficientemente creíble.

Deben ser excluidas si no es posible verificar su autenticidad y relevancia de las grabaciones para el caso.

Clave correcta

Deben ser excluidas del proceso porque las grabaciones fueron obtenidas sin la debida autorización judicial, violando el debido proceso.

Incumplimiento de elementos psicométricos basados en la evidencia de contenido

Como se verá, en relación con la coherencia y relevancia del ítem, se evidencian problemas en el sentido que, tanto la forma como el contenido, permiten evidenciar la falta de comprensión del tema objeto de evaluación por parte de los constructores de ítems.

Fuente de información

EL texto carece de referencias bibliográficas. No tiene en cuenta las particularidades de la ley penal ni sus excepciones. No hace referencia al modo en que el Código de Procedimiento Penal hace operativo el derecho fundamental debido proceso al no señalar de manera puntual a qué artículos ni a qué momento procesal estaba adecuada la pregunta. La consecuencia de estas carencias es una redacción alrevesada que desconoce la preceptiva procesal penal y que no presenta rigor teórico.

Análisis de contenido

- La pregunta está relacionada de manera directa con el trámite procesal penal. Al proceso penal, es transversal el derecho fundamental al debido proceso. Este derecho impide el desarrollo de actuaciones estatales que en desarrollo del proceso penal vulneran garantías y derechos fundamentales. De ahí que se halle explicitado en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal la invalidez de las pruebas obtenidas vulnerando garantías fundamentales: “Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.”.
- En el enunciado de la pregunta se señala: “Esta violación al debido proceso fue descubierta durante el juicio, cuando la defensa de Pérez cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas.” En el proceso penal el descubrimiento probatorio está

preceptuado en la audiencia de acusación, a tenor del artículo 337 numeral 5. No obstante, la oportunidad procesal para solicitar la exclusión de las pruebas descubiertas es la audiencia preparatoria, según prescribe el artículo 359 de la Ley 906 de 2004. En la pregunta la expresión “cuestionó la legalidad” se homologa a la acción procesal de solicitar la exclusión de la prueba, siendo un error ya que la pregunta no distingue de manera precisa en qué audiencia se encuentra el proceso.

- También indica la pregunta: “Posteriormente, la Fiscalía presentó evidencia adicional derivada de la información obtenida en las grabaciones ilícitas. Esto incluyó testimonios de co-acusados que confesaron su participación en la red de tráfico de drogas, basándose en la información obtenida de las grabaciones.” Es ente apartado la pregunta también es vaga e imprecisa. Cuando se escribe “posteriormente” no se está explicitando si esto ocurre después de haber descubierto las pruebas obtenidas vulnerando garantías fundamentales en la misma audiencia de acusación o en otra audiencia, como la preparatoria. En síntesis, el escenario fáctico del que se sirve la pregunta en el enunciado no es coherente con la ley penal ni con el Código de Procedimiento Penal. El redactor no supo precisar con claridad lo que fáctica y procesalmente es posible en cada momento procesal.
- No se acude a fuentes doctrinarias que se manera especializada aborden las particularidades del proceso penal.
- No se hace referencia a la legislación penal. Se entiende que esta pregunta en ese marco legal. Sin embargo, no se explicita la etapa procesal a la que se alude. Sin este insumo la pregunta se torna confusa y, en buena medida, arbitraria.
- No se hace referencia a jurisprudencia ni de la Corte Suprema de Justicia ni de la Corte Constitucional en la que se ha desarrollado cómo debe actuar el operador judicial ante estas situaciones. De la Corte Suprema de Justicia hubiese sido pertinente el auto interlocutorio radicado 31127 del 2009 en el que de manera directa se habla de la prueba y de la teoría del árbol envenenado.

El enunciado de la pregunta no se corresponde con la respuesta. De este modo, el lector que escoge la respuesta correcta lo hace, no por la claridad conceptual del texto, sino porque es un conocimiento mínimo del derecho penal. En tal sentido, la estructura de la pregunta es incoherente y no cumple con la vocación de discriminación que debería tener un ítem.

Por tanto, ante la subjetividad en la clave de respuesta que genera una ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P161** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me

conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Subsidiariamente solicito que por su ambigüedad jurídica solicito que en caso de que prospere en el recurso de algún otro discente peticiono que el suscrito también sea beneficiado y se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, o si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad esta pregunta en particular amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

PROGRAMA 5. ÉTICA, INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL

CONTROL DE LECTURA

Pregunta 16 (P184)

En lo que refiere a esta pregunta respetuosamente solicito se declare que clave escogida por el suscrito como respuesta correcta, esto en atención a que la clave marcada por el evaluador resulta errónea conforme el texto seleccionado.

La pregunta 16 del Módulo de Ética, Independencia y Autonomía Judicial tiene como base el control de lectura del texto obligatorio “CARRILLO DE LA ROSA, Yezid y BECHARA LLANOS, Abraham Zamir. Juez discrecional y garantismo: Facultades de disposición del litigio en el Código General del proceso. JURÍDICAS CUC. Enero-diciembre de 2019, vol 15, nro. 1, p. 229-262. [Consultado: 21 de abril de 2021].” Más exactamente en la página 233, com se observa a continuación.

El CGP (2012) mediante sus postulados fundantes pretende, establecer un rol de garantías por parte del funcionario judicial correspondiente, en la medida en que no se vean afectados los derechos fundamentales de los que acuden al proceso, y los resultados de los interés contrapuestos, tengan rasgos de cumplir no solo con el principio de legalidad fundante de la noción de Estado de derecho de tradición decimonónica, sino de una observancia real del principio de justicia y de razonabilidad en la decisión judicial, siendo precisamente en este aspecto que se debe buscar la verdad procesal, que tanto se habla en los procesos judiciales (Parra, 2012), a luz de un sistema de garantías de los derechos fundamentales. Configurándose la administración de justicia como una potestad ampliada más allá de las facultades del juez. <<El concepto de administración de justicia no queda supeditado a la intervención de los jueces de la República como agentes del Estado>> (Meza, Arrieta y Noli, 2018, p. 192) Parra (2012) indica en la efectiva igualdad de las partes dentro del proceso:

Del texto seleccionado el evaluador cuestiona acerca de qué debe garantizar la administración de justicia en sus decisiones judiciales, para lo cual estableció cuatro opciones, pidiendo al discente que marcara las dos más correctas de las siguientes⁸⁶:

1. *El principio de igualdad y debido proceso a las partes.*
2. *El principio de justicia y el principio de razonabilidad.*
3. *Los derechos fundamentales y el principio de legalidad.*
4. *Los derechos de los administradores de justicia.*

La clave de respuesta escogida por la Escuela Judicial como correcta corresponde las opciones 2 y 3

La clave de respuesta marcada por el suscrito (y que es la correcta realmente) correspondió a las opciones 1 y 2.

⁸⁶ Me acojo al criterio expuesto en la Sentencia SU-267 de 2022 que sostiene que “la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes»

Como quiera que la opción 2 es coincidente en las claves de respuesta en discusión objetaré lo concerniente al porqué la opción de respuesta 1 es correcta mientras que la 3 es incorrecta.

Para sustentar la objeción debe tenerse en cuenta el contenido armónico del texto en cuestión, es decir la totalidad del mismo, para luego de un análisis de comprensión lectora llegar a la conclusión de que la administración de justicia a través del derecho de acceso a la administración judicial propende por la efectiva igualdad de las partes en el proceso, o lo que es igual al principio de igualdad, así mismo al debido proceso como principio rector de las garantías fundamentales en litigio (ver páginas 233 y 235).

fundamentales. Configurándose la administración de justicia como una potestad ampliada más allá de las facultades del juez. <<El concepto de administración de justicia no queda supeditado a la intervención de los jueces de la República como agentes del Estado>> (Meza, Arrieta y Noli, 2018, p. 192). Parra (2012) indica en la efectiva igualdad de las partes dentro del proceso:

233

Si bien este principio es totalmente apuntado a una adecuación procesal de las partes con el litigio los derechos en conflicto y el juez (Parra, 2012), conductor y líder del proceso, no desconoce un cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de garantías procesales, como son: <<el debido proceso, el derecho de defensa, juez natural y de más principios complementarios de la actuación judicial>>. En este entendido el juez se convierte en garante en uso proporcional de su direccionalidad en conductor de la realidad social enmarcada en proceso jurídica, ilustra este cometido la siguiente construcción:

Además, el texto expresamente se contrapone al equivocado cumplimiento del principio de legalidad para en su lugar operar bajo un escenario de discrecionalidad que permita la protección de los derechos fundamentales de las partes. Ver imagen.

todos los asociados, bajo esta perspectiva el análisis de la designación de práctica de pruebas en el proceso de manera oficiosa, busca principalmente adentrarnos en la mayor medida posible, hacia un escenario en que la discrecionalidad del juez no orbite de manera desmedida o desmesurada, ante el cumplimiento y observancia del principio de legalidad. La prueba en este sentido, desde el garantismo del fallador como reducción a la actividad discrecional del operador jurídico, toma un papel preponderante en los sistemas jurídicos constitucionalizados como el nuestro. Generándose inclusive la prueba como un genuino derecho fundamental. Esto lo ha advertido Luna (2018) recientemente:

Por estas razones solicito que ante el error de la Escuela Judicial se determine que la pregunta **P223** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL O DE CASOS

Pregunta 35 (P203)

La objeción de esta pregunta corresponde a que la clave correcta de respuesta escogida por la Escuela Judicial se duplica en las opciones c y d de la Sala 4 (en la que participé) siendo que ambas son iguales al referir las opciones 1 y 4 como correctas.

El suscrito marcó como clave correcta la clave C, y se registró como correcta la Clave D, empero ambas son iguales, ante la duplicidad de claves correctas respetuosamente solicito que la pregunta **P203** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

TALLER

Pregunta 40 (P208)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes,

disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P208** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 40 del programa de Ética, Independencia y Autonomía Judicial tenía como clave correcta el apartado literal del artículo 18 de la lectura “CIEJ. Código Iberoamericano de Ética Judicial. Santiago de Chile, 2014. p. 1-17. [Consultado: 21 de abril de 2021]. Disponible en <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/CIEJ/Codigo-Iberoamericano-de-Etica-Judicial/>” como se describe en la imagen que sigue.

CAPITULO III

Motivación

ART. 18.- La obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales.

ART. 19.- Motivar supone expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*legitimidad, impugnaciones y resoluciones*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto incluyó las palabras “*principios, prevalencia y autoridad*” como distractores. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el resumen y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P208** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje

parcial en su totalidad y no en 6,67 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 2/3 del ítem en cuestión.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta **P208** puesto que erré al intercambiar la palabra impugnaciones con principios y si se observa con atención basta leer detenidamente la oración transcrita literalmente por el formador para entender que la oración “*la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales*” y la oración “*la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de principios procesales*” cuentan con el mismo sentido y coherencia, puesto que la obligación de motivación en la decisión judicial también responde a un sistema de principios conforme lo describe inclusive la nomenclatura de la Parte I del Código Iberoamericano de Ética Judicial dentro del cual se registra en el artículo 18 la motivación como un principio ético del proceso judicial (Ética Judicial Iberoamericana).



PARTE I

Principios de la Ética Judicial Iberoamericana

CAPITULO I

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P208** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida en su totalidad, y los **3,33 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 41 (P209)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el **discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa** con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la **construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.**

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P209** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

En este caso en particular, el error de la Escuela Judicial es aún más lesivo ya que la pregunta 41 del programa de Ética, Independencia y Autonomía Judicial tenía como clave correcta un apartado litera de la lectura “Módulo de Ética Judicial” pero en su versión corregida del año 2020 lectura que no hacer parte de la bibliografía obligatoria del módulo de Ética Judicial, pues al ver el contenido del *Syllabus* se advierte que la lectura obligatoria corresponde a una versión anterior del año 2016 denominada “DUSSÁN Cabrera, Enrique. Módulo Ética Judicial. VII Curso de Formación Inicial para jueces y Magistrados. Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Bogotá D.C. noviembre de 2016. (pp. 1-53).” Por lo que además de ser un mero control de lectura y no un taller, resulta que la transcripción literal del texto ni siquiera hacía parte de los textos que fueron proporcionados por el evaluador.

Así, se tiene que la pregunta 41 –mal llamada taller- resulta ser una transcripción literal del punto 1.1.2. página 21 del texto Módulo de Ética Judicial” pero en su versión corregida del año 2020 que además termina siendo una referencia del texto “RESTREPO, Legitimidad del derecho como fundamento de las prácticas políticas. Op. Cit., pp. 177-191. Ver una concepción similar desde la discusión por el Estado laico en FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid: Trotta, 2008. p. 140-141” como se evidencia en la siguiente imagen.

La pregunta acerca de si hablar de ética y moral es lo mismo, remite, o bien a una cuestión intrascendente, o a un problema que puede tener implicaciones prácticas para los servidores y las servidoras de la Rama Judicial, y en general del Estado. Desde el primer punto de vista, como afirma Vigo²⁴, si bien desde ciertas corrientes filosóficas se han diferenciado ya la ética y la moral, sus vocablos remiten ambos a las ideas de “costumbre” o “práctica social”, de manera que en tal perspectiva podría hablarse de una y la otra sin distinción. Sin embargo, tal vía interpretativa sin distinciones semánticas muy especializadas no radica principalmente en que sus acepciones sean similares, sino en que hablar de ética es hablar de *filosofía moral*, lo cual significa que, desde el punto de vista teórico, la ética es una reflexión racional y argumentada sobre valores, creencias, ideas o principios morales orientados a fundamentar las decisiones, actitudes y acciones. La diferencia entonces radicaría en que mientras la ética es una guía racional, crítica y reflexiva de las actitudes y acciones con base en el “deber ser”, la moral es la internalización de factores familiares, culturales, sociales, religiosos, sectarios o ideológicos que influyen y determinan las actitudes personales²⁵. De ahí que se diga:

La ética y la moral, de una forma u otra, van juntas aunque no son lo mismo. La ética parte de la diversidad de morales que existen tanto en espacio y tiempo, no es identificable con alguna moral en particular y, a la vez no es indiferente a ninguna; además, intenta buscar sus coincidencias y sus distinciones, entender el todo por el todo mismo (...) ²⁶

Como se verá a través de este Módulo, es posible que tal distinción tenga implicaciones prácticas para la Ética Judicial cuando se analiza la demarcación entre la dimensión privada y pública de la moral en cuestiones como la independencia, la imparcialidad o la prudencia de los jueces y las juezas. Póngase por caso un servidor público que, aunque no recibe su legitimidad de la elección popular, tiene una elevada dignidad en la medida que de sus opiniones y acciones depende buena parte del principio constitucional del interés común o general²⁷. Si tal servidor o servidora funda principalmente sus decisiones bajo los criterios de una religión o un credo en particular, en términos generales podría decirse que actúa moralmente, toda vez que se basa en un orden normativo, pero: ¿actúa

²⁴ VIGO, Ética Judicial. Op. Cit., p. 9.

²⁵ RESTREPO, Legitimidad del derecho como fundamento de las prácticas políticas. Op. Cit., pp. 177-191. Ver una concepción similar desde la discusión por el Estado laico en FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid: Trotta, 2008. p. 140-141.

²⁶ OCHOA Ética General Op Cit n 4

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*ética, deber ser y moral*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto optó por omitir las palabras “*deber ser*” y en su lugar dejó consignada como posibilidad la palabra “*ordenamiento jurídico*” como distractores, es decir **la opción correcta “*deber ser*” no fue adicionada como posibilidad correcta**, lo que hace que ningún discente logre obtener el acierto total, ya que siempre va a presentarse al menos un error en las claves de respuesta, o más claro aún, el puntaje máximo a obtener en esta pregunta taller es 6,67 y no 10 puntos.

Además de lo anterior, uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el

querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto en el cual incluso el evaluador transliteró equivocadamente una las opciones, pues bastaba con leer el resumen y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P209** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

PROGRAMA 6. DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

CONTROL DE LECTURA

Pregunta 1 (P211)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del control de lectura, que adelanto no buscaron demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, sino por el contrario se diseñaron para evaluar desde una concepción memorística, y no como debía ser desde una postura analítico-deductiva de razonamiento.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta pregunta de control de lectura, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que acorde a lo establecido en el punto 4.2.3.1.1.1. del Documento Maestro que define los criterios para la evaluación del Subfase General. 1. Control de Lectura, que respecto al criterio evaluable “Control de lectura” define que se realizará bajo la técnica de prueba tipo Test.

Del control de lectura se establece que su ponderación se determinará por el número de respuestas correctas con un tope máximo de 40 puntos sobre 125 de cada programa. Adicionalmente, en torno a las competencias por evaluar se estimó que como competencias generales el criterio evaluativo sería respecto de las habilidades lectoras, de análisis y comprensión del discente, que asumo se refiere a comprensión lectora. En lo que atañe a las competencias específicas a evaluar estas corresponderían a las definidas en el *Syllabus*.

Ahora bien, en el Syllabus de cada módulo se especificaron individualmente los criterios de evaluación, y respecto al Control de Lectura se estableció expresamente que la evaluación con esta herramienta estaba *ponderada con 40 puntos de los 125 asignados a cada uno de los ocho (8) programas, en esta actividad evaluable, los/las discentes deberán responder a cuestionarios de pregunta cerrada opción múltiple con única respuesta (Tipo I) y opción múltiple con múltiple respuesta (Tipo IV), donde deberán demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, no solamente desde una concepción memorística, sino desde una postura analítico-deductiva (razonamiento).*

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. **Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.**

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco *el grado de apropiación de contenidos del programa y la comprensión lectora* respecto de la herramienta de evaluación control de lectura.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un test evaluativo que buscara el razonamiento y análisis lector optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo memorístico, y en este mal diseñado control de lectura exigió a los discentes recordar el tenor literal del contenido de las lecturas obligatorias, sus apartados exactos, nombres de capítulos o inclusive el contenido literal de pies de página, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el control de lectura propuesto en el ítem **P211** es totalmente memorístico, y no permite el ejercicio de razonamiento del discente al momento de escoger la clave de respuesta, paso a explicar.

La pregunta 13 del módulo de Derechos Humanos y Género tenía enunciado un apartado literal de la lectura “COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-878 de 2014. Referencia: expediente T-4.190.881 (18, noviembre, 2014). M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Leer a partir de las consideraciones de la Corte.” más exactamente de las páginas 45 y 46 como se describe en las imágenes que siguen.

5. La violencia de género impone obligaciones a la sociedad

Como se ha mencionado, la violencia de género es aquella violencia que hunde sus raíces en las relaciones de género dominantes de una sociedad, como resultado de un notorio e histórico desequilibrio de poder⁸⁸. En nuestra sociedad el dominio es masculino por lo que los actos se dirigen en contra de las mujeres o personas con una identidad de género diversa (lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) con el fin de perpetuar la subordinación.

Centrándose en lo concerniente a la violencia contra las mujeres, las agresiones van más allá de las lesiones físicas y psicológicas, denominadas violencia visible. La invisible se refiere a la violencia estructural que implica inequidad en el ámbito de lo político, lo social y lo económico y a la violencia cultural constituida por los discursos que justifican el trato desigual⁸⁹. Estos tres componentes de la violencia se retroalimentan entre ellos, perpetuando la discriminación, la desigualdad y la violencia. Por tanto, con cada golpe a una mujer se da prevalencia a un patrón social de exclusión y este se reproduce a futuro.

Precisamente, este Tribunal ha señalado que la discriminación y la violencia en contra de ellas están íntimamente ligadas, debido a que *“la primera tiene un componente afectivo muy fuerte que genera sentimientos agresivos, por lo cual la discriminación causa violencia y la violencia a su vez es una forma de discriminación⁹⁰, generando actos que vulneran los derechos humanos y la dignidad humana de muchos grupos de la sociedad⁹¹”⁹²*. Ambas manifestaciones se fundamentan en estereotipos de género que han motivado la idea de la dominación, la rudeza, la intelectualidad y la autoridad de los hombres y de la emotividad, compasión y sumisión de la mujer⁹³.

En esa línea, los hombres recurren a la violencia física en contra de las mujeres para reafirmar su poder patriarcal o para lograr que aquellas se comporten según los roles femeninos acostumbrados, infundiendo miedo y terror para eliminar futuras amenazas a su autoridad. Por ello, la agresión *“es a la vez un medio de la perpetuación de la subordinación de las mujeres y una consecuencia de su subordinación”*⁹⁴. Precisamente, en 1999, una decisión hito del Tribunal Constitucional Surafricano estableció por primera vez, en material judicial, la relación entre la violencia en contra de las mujeres y el poder patriarcal. Estimó que la Constitución de ese país imponía una obligación directa de proteger a las mujeres frente a las agresiones domésticas de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En tal determinación, el juez Albie Sachs sostuvo que *“en la medida que la violencia doméstica es sistémica, generalizada y abrumadoramente específica hacia un género, refleja y refuerza la dominación patriarcal, de una manera brutal”*⁹⁵.

Cómo se puede apreciar, el resaltado en azul corresponde al apartado del texto que La Escuela transcribió como enunciado de la pregunta, el apartado resaltado en verde corresponde a la clave de respuesta correcta y el resaltado en amarillo a la clave de respuesta escogida por el suscrito y marcada como errónea.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación control de lectura, optó por copiar literalmente un apartado de la lectura obligatoria, exigiendo al discente –para acertar la pregunta- el recordar bajo el imperio de la memoria el apartado seleccionado por la Escuela Judicial, esto sin que se realizara un análisis o cuestionamiento racional.

Entonces uno se cuestiona. dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar la pregunta propuesta en el control de lectura, pues su clave correcta resultó un apartado literal del texto que no permite ningún tipo de análisis, sino que exige contestar lo literal sin necesidad de razonar en ello. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado escogido por el evaluador y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta Control de Lectura se determine que la pregunta **P211** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus

apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente solicito se me conceda la pregunta **P211** como acierto y se me conceda su valor equivalente a **1,25 puntos** en atención a que la clave marcada por mi “*que la violencia de género es estructural, ya que surge para preservar una escala de valores a un orden social establecido históricamente*” es una respuesta correcta a la pregunta planteada por el evaluador pues resulta evidente que la tesis central del acápite “5. La violencia de género impone obligaciones a la sociedad” es precisamente que la violencia de género responde a un esquema estructural de la sociedad con el fin de perpetuar la subordinación histórica.

Pregunta 12 (P222)

En lo que refiere a esta pregunta respetuosamente solicito se declare que clave escogida por el suscrito como respuesta correcta, esto en atención a que la clave marcada por el evaluador resulta errónea conforme el texto seleccionado.

La pregunta 12 del Módulo de Derechos Humanos y Género tiene como base el control de lectura del texto obligatorio “CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de noviembre de 2020. Párrafos 17 – 31” y cuestiona sobre Una crítica de los representantes de las víctimas sobre la Comisión Interministerial.

La clave de respuesta escogida por la Escuela Judicial como correcta corresponde a que *la Comisión se enfocaba solo en casos recientes*.

La clave de respuesta marcada por el suscrito (y que es la correcta realmente) correspondió a *que la Comisión no incluía a representantes del Ministerio Público ni de las víctimas*.

Para sustentar la objeción basta con leer detenidamente el párrafo 25 de la Sentencia en control de lectura para establecer que la respuesta correcta es la marcada por el suscrito, véase las partes resaltadas.

25. Los **representantes** indicaron sobre ese punto que no se conoce que el Estado -a través de ninguno de sus poderes- haya formulado un plan de investigaciones destinado a ubicar a María Claudia y conocer la verdad de lo ocurrido. Además subrayaron que en la Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, dada a conocer en noviembre de 2011, se informa -respecto del caso de María Claudia- que "se deja expresa constancia que, a pesar de las orientaciones en la investigación y esfuerzos de los integrantes del Equipo, en la voluminosa revisión de documentos y archivos autorizados por la Presidencia de la República, no ha sido posible aún encontrar documentación complementaria y probatoria en el caso del secuestro, traslado ilegal desde Argentina y desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina embarazada María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, y sobre el nacimiento en cautiverio, rapto y cambio de identidad de su hija, Macarena Gelman [...]". En lo que se refiere a la Comisión Interministerial, los representantes observaron que el Estado no presentó documentación que permita conocer la forma en que dicha Comisión se ha organizado, su plan de trabajo, cronograma, ni tampoco las políticas de Estado definidas para garantizar su cometido de esclarecer las desapariciones y ejecuciones ocurridas durante la última dictadura militar. Del mismo modo señalaron que a diferencia de lo indicado por la Corte en su Sentencia, ni representantes del Ministerio Público ni de las víctimas fueron integrados a la Comisión Interministerial sino que fueron incorporados a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Por último indicaron que el Estado no presentó información respecto de la adopción del "Protocolo para la recolección e información de restos de personas desaparecidas", ofrecido por el Estado y ordenado por la Corte en los términos del párrafo 275 de su Sentencia.

Por estas razones solicito que ante el error de la Escuela Judicial se determine que la pregunta **P223** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 13 (P223)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del control de lectura, que adelanto no buscaron demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, sino por el contrario se diseñaron para evaluar desde una concepción memorística, y no como debía ser desde una postura analítico-deductiva de razonamiento.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO**

en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta pregunta de control de lectura, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que acorde a lo establecido en el punto 4.2.3.1.1.1. del Documento Maestro que define los criterios para la evaluación del Subfase General. 1. Control de Lectura, que respecto al criterio evaluable “Control de lectura” define que se realizará bajo la técnica de prueba tipo Test.

Del control de lectura se establece que su ponderación se determinará por el número de respuestas correctas con un tope máximo de 40 puntos sobre 125 de cada programa. Adicionalmente, en torno a las competencias por evaluar se estimó que como competencias generales el criterio evaluativo sería respecto de las habilidades lectoras, de análisis y comprensión del discente, que asumo se refiere a comprensión lectora. En lo que atañe a las competencias específicas a evaluar estas corresponderían a las definidas en el *Syllabus*.

Ahora bien, en el Syllabus de cada módulo se especificaron individualmente los criterios de evaluación, y respecto al Control de Lectura se estableció expresamente que la evaluación con esta herramienta estaba *ponderada con 40 puntos de los 125 asignados a cada uno de los ocho (8) programas, en esta actividad evaluable, los/las discentes deberán responder a*

cuestionarios de pregunta cerrada opción múltiple con única respuesta (Tipo I) y opción múltiple con múltiple respuesta (Tipo IV), donde deberán demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, no solamente desde una concepción memorística, sino desde una postura analítico-deductiva (razonamiento).

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. **Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.**

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco **el grado de apropiación de contenidos del programa y la comprensión lectora** respecto de la herramienta de evaluación control de lectura.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un test evaluativo que buscara el razonamiento y análisis lector optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo memorístico, y en este mal diseñado control de lectura exigió a los discentes recordar el tenor literal del contenido de las lecturas obligatorias, sus apartados exactos, nombres de capítulos o inclusive el contenido literal de pies de página, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el control de lectura propuesto en el ítem **P223** es totalmente memorístico, y no permite el ejercicio de razonamiento del discente al momento de escoger la clave de respuesta, paso a explicar.

La pregunta 13 del módulo de Derechos Humanos y Género tenía enunciado un apartado literal de la lectura “COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-462 de 2018. Referencia: expediente T-6.328.979 (3, diciembre, 2018). M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Leer el documento completo” más exactamente de las páginas 37 y 38 como se describe en las imágenes que siguen.

6. La prevalencia del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes (NNA). Reiteración jurisprudencial

Respecto a la calidad de sujetos de especial protección constitucional reconocida a los niños, las niñas y los adolescentes, esta tiene su sustento en los postulados de la Constitución y también en instrumentos internacionales de derechos

humanos que reconocen el *principio del interés superior del menor* (de dieciocho años) y que integran el denominado bloque de constitucionalidad.

En efecto, la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los niños, las niñas y adolescentes¹¹⁷, deviene del:

- (i) Artículo 44 Superior el cual establece -entre otros aspectos- que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como la plena materialización de sus derechos fundamentales (la vida, la integridad física, la salud la seguridad social y la educación, entre muchos otros);
- (ii) Marco internacional¹¹⁸, en virtud del cual los menores de dieciocho años merecen un mayor amparo por parte del Estado, al ser considerados sujetos de especial protección constitucional;

Ahora bien, la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los niños, niñas y adolescentes tiene su fundamento en la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran, pues su desarrollo físico, mental y emocional está en proceso de alcanzar la madurez requerida para la toma de decisiones y participación autónoma dentro de la sociedad. El grado de vulnerabilidad e indefensión tiene diferentes niveles y se da a partir de todos los procesos de interacción que los niños, niñas y adolescentes deben realizar con su entorno físico y social para la evolución de su personalidad.

Cómo se puede apreciar, el resaltado en azul corresponde al apartado del texto que La Escuela transcribió como enunciado de la pregunta, el apartado resaltado en verde corresponde a la

clave de respuesta correcta y el resaltado en amarillo a la clave de respuesta escogida por el suscrito.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación control de lectura, optó por copiar literalmente un apartado de la lectura obligatoria, exigiendo al discente –para acertar la pregunta- el recordar bajo el imperio de la memoria el apartado seleccionado por la Escuela Judicial, esto sin que se realizara un análisis o cuestionamiento racional.

Entonces uno se cuestiona. dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar la pregunta propuesta en el control de lectura, pues su clave correcta resultó un apartado literal del texto que no permite ningún tipo de análisis, sino que exige contestar lo literal sin necesidad de razonar en ello. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado escogido por el evaluador y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta Control de Lectura se determine que la pregunta **P223** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente solicito se me conceda la pregunta **P223** como acierto y se me conceda su valor equivalente a **1,25 puntos** en atención a que la clave marcada por mi “*en virtud del marco internacional los menores de dieciocho años merecen un mayor amparo por parte del Estado*” es una respuesta correcta a la pregunta planteada por el evaluador en la que cuestiona en que se fundamenta la protección constitucional de los NNA, y este se ve reflejado por la Corte al señalar que “En efecto, la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los niños, las niñas y adolescentes, deviene del marco internación en virtud del cual los menores de dieciocho años merecen un mayor amparo por parte del Estado, al ser considerados sujetos de especial protección constitucional.

Pregunta 18 (P228)

De la lectura del texto o apartado de la Sentencia T481 de 1998 se nos pidió a los discentes la opción que sintetizara el contenido del párrafo 24 seleccionado por La Escuela.

Ahora, la clave correcta escogida por El Formador refirió *que la preferencia sexual no debe ser motivo de discriminación* mientras que la clave escogida por mí correspondió a que la *orientación sexual se inscribe dentro ámbito de la autonomía individual*, entonces si verificamos la totalidad del texto podemos observar con claridad el contexto del párrafo 22 de la Sentencia en evaluación y notamos con claridad que posterior al apartado escogido por el evaluador, la Corte resalta, que es evidente que la homosexualidad entra en este ámbito de protección *-haciendo referencia al ámbito de la autonomía individual-* (recuérdese que se nos pidió leer de la sentencia el debate contemporáneo jurídico y científico sobre la homosexualidad según el syllabus del programa), y a reglón seguido que la homosexualidad no puede significar un factor de discriminación social, por ello la no discriminación de la homosexualidad hace parte de la protección del ámbito de la autonomía individual como un acto de preservación del orden público, inferencia más que razonable para apoyar la validez que la clave escogida por mí. Véase con detenimiento la siguiente imagen captada de la sentencia C- 481 de 1991.

22- Uno de los elementos esenciales de cualquier plan de vida y de nuestra identificación como personas singulares es nuestra identidad sexual, tal y como la Corte lo tiene bien establecido^[31]. Ahora bien, algunos teóricos distinguen entre la identidad sexual y la orientación o preferencia sexual^[32]. Así, la primera se refiere al hecho de que una persona se siente participe de un determinado género con el cual se identifica, mientras que la segunda hace relación a las preferencias eróticas del individuo. Sin embargo, en general las doctrinas coinciden en que, a pesar de esa distinción, la orientación o preferencia sexual es un elemento esencial de la manera como una persona adquiere una identidad sexual. Así las cosas, es lógico concluir que la preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual -entre ellas la homosexual- hacen parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16). En este sentido, la Corte ha afirmado que la específica orientación sexual de un individuo constituye un asunto que se inscribe dentro del **ámbito de autonomía individual** que le permite adoptar, sin coacciones ajenas, los proyectos de vida que considere pertinentes, siempre y cuando, con ellos, no vulnere el orden jurídico y los derechos de los demás.^[33] Así, la doctrina constitucional ha señalado que la Carta eleva a derecho fundamental “la libertad en materia de **opciones vitales y creencias individuales**”, lo cual implica “la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social. **Es evidente que la homosexualidad entra en este ámbito de protección y, en tal sentido, ella no puede significar un factor de discriminación social**”^[34]. Por ello, señala esa misma sentencia, el “homosexualismo, en sí mismo, representa una manera de ser o una opción individual e íntima no sancionable.”^[35] Posteriormente esta misma Corte señaló al respecto:

Por tanto, ante la subjetividad en la clave de respuesta que genera una ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P228** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi errad

Pregunta 21 (P231)

En relación con esta pregunta se tiene que, aunque la pregunta está relacionada con la lectura CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Heliodoro Portugal Vs Panamá. Excepciones preliminares, Fondo reparaciones y Costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008. Serie C No 186. **Párrafos 82-118 y 176-216.** El contenido del enunciado **no hace parte de las lecturas obligatorias** del *Syllabus* del programa de Derechos Humanos y Género por encontrarse por fuera de los párrafos obligatorios y se relaciona con el voto razonado del Juez García Ramírez, el cual se encuentra después de la parte resolutive de la Sentencia en cuestión.

Inclusive se advierte que el Juez García Ramírez se aparta de lo motivado en la sentencia de Heliodoro Portugal, puesto que en lo leído como obligatorio se estableció respecto de la desaparición forzada que la misma se relaciona directamente con la libertad personal y la vida, para ello ver párrafos 117 y 108 que sí son lectura obligatoria.

De modo que acorde a lo descrito solicito se determine que la pregunta **P231** no hace parte de la bibliografía obligatoria de consulta establecida en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial al no ser insumo para la evaluación de la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

Pregunta 25 (P235)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del control de lectura, que adelanto no buscaron demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, sino por el contrario se diseñaron para evaluar desde una concepción memorística, y no como debía ser desde una postura analítico-deductiva de razonamiento.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta pregunta de control de lectura, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que acorde a lo establecido en el punto 4.2.3.1.1.1. del Documento Maestro que define los criterios para la evaluación del Subfase General. 1. Control de Lectura, que respecto al criterio evaluable “Control de lectura” define que se realizará bajo la técnica de prueba tipo Test.

Del control de lectura se establece que su ponderación se determinará por el número de respuestas correctas con un tope máximo de 40 puntos sobre 125 de cada programa. Adicionalmente, en torno a las competencias por evaluar se estimó que como competencias generales el criterio evaluativo sería respecto de las habilidades lectoras, de análisis y comprensión del discente, que asumo se refiere a comprensión lectora. En lo que atañe a las competencias específicas a evaluar estas corresponderían a las definidas en el *Syllabus*.

Ahora bien, en el Syllabus de cada módulo se especificaron individualmente los criterios de evaluación, y respecto al Control de Lectura se estableció expresamente que la evaluación con esta herramienta estaba *ponderada con 40 puntos de los 125 asignados a cada uno de los ocho (8) programas, en esta actividad evaluable, los/las discentes deberán responder a cuestionarios de pregunta cerrada opción múltiple con única respuesta (Tipo I) y opción múltiple con múltiple respuesta (Tipo IV), **donde deberán demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, no solamente desde una concepción memorística, sino desde una postura analítico-deductiva (razonamiento).***

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco *el grado de apropiación de contenidos del programa y la comprensión lectora* respecto de la herramienta de evaluación control de lectura.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un test evaluativo que buscara el razonamiento y análisis lector optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo memorístico, y en este mal diseñado control de lectura exigió a los discentes recordar el tenor literal del contenido de las lecturas obligatorias, sus apartados exactos, nombres de capítulos o inclusive el contenido literal de pies de página, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el control de lectura propuesto en el ítem **P235** es totalmente memorístico, y no permite el ejercicio de razonamiento del discente al momento de escoger la clave de respuesta, paso a explicar.

La pregunta 25 del módulo de Derechos Humanos y Género tenía enunciado un apartado literal de la lectura “GONZÁLEZ, Andrés y SANABRIA, Jesús. (2013). Obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana. Revista Saber, Ciencia y Libertad. Universidad Libre de Colombia. pp. 45-56.” más exactamente de la página 52 como se describe en la imagen que sigue.

En el caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana al realizar el análisis de la sentencia de inconstitucionalidad que prohibía la fecundación in vitro, determinó que debía hacerse bajo el análisis de la obligación de no discriminación, más no, del derecho humano a igual protección ante la ley. Debido a que la violación a los dere-

chos de protección a la vida privada y familiar, y el derecho a fundar una familia, reconocidos en la Convención, no se generaba a partir de la aplicación o interpretación de una ley, sino de los efectos de la sentencia que no permitía ni permitía a las víctimas por su condición de incapacidad, o por estereotipos de género, e incluso por su situación económica, acceder a este método de reproducción asistida (2012h).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al valorar las dos posturas consideró que Colombia había violado, entre otros, los dere-

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTE DE LA CONVENCIÓN AMERICANA

de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades mentales sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad (Corte IDH, 2006d, párr. 105)

Por otra parte, es necesario aclarar que la obligación convencional de no discriminación si bien se relaciona con el derecho humano de

chos de protección a la vida privada y familiar, y el derecho a fundar una familia, reconocidos en la Convención, no se generaba a partir de la aplicación o interpretación de una ley, sino de los efectos de la sentencia que no permitía ni permitía a las víctimas por su condición de incapacidad, o por estereotipos de género, e incluso por su situación económica, acceder a este método de reproducción asistida (2012h).

Cómo se puede apreciar, el resaltado en azul corresponde al apartado del texto que La Escuela transcribió como enunciado de la pregunta, y cuya respuesta correcta obedecía a la obligación de no discriminación que casualmente es el título al que pertenece el párrafo seleccionado dentro de la lectura (ver página 51).

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación control de lectura, optó por copiar literalmente un apartado de la lectura obligatoria, exigiendo al discente –para acertar la pregunta- el recordar bajo el imperio de la memoria a que capítulo pertenecía el apartado seleccionado por la Escuela Judicial, esto sin que se realizara un análisis o cuestionamiento racional.

Entonces uno se cuestiona. dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar la pregunta propuesta en el control de lectura, pues su clave correcta resultó un apartado literal del texto que no permite ningún tipo de análisis, sino que exige contestar lo literal sin necesidad de razonar en ello. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado escogido por el evaluador y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Del mismo modo, la pregunta propuesta por la Escuela no satisfizo la competencia específica del *Syllabus* del módulo en cuestión; “Aplicar los conocimientos y procedimientos

jurisdiccionales nacionales e internacionales, para la resolución de problemas relacionados con la garantía de los derechos humanos, el DIH y el control de convencionalidad, enfocados hacia la práctica judicial.”, puesto que no se destaca por ningún apartado su relación o importancia con la práctica judicial, ya que de nada sirve saber de memoria a que obligación de los Estados Parte para con la convención refiere el Ítem si dentro de la pregunta evaluadora no se exige un análisis acerca de su relación en la práctica judicial.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta Control de Lectura se determine que la pregunta **P235** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 29 (P239)

En relación con esta pregunta se tiene que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas afirma que *“los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”*, hace parte de la lectura ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". El Salvador: OEA; 1988. Décimo Octavo Periodo Ordinario de Sesiones. **Texto que no hace parte de las lecturas obligatorias** del *Syllabus* del programa de Derechos Humanos y Género, sino que hace parte de lecturas complementarias que no podían ser objeto de evaluación según el mismo *Syllabus*, ver imagen siguiente

**BIBLIOGRAFÍA
COMPLEMENTARIA PARA
FORTALECER EL PROCESO
FORMATIVO**

**Las lecturas complementarias
contienen información relevante
para el estudio de la unidad,
pero no son insumo para la
etapa de evaluación.**

De modo que acorde a lo descrito solicito se determine que la pregunta **P239** no hace parte de la bibliografía obligatoria de consulta establecida en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial al no ser insumo para la evaluación de la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL O DE CASOS

Pregunta 36 (P246)

En relación con esta pregunta lo primero que se debate es que no cumple con el criterio de la actividad objeto de evaluación denominada análisis jurisprudencial o de casos pues no busca que el discente ponga en práctica las propuestas metodológicas aprendidas en un determinado problema que será planteado por la Escuela Judicial. Esta actividad debe inexorablemente consistir en la resolución de problemas a partir del análisis jurisprudencial o planteamiento de caso que, según el tipo de programa, podrán ser jurídicos o no jurídicos, es decir busca que luego de analizar un caso o problema determinado el discente llegue a una conclusión atendiendo las habilidades y competencias adquiridas.

Lo cierto es que el cuestionamiento aparentemente se muestra como un caso de análisis, empero contrario a lo esperado no exige análisis alguno, sino que pretende que el discente escoja entre varias opciones para que determine cuál es la más aproximada al criterio del evaluador. Recuérdese que el modelo de pregunta de selección múltiple con única respuesta se caracteriza por permitir que los/las discentes lean, **analicen** y **saquen conclusiones** para luego seleccionar entre varias opciones de respuesta, cosa que no sucede en el caso objetado,

pues a pesar del contenido del texto de la pregunta no es posible que el discente llegue a una conclusión efectiva que le otorgue la respuesta correcta, sino por el contrario lo que se pide es que memorísticamente se escoja la respuesta más aproximada al criterio del evaluador.

En síntesis, la pregunta pretende evaluar a modo de control de lectura el texto obligatorio "COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-481 de 1998. Referencia: expediente D-1978 (9, septiembre, 1998). M.P. Alejandro Martínez Caballero. Leer el apartado correspondiente a: El asunto material bajo revisión y El debate contemporáneo jurídico y científico sobre la homosexualidad. Páginas 30- 37", pues la construcción de la pregunta refiere esencialmente no a un análisis a fin de llegar a una conclusión, sino por el contrario a recordar el contenido de la lectura. Tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Vis today 2 285
Visits 158 456 700
Pag today 3 748

Inicio La Corte Atención al ciudadano **Relatoría** Secretaría English

DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL/DISCRIMINACION POR SEXO

La preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual -entre ellas la homosexual- hacen parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, la Corte ha afirmado que la específica orientación sexual de un individuo constituye un asunto que se inscribe dentro del ámbito de autonomía individual que le permite adoptar, sin coacciones ajenas, los proyectos de vida que considere pertinentes, siempre y cuando, con ellos, no vulnere el orden jurídico y los derechos de los demás. Así, la doctrina constitucional ha señalado que la Carta eleva a derecho fundamental "la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales", lo cual implica "la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social. Es evidente que la homosexualidad entra en este ámbito de protección y, en tal sentido, ella no puede significar un factor de discriminación social". Toda diferencia de trato de una persona debido a sus orientaciones sexuales equivale en el fondo a una posible discriminación por razón del sexo, y se encuentra sometida a un idéntico control judicial, esto es a un escrutinio estricto.

Entonces, se tiene que el evaluador tomó este aparatado literal del texto y cuestionó a los discentes de la siguiente manera: **una inferencia razonable que resulta del texto anterior a perseverar (quiso decir preservar) el orden público** para lo cual otorgó cuatro opciones con una única respuesta correcta.

Aquí ya se puede notar la ambigüedad de la pregunta, pues no se colige con claridad si el evaluador pretende que se elija una respuesta según lo planteado en el texto, o si pretende que el discente analice cuál de las opciones es *clave* o cuente con un mayor estatus de *clave* frente a las otras. Ahora no conforme con la ambigüedad de las preguntas, a la censura debe adicionársele además del error ortográfico descrito en la pregunta, pues no se sabe si lo que se quiere es preservar⁸⁷ en su sentido de proteger el orden público o perseverarlo⁸⁸ en su sentido de mantener el orden público, finalidades distintas.

⁸⁷ <https://dle.rae.es/preservar>

⁸⁸ <https://dle.rae.es/perseverar>

Ahora súmese la ambigüedad de las claves de respuestas, que para el sustento debido⁸⁹ son las siguientes:

respeto de la autonomía y la dignidad.

ámbito de la autonomía individual.

derecho de la identidad personal.

núcleo del libre desarrollo de la personalidad.

Por tanto, el primer argumento de cesura corresponde a que la pregunta **P246** es un control de lectura y no un caso de análisis, prueba reinante de ello es que cualquier persona sin discriminar no la podría diferenciar de las preguntas 62, 63 y 64 de este mismo módulo, las cuales cuentan con la misma estructura.

De modo que acorde a lo descrito solicito se determine que la pregunta **P246** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta **P246**, en atención a que la clave de respuesta escogida por mí tiene mayor grado de acierto que la propuesta por el formador como válida, como paso a explicar.

De la lectura del texto se nos pidió a los discentes realizáramos una inferencia razonable de la literalidad del texto presentado respecto de las claves de respuestas ofrecidas y escogiéramos cual de todas preservara o perseverara el orden público, es decir deja abierta la posibilidad de razonabilidad en el criterio del evaluado, pues inferir razonablemente es aducir con un grado de acierto, razón por la cual, de entrada todas las claves son posibles bajo el estándar de justificación de razonabilidad.

⁸⁹ Me acojo al criterio expuesto en la Sentencia SU-267 de 2022 que sostiene que *“la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes»*

Ahora, la clave correcta escogida por la Escuela refirió *el derecho a la identidad personal* mientras que la clave escogida por mí correspondió al *ámbito de la autonomía individual*, entonces si verificamos la continuidad del texto podemos observar con claridad el contexto de la totalidad del párrafo 22 de la Sentencia en evaluación, y notamos con claridad que posterior al apartado escogido por el evaluador, la Corte resalta, que es evidente que la homosexualidad entra en este ámbito de protección *-haciendo referencia al ámbito de la autonomía individual*- (recuérdese que se nos pidió leer de la sentencia el debate contemporáneo jurídico y científico sobre la homosexualidad según el syllabus del programa), y a reglón seguido que la homosexualidad no puede significar un factor de discriminación social, por ello la no discriminación de la homosexualidad hace parte de la protección del ámbito de la autonomía individual como un acto de preservación del orden público, inferencia más que razonable para apoyar la validez que la clave escogida por mí. Véase con detenimiento la siguiente imagen captada de la sentencia C- 481 de 1991.

22- Uno de los elementos esenciales de cualquier plan de vida y de nuestra identificación como personas singulares es nuestra identidad sexual, tal y como la Corte lo tiene bien establecido^[31]. Ahora bien, algunos teóricos distinguen entre la identidad sexual y la orientación o preferencia sexual^[32]. Así, la primera se refiere al hecho de que una persona se siente participe de un determinado género con el cual se identifica, mientras que la segunda hace relación a las preferencias eróticas del individuo. Sin embargo, en general las doctrinas coinciden en que, a pesar de esa distinción, la orientación o preferencia sexual es un elemento esencial de la manera como una persona adquiere una identidad sexual. Así las cosas, es lógico concluir que la preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual -entre ellas la homosexual- hacen parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16). En este sentido, la Corte ha afirmado que la específica orientación sexual de un individuo constituye un asunto que se inscribe dentro del **ámbito** de autonomía individual que le permite adoptar, sin coacciones ajenas, los proyectos de vida que considere pertinentes, siempre y cuando, con ellos, no vulnere el orden jurídico y los derechos de los demás.^[33] Así, la doctrina constitucional ha señalado que la Carta eleva a derecho fundamental “la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales”, lo cual implica “la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social. **Es evidente que la homosexualidad entra en este ámbito de protección y, en tal sentido, ella no puede significar un factor de discriminación social**”^[34]. Por ello, señala esa misma sentencia, el “homosexualismo, en sí mismo, representa una manera de ser o una opción individual e íntima no sancionable.”^[35] Posteriormente esta misma Corte señaló al respecto:

Por tanto, ante la subjetividad en la clave de respuesta que genera una ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P246** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

TALLER

Pregunta 37 (P247)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P247** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 37 del programa de Derechos Humanos y Género tenía como clave correcta un apartado literal de la lectura obligatoria “JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. En: Género y teoría del Derecho, Robin West, Bogotá: Universidad de los Andes, Siglo del Hombre Editores, Instituto Pensar, 2000. Páginas 103 -128” más exactamente la página 106 como se describe en la imagen que sigue.

turales derivados del hecho de que se haya introducido un control a la función de reproducción ya son algo evidentes (aunque no tienen aún la dimensión que algunas feministas pensaron que podría tener)⁵.

Ahora bien, la adopción de esta distinción, que como todas no es dada sino construida, fue producto de consideraciones tanto teóricas como políticas. Teóricamente, su introducción respondió a la constatación de que el tratamiento que un individuo recibe socialmente depende de la percepción que socialmente se tiene de él y esta percepción responde a lo que se espera de él según su sexo. En este sentido, se hizo notar que en últimas lo importante socialmente no es el sexo, sino el género. Distinguir entre sexo y género también se mostró como importante frente a las teorías socio-biológicas que pretendían reducir el asunto de los comportamientos sociales de hombres y mujeres a variables biológicas, como si la biología fuera una condena⁶.

Políticamente, patrocinar la diferencia entre sexo y género resultaba importante no sólo para socavar la tendencia conservadora de los socio-biológicos, sino también para convertir la lucha entre los sexos (entre hombres

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*políticas, percepción y socio-biológicas*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del párrafo incluyó las palabras “*sociales, técnicas y consideración*” como distractores. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el resumen y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio, véase que la misma pregunta taller determina que el apartado fue “*Tomado de la lectura*”.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P247** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad y no en 6,67 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 2/3 del ítem en cuestión.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta **P247** puesto que erré al intercambiar la palabra políticas con sociales y si se observa con atención basta leer detenidamente la oración transcrita literalmente por el formador para entender que la oración “*la adopción de la distinción entre sexo y género, que como todas no es dada sino construida, fue producto de consideraciones tanto teóricas como políticas*” y la oración “*la adopción de la distinción entre sexo y género, que como todas no es dada sino construida, fue producto de consideraciones tanto teóricas como sociales*” cuentan con el mismo sentido y coherencia, puesto que si analizamos el párrafo que continua en la lectura, podemos observar que la autora refiere la explicación de la consideración política que generó la distinción entre sexo y género al separar las teorías biologicistas e introducir la comprensión del género como una estructura social, de modo que la distinción política de la que habla el texto no es más que el entendimiento del género desde lo social como una construcción estructural, es decir, además de la consideración teórica que distinguió el sexo del género, esa distinción también fue producto de consideraciones sociales. Véase la siguiente imagen del texto.

Políticamente, patrocinar la diferencia entre sexo y género resultaba importante no sólo para socavar la tendencia conservadora de los socio-biólogos, sino también para convertir la lucha entre los sexos (entre hombres y mujeres) en una lucha contra el género (de hombres y mujeres). En efecto, al introducir el género como estructura social, los hombres de carne y hueso dejaron de ser los principales blancos de ataque, así como también las mujeres de carne y hueso dejaron de ser siempre las víctimas. Las tensiones entre hombres y mujeres tendrían entonces que disiparse y los argumentos feministas ganarían nuevamente un espacio perdido⁷.

Por estas razones solicito que ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P247** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida en su totalidad, y los **3,33 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 38 (P248)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque

centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimientan la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P248** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 38 del programa de Derechos Humanos y Género tenía como clave correcta un apartado literal de la lectura obligatoria “JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. En: Género y teoría del Derecho, Robin West, Bogotá: Universidad de los Andes, Siglo del Hombre Editores, Instituto Pensar, 2000. Páginas 103 -128” más exactamente la página 123 como se describe en la imagen que sigue.

Fragmento del texto de la lectura obligatoria que contiene cada autor.

Los esfuerzos de las feministas liberales clásicas se dirigieron principalmente contra las normas jurídicas que excluían a las mujeres como destinatarias de ciertos derechos. Sus críticas se encaminaron, pues, contra las reglas que preveían el derecho al voto sólo para los varones, contra las que establecían la potestad marital y contra las restricciones en la educación superior que impedían a las mujeres entrar a las universidades de los hombres, y contra las normas laborales que impedían a las mujeres acceder a ciertos empleos u horarios. En general, sus críticas fueron exitosas. Las normas jurídicas fueron transformadas para proveer formalmente iguales derechos a hombres y mujeres⁵³.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*normas, acceder y transformadas*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del párrafo incluyó las palabras “*llegar, argumentaciones y relevadas*” como distractores. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el resumen y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto

obligatorio, véase que la misma pregunta taller determina que el apartado fue “*Tomado de la lectura*”.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P248** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad y no en 6,67 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 2/3 del ítem en cuestión.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta **P248** puesto que erré al intercambiar la palabra políticas con sociales y si se observa con atención basta leer detenidamente la oración trascrita literalmente por el formador para entender que la oración “*Las normas jurídicas fueron transformadas para proveer formalmente iguales derechos a hombres y mujeres*” y la oración “*Las normas jurídicas fueron relevadas para proveer formalmente iguales derechos a hombres y mujeres*” cuentan con el mismo sentido y coherencia, puesto que las palabras transformar⁹⁰ y relevar⁹¹ tienen la misma intención gramatical en el texto, es decir ambas hacen significar que las normas jurídicas fueron cambiadas o sustituidas para proveer iguales derechos a hombres y mujeres. Nótese que, según la Real Academia de la Lengua Española, registra en los significados de las palabras transformar y relevar sinónimos comunes como lo son cambiar o sustituir. De modo, que al marcar relevar en el apartado en blanco no le quita coherencia alguna al texto, por lo que la clave marcada por el suscrito también resulta válida.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

⁹⁰ <https://dle.rae.es/transformar>

⁹¹ <https://dle.rae.es/relevar>

Por estas razones solicito que ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P248** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida en su totalidad, y los **3,33 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 39 (P249)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes,

disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P249** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 39 del programa de Derechos Humanos y Género tenía como clave correcta un apartado literal de la lectura obligatoria “JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. En: Género y teoría del Derecho, Robin West, Bogotá: Universidad de los Andes, Siglo del Hombre Editores, Instituto Pensar, 2000. Páginas 103 -128” más exactamente la página 118 como se describe en la imagen que sigue.

La principal crítica que se esgrime contra el feminismo cultural, que ya ha logrado permear la teoría política, jurídica, científica y la práctica política, es la de que al reivindicar lo privado como lo femenino, y esto como algo valioso, se olvida de que lo femenino ha sido construido socialmente y que las sociedades en las que nos encontramos son sociedades patriarcales. Lo construido hasta ahora como femenino, entonces, sería el producto de la opresión y por eso no podría ser asumido acríticamente³⁸.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*permear, privado y producto*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del párrafo incluyó las palabras “*público, controlar y análisis*” como distractores. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el resumen y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio, véase que la misma pregunta taller determina que el apartado fue “*Tomado de la lectura*”.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P249** no cumple con los estándares de

validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad y no en 6,67 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 2/3 del ítem en cuestión.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

PROGRAMA 7. GESTIÓN JUDICIAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CONTROL DE LECTURA

Pregunta 4 (P256)

Esta pregunta cumple con el Sistema de Evaluación Académica por ser un control de lectura que requiere el análisis del discente para llegar a una respuesta plausible. Empero las claves de respuesta son ambiguas, como paso a explicar.

El enunciado de la pregunta refiere textualmente apartados del artículo 2º de la Ley 2213 de 2022, en el siguiente tenor:

La población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales, podrán acudir directamente a los despachos judiciales y gozarán de atención presencial en el horario ordinario de atención al público; adicionalmente, las autoridades judiciales adoptarán las medidas necesarias para asegurar a dichas personas el acceso y la atención oportuna por parte del sistema judicial.

PARÁGRAFO 1o. *Se adoptarán todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos.*

PARÁGRAFO 2o. *Los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales.*

Luego el formador evalúa que **“De acuerdo con el texto citado, se puede concluir”** es decir, nos plantea cuatro premisas para que los discentes escojamos dos de ellas como conclusiones acertadas del texto, para ello nos brinda las siguientes opciones⁹²:

1. las tecnologías de información y comunicaciones están diseñadas para mejorar la accesibilidad a la justicia de grupos vulnerables, incluyendo poblaciones rurales, grupos étnicos y personas con discapacidad.

2. la comunicación virtual facilitada por las autoridades judiciales pretende complementar las interacciones presenciales para que los usuarios puedan ejercer sus derechos y acceder a la información de manera efectiva.

3. los ajustes en la tecnología de información y comunicaciones están pensados para apoyar una gama amplia de usuarios que accedan al sistema judicial.

4. las entidades públicas deben proporcionar accesibilidad a las actuaciones virtuales, asegurando la participación de todos los sujetos procesales.

La clave correcta para la Escuela Judicial correspondió a las oraciones 1 y 3. La clave de respuesta marcada por el suscrito se refirió a los postulados 1 y 4.

Sobre esta pregunta encontramos tanto la clave de respuesta marcada por La Escuela Judicial, como la clave de respuesta escogida por el suscrito son plausibles. Me explico.

Leído y analizado con detenimiento el contenido literal del artículo podemos encontrar que las conclusiones 1, 2 y 3 se producen del querer del legislador, como quiera que se coincidió con la opción 1 únicamente se sustentará la razón por la cual la oración 4 se concluye del texto.

Dígase que el parágrafo 2° de la norma en cita establece textualmente que *los municipios, personerías y otras entidades públicas, en la medida de sus posibilidades, facilitarán que los sujetos procesales puedan acceder en sus sedes a las actuaciones virtuales* esto con el propósito de asegurar la participación de todos los sujetos procesales, o lo que es igual a que las *entidades públicas deben proporcionar accesibilidad a las actuaciones virtuales, asegurando*

⁹² Me acojo al criterio expuesto en la Sentencia SU-267 de 2022 que sostiene que “la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes

la participación de todos los sujetos procesales, razón literal para que del texto analizado se pueda concluir la opción número 4.

Esta incongruencia en la pregunta y las claves de respuestas escogida por mí y por La Escuela genera un grado de ambigüedad suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P256**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P256** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente y como quiera en la respuesta masiva del 16 de julio de 2024 comunicada por la Unión Temporal Formación Judicial 2019, se imputaron aciertos parciales a las preguntas del criterio de evaluación Taller, respetuosamente solicito que en aplicación del principio de igualdad se me imputen los aciertos parciales en las preguntas de control de lectura que así lo permitan.

10. la calificación de los componentes de la prueba. Sírvanse informar, sí o no, si, en el marco de las actividades cuyos ítems incluían más de un espacio de respuesta, se imputaron aciertos parciales.

Sí se imputaron aciertos parciales.

En este caso la clave de respuesta correcta para la Escuela Judicial correspondió a las conclusiones 1 y 3, y las marcadas por mí a las conclusiones 1 y 4, en tal sentido acerté parcialmente al marcar la conclusión número dos, en tal sentido solicito se me conceda como válida parcialmente, y su valor equivalente a **0,625 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Pregunta 5 (P257)

Como quiera en la respuesta masiva del 16 de julio de 2024 comunicada por la Unión Temporal Formación Judicial 2019, se imputaron aciertos parciales a las preguntas del criterio de evaluación Taller, respetuosamente solicito que en aplicación del principio de igualdad se me imputen los aciertos parciales en las preguntas de control de lectura que así lo permitan.

10. la calificación de los componentes de la prueba. Sírvanse informar, sí o no, si, en el marco de las actividades cuyos ítems incluían más de un espacio de respuesta, se imputaron aciertos parciales.

Sí se imputaron aciertos parciales.

En este caso la clave de respuesta correcta para la Escuela Judicial correspondió a las conclusiones 2 y 4, y las marcadas por mí a las conclusiones 3 y 2, en tal sentido acerté parcialmente al marcar la conclusión número dos, en tal sentido solicito se me conceda como válida parcialmente, y su valor equivalente a **0,625 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Pregunta 7 (P259)

Esta pregunta cumple con el Sistema de Evaluación Académica por ser un control de lectura que requiere el análisis del discente para llegar a una respuesta plausible. Empero las claves de respuesta son ambiguas, como paso a explicar.

El enunciado refiere a un apartado del texto “GUTIÉRREZ, A. Y FLÓREZ, I. (2020). Inteligencia Artificial (IA) Aplicada en el Sistema Judicial en Colombia. Revista Derecho y Realidad, Vol. 18 – Número 35. Páginas 53-77.” Más exactamente en la página 58, como se aprecia en la siguiente imagen.

A partir de la técnica de Machine Learning (Aprendizaje Automatizado) supervisado, el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ☐ logró ☐ entrenar, ☐ para ☐ Colombia, al sistema para que este seleccione las acciones de tutela sobre salud que pueden resultar más urgentes y que requieren de un tratamiento prioritario por parte de la Corte, desde el mismo momento en que son recibidas por este alto Tribunal. Es así como el sistema hace una lectura, de manera automática, de sentencias de anteriores instancias, y hace una selección de los casos más prioritarios en unos pocos minutos.

El cerebro de cada uno controla la capacidad de procesar la información que proviene del entorno e incluso del propio cuerpo, el cual es utilizado para evaluar y hacer la elección de futuros cursos de acción. Es aquí donde entra a participar el proceso de toma de decisiones y la evaluación, que a su vez consiste en seleccionar, recortar y organizar toda la información disponible.

A partir de la Inteligencia Humana se han venido desarrollando diferentes innovaciones tecnológicas. En el caso puntual de la que se viene analizando, esta se ocupa del procesamiento de la información para resolver problemas y tomar decisiones

Luego el formador evalúa que ***“Del sistema Machine Learning se puede afirmar”*** Nótese que no se cuestiona con relación al texto o al apartado textual, sino que se pregunta respecto al concepto en general del sistema Machine Learning.

La clave correcta para la Escuela Judicial correspondió a, *es creado por el Laboratorio de la UBA para identificar ágilmente las acciones de tutela urgentes sobre salud.*

La clave de respuesta marcada por el suscrito se refirió a *ayuda en la selección de casos urgentes, complementando el proceso de toma de decisiones de la Corte.*

Sobre esta pregunta encontramos tanto la clave de respuesta marcada por La Escuela Judicial, como la clave de respuesta escogida por el suscrito son plausibles. Me explico.

Adviértase que la pregunta refiere sobre el Sistema de Machine Learning en general y no sobre el apartado textual en concreto, por lo que si leemos con atención el párrafo segundo de la línea derecha de la página 59 de la misma lectura podemos observar que esta inteligencia artificial o Machine Learning “*Esta inteligencia busca ayudar a mejorar la productividad en la gran cantidad de solicitudes de tutela que llega a la Corte para revisión, leyendo automáticamente sentencias y documentos y seleccionando los casos prioritarios para su estudio en pocos minutos. Esto se hace a través de una plataforma que introduce elementos de transparencia, para que los ciudadanos vigilen la gestión de la Corte y para que estos sepan cual es el estado actual de sus solicitudes*” de modo que si vemos en contexto la aplicabilidad de la IA denominada Machine Learning desarrollada en Buenos Aires podemos observar que es totalmente plausible que ayude en la selección de casos prioritarios o urgentes, complementando las decisiones de la Corte en sede de revisión constitucional

Esta incongruencia en la pregunta y las claves de respuestas escogida por mí y por La Escuela genera un grado de ambigüedad suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P259**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P259** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 14 (P266)

Esta pregunta cumple con el Sistema de Evaluación Académica por ser un control de lectura que requiere el análisis del discente para llegar a una respuesta plausible. Empero las claves de respuesta son ambiguas, como paso a explicar.

El enunciado refiere a un apartado del artículo 9° de la Ley 527 de 1999 en el que se registró un juez al absolver una duda de un abogado destacó que la información contenida en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación.⁹³

Luego el formador evalúa que *“de acuerdo con el contexto descrito, la integralidad a la que hace referencia el juez implica”*:

La clave correcta para la Escuela Judicial correspondió a la demostración de que se surtió un adecuado procedimiento para preservar el requisito jurídico de la originalidad el mensaje.

La clave de respuesta marcada por el suscrito se refirió a la accesibilidad a la fuente original del dato para facilitar el seguimiento al mensaje desde que se comunica, archiva o presenta.

Sobre esta pregunta encontramos tanto la clave de respuesta marcada por La Escuela Judicial, es errónea a diferencia de la escogida por el suscrito. Me explico.

La pregunta sostiene un texto y pide que el discente acorde al texto determine la implicación de la integralidad que hace el juez del ejemplo, en tanto, tenemos que el evaluador confunde los criterios de originalidad (art. 8 de la Ley 527 de 1997) que refiere sobre la conservación en su forma original o primaria respecto del mensaje de datos, con el criterio de integralidad (art. 9 de la Ley 527 de 1997) que refiere a que la integridad de la información consignada en un mensaje de datos se establece al acreditarse la falta de alteración o cambio en su contenido, lo que demuestra el grado de confiabilidad del mensaje de datos.

Por tanto, el 9 de la Ley 527 de 1997 del cual se eligió el contexto de la pregunta no puede estar relacionado con el concepto de originalidad tal como lo expone el evaluador, sino con el elemento de la integridad que básicamente se demuestra con la posibilidad de acceder a la fuente original del mensaje de datos desde su iniciación esto para verificar la existencia de alteraciones. Esta explicación fue ampliamente difundida en los Slides del programa de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como se aprecia exactamente en la diapositiva 40/59 de la Unidad dos del programa refiriéndose al punto 2.1.1. Los Mensajes de Datos, numeral 4 que registra lo siguiente: *“La constancia de autenticidad debe reflejar **integridad del mensaje de datos** pues la información consignada deberá permanecer completa e inalterada como una de las primeras condiciones de seguridad y adoptará criterios de confidencialidad y de seguridad de la información. Posterior al envío*

⁹³ Me acojo al criterio expuesto en la Sentencia SU-267 de 2022 que sostiene que “la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes”

de dicho mensaje debe existir alguna garantía confiable en la que se demuestre que el mensaje ha conservado la integridad de la información, ya sea desde el momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y/o al momento en que la información sea presentada, si esta es requerida para tal efecto".

Esta incongruencia en la pregunta y las claves de respuestas escogida por mí y por La Escuela genera un grado de ambigüedad suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P266**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P266** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 19 (P271)

Esta pregunta cumple con el Sistema de Evaluación Académica por ser un control de lectura que requiere el análisis del discente para llegar a una respuesta plausible. Empero las claves de respuesta son ambiguas, como paso a explicar.

El enunciado refiere a un apartado del texto "BATELLI, Ettore. La decisión robótica: algoritmos, interpretación y justicia predictiva. En: Revista de Derecho Privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia [en línea]. 40, enero-junio 2021, pp. 45-86" que fuera ligeramente modificado por el evaluador para quedar en el siguiente texto.

"Batelli, (2021), escribió un artículo sobre la justicia predictiva y allí hace referencia a una resolución que profirió el Parlamento Europeo en 2017 sobre normas de derecho civil en materia de robótica. Esta resolución contiene recomendaciones específicas que hace el Parlamento sobre la regulación del fenómeno de la justicia predictiva y la decisión robótica en fallos judiciales, siendo insistente en que dicha regulación deberá atenerse a la protección de la seguridad y la salud humana, al respeto por la integridad, la dignidad humana y la vida privada, así como a la autodeterminación y el principio de no discriminación, además de la protección de datos personales"⁹⁴

⁹⁴ Me acojo al criterio expuesto en la Sentencia SU-267 de 2022 que sostiene que "la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos

Luego el formador evalúa que *“El fragmento de texto subrayado, hace referencia a”*:

La clave correcta para la Escuela Judicial correspondió a aquellos derechos humanos fundamentales en que se debe sustentarla normativa sobre justicia predictiva.

La clave de respuesta marcada por el suscrito se refirió a la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales al aplicar una decisión robótica.

Sobre esta pregunta encontramos tanto la clave de respuesta marcada por La Escuela Judicial, como la escogida por el suscrito –aunque escritas diferentes- terminan siendo de igual contenido. Me explico.

El apartado subrayado del texto hace referencia a la regulación del fenómeno de la justicia predictiva y la decisión robótica, para lo cual esta regulación deberá atenerse tanto a los derechos fundamentales en que se debe sustentar esta normativa, como a la necesidad de proteger estos derechos fundamentales al momento de aplicar la regulación en la decisión robótica como componente de la justicia predictiva.

Nótese además que el texto original hace referencia a la preservación de algunos principios fundamentales previo a resaltar los derechos fundamentales que se busca proteger con la regulación de la justicia predictiva. Véase la siguiente imagen tomada del texto.

juego y que pueda garantizar un control adecuado sobre la adopción de decisiones robóticas.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó una resolución que contiene recomendaciones específicas, insistiendo en la adopción de normas que regulen el fenómeno que se está analizando¹³⁶. Se trata de la Resolución del 16 de febrero de 2017, titulada “Normas de Derecho civil sobre robótica”¹³⁷, cuya lectura refleja la situación actual de la ley en materia de robótica y que, en todo caso, deberá atenerse a la preservación de algunos principios fundamentales como la protección de la seguridad y la salud humana, al igual que la integridad y la dignidad de las personas, el respeto de la vida privada, de la autodeterminación y el principio de no discriminación, además de la protección de datos personales¹³⁸.

necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes”

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuestas escogida por mí y por La Escuela genera un grado de ambigüedad suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P271**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P271** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 23 (P275)

Respecto a esta pregunta respetuosamente solicito se me adicione el puntaje conforme la RESOLUCIÓN No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 que en su parte motiva dispuso:

“Durante el proceso de análisis posterior a la aplicación de la evaluación, se obtuvieron indicadores psicométricos para todos los ítems que componían la prueba. Como resultado del proceso, se detectaron alertas en los índices de discriminación, lo cual indicó posibles problemas en su capacidad para medir adecuadamente el rendimiento de los discentes. Estas preguntas fueron revisadas minuciosamente por un grupo de expertos, quienes determinaron que las preguntas P35, P50, P143 y P295 no cumplían con los estándares esperados de validez y confiabilidad, por lo que en un esfuerzo por mantener la equidad en la evaluación, se optó por imputar el acierto a todos los aspirantes en estas preguntas específicas. Adicionalmente, para la pregunta P275 se identifica como un caso tipo 2, alerta de doble clave por lo que optó por reconocer el punto a los discentes que hubieren contestado cualquiera de las opciones validas”.

Por lo cual solicito se me adicione un total de **1,25 puntos** a mi puntaje parcial.

Pregunta 28 (P280)

Como quiera en la respuesta masiva del 16 de julio de 2024 comunicada por la Unión Temporal Formación Judicial 2019, se imputaron aciertos parciales a las preguntas del criterio de evaluación Taller, respetuosamente solicito que en aplicación del principio de igualdad se me imputen los aciertos parciales en las preguntas de control de lectura que así lo permitan.

10. la calificación de los componentes de la prueba. Sírvanse informar, sí o no, si, en el marco de las actividades cuyos ítems incluían más de un espacio de respuesta, se imputaron aciertos parciales.

Sí se imputaron aciertos parciales.

En este caso la clave de respuesta correcta para la Escuela Judicial correspondió a las conclusiones 2 y 3, y las marcadas por mí a las conclusiones 2 y 4, en tal sentido acerté parcialmente al marcar la conclusión número dos, en tal sentido solicito se me conceda como válida parcialmente, y su valor equivalente a **0,625 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Pregunta 30 (P282)

Esta pregunta cumple con el Sistema de Evaluación Académica por ser un control de lectura que requiere el análisis del discente para llegar a una respuesta plausible. Empero la clave correcta de respuesta escogida por el formador es errónea, como paso a explicar.

El enunciado refiere a que; *“en 2017 Chacón y otros (2017) realizaron un estudio sobre inclusión digital como derecho fundamental en Colombia, apartes de los resultados que comparten, indican que la inclusión digital cumple los criterios exigidos por la doctrina y la jurisprudencia constitucional colombiana para ser considerado un derecho fundamental, de forma tal que en este momento histórico puede reclamarse no solo su reconocimiento sino también su efectividad, mediante la acción de tutela. Consideran como prioridad, además, que desde la academia se propicien espacios de discusión sobre la consagración de la inclusión digital como derecho para que empiece a difundirse entre la población el reconocimiento de la necesidad de acceder y usar las TIC en condiciones de universalidad y calidad, pues desde allí se puede suscitar un movimiento social en pro del ejercicio efectivo de este derecho”*⁹⁵

Luego el formador evalúa que de acuerdo con “el texto citado”, se pueden concluir todas las premisas siguientes, **EXCEPTO**, es decir nos pide básicamente que del texto citado en antelación seleccionemos las premisas que **NO** se pueden concluir:

La clave correcta para la Escuela Judicial correspondió a que del texto **NO** se podían concluir las siguientes dos premisas: i) *que la acción de tutela puede ser un mecanismo para hacer efectivo el derecho universal a la inclusión digital* y ii) *que la promoción de la inclusión digital propone movimientos sociales que respalden su efectividad y universalidad*. Conclusión que

⁹⁵ Me acojo al criterio expuesto en la Sentencia SU-267 de 2022 que sostiene que “la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes”

no resulta acertada si observamos los apartados resaltados y en negrilla que se relacionan en el anunciado de la pregunta, puesto que estas dos premisas sí se concluyen del texto.

Ahora, la clave de respuesta marcada por el suscrito se refirió a que del texto **NO** se podían concluir las siguientes dos premisas: i) que *la inclusión digital se considera un derecho fundamental debido a su impacto en la economía digital* puesto que en ningún apartado se refiere a la economía digital y ii) que *la acción de tutela facilita el acceso a la inclusión digital como derecho legalmente positivizado*, idea contraria al postulado del texto pues la protección de la inclusión digital es producto del desarrollo jurisprudencial.

Este error en la clave de respuestas escogida por La Escuela genera un grado de ambigüedad suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P282**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P282** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 32 (P284)

Esta pregunta cumple con el Sistema de Evaluación Académica por ser un control de lectura que requiere el análisis del discente para llegar a una respuesta plausible. Empero las claves de respuesta son ambiguas, como paso a explicar.

El enunciado refiere a un experto en tecnología que hace referencia al nuevo sistema de justicia en línea colombiano. En el que relata lo siguiente “*antes que nada, es necesario definir qué significa “**modelo de justicia en línea**”. Éste hace referencia a esa nueva forma de relación entre los operadores de justicia y el ciudadano, desarrollada a partir de las nuevas herramientas automatizadas y sistematizadas, como lo advierten expertos informáticos del mundo. **Pero este modelo, además de inversión en tecnología, requiere presupuesto suficiente para adecuar la infraestructura física, los procesos y procedimientos, así como capacitar el talento humano,** enfrentar el reto de adoptar el sistema oral aunado a la búsqueda del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la justicia*”.⁹⁶

⁹⁶ Me acojo al criterio expuesto en la Sentencia SU-267 de 2022 que sostiene que “la reserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener los elementos

Luego el formador evalúa que, según lo explicado por el experto, la implementación efectiva de “la justicia en línea” será completa, si se:

La clave correcta para la Escuela Judicial correspondió a si se apoya en un presupuesto centrado en la tecnología y en la infraestructura, se optimizan procesos y procedimientos, así como en formación del talento humano.

La clave de respuesta marcada por el suscrito se refirió a si se invierte en herramientas tecnológicas junto con la actualización de la infraestructura física y la capacitación de los operadores de justicia y el personal administrativo.

Sobre esta pregunta encontramos tanto la clave de respuesta marcada por La Escuela Judicial, como la escogida por el suscrito –aunque escritas diferentes- terminan siendo de igual contenido. Me explico.

El experto hipotético en tecnología refiere que el modelo justicia en línea requiere además de: i) inversión en tecnología, que básicamente se puede deducir como inversión en herramientas tecnológicas, ii) presupuesto suficiente para adecuar la infraestructura física, que básicamente se puede deducir con inversión y actualización de la infraestructura física, y iii) capacitación del talento humano, que es lo mismo que capacitar a los operadores de justicia y el personal administrativo. Como se puede observar la clave por mí marcada cumple como acierto del cuestionamiento del mismo modo la clave escogida por el evaluador.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuestas escogida por mí y por La Escuela genera un grado de ambigüedad suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P284**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P284** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mí erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL O DE CASOS

necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes”

Pregunta 35 (P287)

Respecto a esta pregunta, si bien cumple con el estándar de análisis jurisprudencial o de casos, pues se plantea un caso que impone el análisis del discente, lo cierto es que hay dos claves de respuesta ambiguas que hacen que se pierdan los criterios de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica, veamos.

La pregunta cuestiona el caso de un despacho que adoptó el sistema de audiencias remotas y durante un juicio se presentó un incidente, se explicó que la audiencia se realizó mediante una plataforma de videoconferencias para permitir la participación de testigos y abogados que se encontraban en distintas regiones. Durante la diligencia se experimentaron problemas técnicos, incluyendo inestabilidad en la conexión a internet y fallos del software de videoconferencia, estos problemas causaron interrupciones en la audiencia y dificultaron la comunicación entre las partes y el juez. Adicionalmente un testigo manifestó dificultades de acceso tecnológico desde su lugar de origen.

Ante el caso, el evaluador cuestionó sobre la principal razón que afectó la efectividad y la eficiencia de la audiencia.

La clave correcta para La Escuela Judicial correspondió a la inestabilidad en la conexión a internet y los fallos en el software.

La clave de respuesta escogida por el suscrito correspondió a los problemas técnicos que afectaron la comunicación clara entre las partes y el juez.

Entonces, si acudimos al caso planteado y a su coherencia y sentido, podemos observar con claridad que existe una ambigüedad o doble clave correcta entre la escogida por el formador y la marcada por mí en calidad de discente, según paso a explicar.

En el caso bajo análisis tenemos que la audiencia hipotética se realizó mediante una plataforma de videoconferencia y que según el ejemplo durante la diligencia se experimentaron problemas técnicos (género), los cuales se determinaron en dos especies; la primera, conexiones de internet inestables; y la segunda, fallos en el software de videoconferencias. Así mismo, el planteamiento indica que “*Estos problemas*” -la inestabilidad en la conexión y el fallo del software- causaron como resultado interrupciones frecuentes y cito “*dificultando la comunicación clara y efectiva entre las partes y el juez*”. Como elemento distractor La Escuela Judicial adicionó que además de los problemas técnicos un testigo tuvo dificultades de acceso tecnológico en su lugar de origen.

De modo que, si los dos problemas técnicos descritos en el caso referidos como la inestabilidad en la conexión y el fallo del software directamente dificultaron la comunicación clara y efectiva (sinónimo de eficiencia) entre las partes y el juez, resulta lógico y acertado deducir que la principal razón que afectó la efectividad de la audiencia precisamente correspondió a los problemas técnicos que dificultaron la comunicación entre las partes y el juez, razón más que suficiente para advertir que la clave por mí marcada también es válida tal como la seleccionada por el formador, generándose en el caso una doble clave de respuesta correcta.

Nótese que la respuesta ofrecida como correcta por el evaluador refiere a la inestabilidad de la conexión a internet y los fallos en el software que según el caso constituyen los “problemas técnicos” que dificultaron la comunicación, lo que es indicativo que las dos claves de respuesta en discusión terminan siendo iguales en su sentido.

En tal sentido y ante la latente ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P287** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

TALLER

Pregunta 37 (P289)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el **discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa** con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la **construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones**.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P289** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 37 del programa de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones tenía como clave correcta un apartado literal de la lectura obligatoria “RAMA JUDICIAL. Anexo 1: Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial PETD 2021-2025 [en línea]. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2021. pp. 1-28⁹⁷” más exactamente la página 6 como se describe en la imagen que sigue.

A lo largo de los últimos años, la Rama Judicial ha avanzado, desde distintas aristas, hacia la optimización interna de la gestión judicial, la generación y análisis de información estadística para la toma de decisiones, así como del acceso y servicio al ciudadano, a partir del uso de la tecnología. Así las cosas, a hoy contamos con importantes avances e insumos, que servirán para seguir materializando el objetivo de alcanzar una justicia moderna y transparente.

⁹⁷ <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2339481/48916557/Anexo1Acuerdo>

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*avanzado, optimización y transparente*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del párrafo incluyó las palabras “*equitativa, mejora y desarrollado*” como distractores. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el resumen y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P289** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad y no en 6,67 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 2/3 del ítem en cuestión.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta **P289** puesto que erré al intercambiar la palabra transparente con equitativa y si se observa con atención basta leer detenidamente la oración transcrita literalmente por el formador para entender que la oración “*Así las cosas, a hoy contamos con importantes avances e insumos, que servirán para seguir materializando el objetivo de alcanzar una justicia moderna y transparente*” y la oración “*Así las cosas, a hoy contamos con importantes avances e insumos, que servirán para seguir materializando el objetivo de alcanzar una justicia moderna y equitativa*” cuentan con el mismo sentido y coherencia, puesto que si analizamos la totalidad del texto “Plan estratégico de transformación de la Rama Judicial PETD 2021-2025” respecto a los objetivos del plan estratégico podemos encontrar el punto 5 de la lectura denominado Plan estratégico de transformación de la Rama Judicial PETD 2021-2025 podemos evidenciar el apartado del proyecto de Inversión de Transformación Digital de la Rama Judicial el cual cuenta con una nota al pie en la que se describe que el PETD conducirá a la justicia colombiana a un cambio

profundo cuyo paradigma será la *justicia en línea*, adaptando un modelo operacional en el que la justicia será accesible al ciudadano, más inmediata, más transparente y **equitativa**



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO 1
Plan Estratégico de Transformación
Digital de la Rama Judicial
PETD 2021-2025

5. Alcance del PETD 2021-2025

El nuevo PETD de la Rama Judicial será el instrumento que contiene la estrategia, para los próximos años, en materia de transformación digital en la gestión digital, a través del cual se materializa la formulación desde la planeación estratégica, del Plan de Justicia Digital de que trata el Artículo 103 del Código General del Proceso y, cuya ejecución se desarrollará principalmente a través del *Proyecto de Inversión de Transformación Digital de la Rama Judicial*¹⁷.

¹⁷ El *Proyecto de Inversión de Transformación Digital de la Rama Judicial*, que busca operativizar al PETD, surge como una respuesta a la imperiosa necesidad que tiene la justicia de acercarse al ciudadano y de hacerlo con las mejores herramientas que existen hoy en día para lograr ese propósito, as Tecnologías de la Información (TI). Este proyecto, conducirá a la justicia colombiana a un cambio profundo cuyo paradigma será la *justicia en línea*, adaptando un nuevo modelo operacional en el que la *justicia será más accesible al ciudadano, más inmediata, más transparente y equitativa*.

Con lo anterior, con facilidad se puede evidenciar que la equidad también es un objetivo del PETD, razón por la cual la clave de respuesta marcada por mí también resulta correcta.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P289** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida en su totalidad, y los **3,33 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 38 (P290)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística

de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P290** en realidad es un control de lectura y peor aún, un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 38 del programa de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones tenía como clave correcta un apartado literal de la lectura obligatoria “RAMA JUDICIAL. Anexo 1: Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial PETD 2021-2025 [en línea]. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2021. pp. 1-28⁹⁸” más exactamente la página 13 como se describe en la imagen que sigue.

⁹⁸ <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2339481/48916557/Anexo1Acuerdo>

Este pilar estratégico comprende el conjunto de proyectos dirigidos a fortalecer y mejorar el servicio de la administración de justicia en el país, a través del impulso de la innovación, el uso de la tecnología y la ciencia de datos por medio de herramientas disruptivas. En ese sentido, este pilar, es considerado como un componente que, con fundamento en la generación de valor público, busca resolver necesidades reales en materia de justicia, como herramienta para hacer más eficiente, moderno y transparente el servicio, siendo una de sus orientaciones el desarrollo del expediente electrónico.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*innovación, ciencia y eficiente*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del párrafo incluyó las palabras “*gestión, modernización y transparente*” como distractores. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el resumen y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P290** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad y no en 3,33 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 1/3 del ítem en cuestión.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta **P290** puesto que erré al intercambiar la palabra transparente con equitativa y si se observa con atención basta leer detenidamente la oración trascrita literalmente por el formador para entender que el apartado “*este pilar estratégico comprende el conjunto de proyectos dirigidos a fortalecer y mejorar el servicio de la*

administración de justicia en el país, a través del impulso de la innovación, el uso de la tecnología y la ciencia de datos por medio de herramientas disruptivas” y la oración “este pilar estratégico comprende el conjunto de proyectos dirigidos a fortalecer y mejorar el servicio de la administración de justicia en el país, a través del impulso de la gestión, el uso de la tecnología y la innovación de datos por medio de herramientas disruptivas” cuentan con el mismo sentido y coherencia, puesto que si analizamos; por un lado, que los proyectos dirigidos a fortalecer y mejorar el servicio de la administración de justicia en el país se realiza a través de tres conceptos a saber: la innovación, el uso de la tecnología y ciencia de datos, por lo que marqué -aunque no en orden- el concepto de innovación, razón por la cual sí esta acertada la palabra innovación dentro del sentido y coherencia del texto, aunque no de manera literal en el orden deseado por el evaluador; por otro lado, la ciencia de datos es un concepto revolucionario que ha revolucionado e innovado el intercambio de información, por lo que ciencia de datos es un concepto de desarrollo e innovación.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P290** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida en su totalidad, y los **6,67 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 40 (P292)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO**

en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P292** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 40 del módulo de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones tenía como clave correcta varios apartados literales del texto obligatorio “RAMA JUDICIAL. Anexo 1: Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial PETD 2021-2025 [en línea]. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2021. pp. 1-28⁹⁹” más exactamente la página 13 como se describe y resalta en la imagen que sigue.

⁹⁹ <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2339481/48916557/Anexo1Acuerdo>

7. Pilares del PETD 2021-2025

1. *Servicios de Justicia centrados en el ciudadano.*

- Mejora continua en la interacción con los ciudadanos y en la experiencia en el uso de los servicios de justicia.

2. *Gestión Judicial Eficiente.*

- Incidencia en la transformación del modelo de servicios de operación.

3. *Control y Transparencia.*

- Optimización de elementos y mecanismos que promuevan e impulsen un enfoque de prevención de riesgos, de información abierta y de control.

4. *Fortaleza y capacidades de la Rama Judicial.*

- Compromiso, responsabilidad, participación y adecuada gobernanza del proceso. Formación digital y fortalecimiento de la capacidad institucional, como parte de la transformación de las personas y de la organización

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente varios apartados resaltados en azul para que los discentes seleccionaran la definición literal de cada uno de los conceptos pedidos, se itera la intención del ítem **P292** no requería la construcción de conocimiento alguno, sino que básicamente para acertar se pedía que la memoria recordara exactamente la definición de los conceptos y no su contenido. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P292** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad no en 5 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 1/2 del ítem en cuestión.

Pregunta 41 (P293)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el **discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa** con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la **construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.**

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P293** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 41 del módulo de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones tenía como clave correcta varios apartados literales del texto obligatorio “BATELLI, Ettore. La decisión robótica: algoritmos, interpretación y justicia predictiva. En: Revista de Derecho Privado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia [en línea]. 40, enero-junio 2021, pp. 45-86. [Consultado: 7 de abril de 2021]. Disponible en <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/6919>” inclusive algunos apartados literales de las notas de pie de página, lo que intensifica con mayor entidad el

componente memorístico que buscaba el evaluador, como se describe y resalta en las imágenes que siguen.

Página 47

una norma puede convertirse en injusticia”. Así las cosas, preguntarnos si se puede reducir el derecho viviente –es decir, garantizar justicia en cada caso concreto– a la aplicación científica de un algoritmo parecería evidentemente nocivo, pero no es así.

Para brindar una respuesta a dicha pregunta, ante todo, es necesario interrogarnos sobre si el proceso de interpretación de las normas se puede traducir en un algoritmo³. Cabe resaltar que la expresión lingüístico-científica ‘algoritmo’ designa la capacidad de una máquina (propiamente un ordenador o un robot) de correlacionar grandes cantidades de información y de datos, todo ello según una fórmula determinada para finalmente dar el resultado previsto y requerido, así como ocurre en el cerebro humano.

Página 49

- 11 BICHI, R., “Intelligenza artificiale e diritto - intelligenza artificiale tra ‘calcolabilità’ del diritto e tutela dei diritti”, *Giur. it.*, 2019, 7, 1773.
- 12 CRISCI, S., “Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo”, *Foro Amministrativo*, 10, 1787.
- 13 DI SABATO, D., “Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale”, *Contr. Impr.*, 2017, 378.
- 14 Cuando se habla de “*machine learning*” se hace referencia a los varios mecanismos que permiten a una máquina inteligente mejorar las propias capacidades y rendimientos en el tiempo. La máquina, por lo tanto, será capaz de cumplir tareas específicas mejorando, mediante la experiencia, sus capacidades, respuestas y funciones. Distinto es el concepto de *Deep Learning*, que es un sistema de aprendizaje que, utilizando las estructuras de redes neurales, elabora grandes sets de datos y conduce a un resultado semejante al que podría alcanzar el hombre. A través de este sistema la máquina aprende con el ejemplo.

Página 50

II. Primeras reflexiones y perspectivas de investigación en el contexto jurídico italiano

La capacidad de procesar enormes cantidades de datos y conocimientos ha permitido la evolución de las herramientas de IA, capaces de utilizar, manipular y combinar mejor los *big data*¹⁵, que hoy en día representan la nueva frontera de aplicación de la IA, incluso en el ámbito del derecho¹⁶.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente varios apartados resaltados en azul para que los discentes seleccionaran la definición literal de cada uno de los conceptos pedidos, se itera la intención del ítem **P293** no requería la construcción de conocimiento alguno, sino que básicamente para acertar se pedía que la memoria recordara exactamente la definición de los conceptos y no su contenido.

Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P293** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad no en 5 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 1/2 del ítem en cuestión.

Pregunta 42 (P294)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P294** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 42 del módulo de Gestión Judicial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones tenía como clave correcta varios apartados literales del texto obligatorio “RAMA JUDICIAL. Anexo 1: Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial PETD 2021-2025 [en línea]. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2021. pp. 1-28¹⁰⁰” inclusive algunos apartados literales de las notas de pie de página, lo que intensifica con mayor entidad el componente memorístico que buscaba el evaluador, como se describe y resalta en las imágenes que siguen.

¹⁰⁰ <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2339481/48916557/Anexo1Acuerdo>

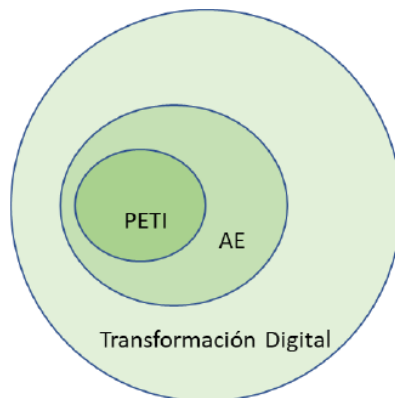


Ilustración 5. PET vs AE vs TD

El PET tiene un alcance muy centrado en tecnología, reflejando la arquitectura tecnológica que se debe alcanzar, para poder soportar efectivamente procesos mejorados y más eficientes operativamente.

De otra parte, la Arquitectura Empresarial (AE) está centrada en asegurar la alineación entre la tecnología y los objetivos de la empresa. De ahí que AE es la Arquitectura Tecnológica más la Arquitectura Organizacional. Su énfasis está en mejorar procesos y eficiencia operativa.

Página 17

principalmente a través del *Proyecto de Inversión de Transformación Digital de la Rama Judicial*¹⁷.

¹⁷ El *Proyecto de Inversión de Transformación Digital de la Rama Judicial*, que busca operativizar al PETD, surge como una respuesta a la imperiosa necesidad que tiene la justicia de acercarse al ciudadano y de hacerlo con las mejores herramientas que existen hoy en día para lograr ese propósito, as Tecnologías de la Información (TI). Este proyecto, conducirá a la justicia colombiana a un cambio profundo cuyo paradigma será la **justicia en línea**, adaptando un nuevo modelo operacional en el que la justicia será más accesible al ciudadano, más inmediata, más transparente y equitativa.

La transformación digital de la Rama Judicial, que implica el diseño, el desarrollo y el despliegue de una plataforma TI que integrará digitalmente a las instituciones de justicia, es mucho más que un salto tecnológico. Contempla, también, un alto componente de innovación en la gestión del sector, en su gobernanza, en la cultura organizacional y en la forma en que se impartirá y administrará la justicia.

El proyecto está centrado en los ciudadanos y en sus aspiraciones de justicia. Por ello su objetivo es dotar a la Rama Judicial de nuevas capacidades digitales, tecnológicas y organizacionales que le permitan innovar y ofrecer servicios más eficientes, expeditos, transparentes y de fácil acceso.

Lo que estamos construyendo es un camino para que los avances digitales y tecnológicos lleven a la Rama Judicial a una mejor funcionalidad y a responder a las expectativas de los millones de usuarios del sistema de impartición y administración de justicia.

El Proyecto de Transformación Digital de la Rama Judicial está integrado por cuatro componentes, que fueron definidos y responden a los pilares y objetivos establecidos para el PETD de la Rama Judicial: i) Servicios de justicia centrados en el ciudadano, ii) Gestión judicial eficiente, iii) Control y transparencia en la gestión judicial, iv) Fortaleza y capacidades de la Rama Judicial. Cada uno de estos componentes tiene elementos vinculantes que los convierten en una estructura armónica, en la que cada uno de sus pilares resulta imprescindible para el desarrollo de la estrategia y en el que ninguno de ellos podría dar resultados por sí solo.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente varios apartados resaltados en azul para que los discentes seleccionaran la definición literal de cada uno de los conceptos pedidos, se itera la intención del ítem **P294** no requería la construcción de conocimiento alguno, sino que básicamente para acertar se pedía que la memoria recordara exactamente la definición de los conceptos y no su contenido.

Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P294** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad no en 2,5 puntos en los que por obra y gracia de una memoria afortunada acerté 1/4 del ítem en cuestión.

PROGRAMA 8. FILOSOFÍA DEL DERECHO E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

CONTROL DE LECTURA

Pregunta 1 (P295)

Respecto a esta pregunta respetuosamente solicito se me adicione el puntaje conforme la RESOLUCIÓN No. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 que en su parte motiva dispuso:

“Durante el proceso de análisis posterior a la aplicación de la evaluación, se obtuvieron indicadores psicométricos para todos los ítems que componían la prueba. Como resultado del proceso, se detectaron alertas en los índices de discriminación, lo cual indicó posibles problemas en su capacidad para medir adecuadamente el rendimiento de los discentes. Estas preguntas fueron revisadas minuciosamente por un grupo de expertos, quienes determinaron que las preguntas P35, P50, P143 y P295 no cumplían con los estándares esperados de validez y confiabilidad, por lo que en un esfuerzo por mantener la equidad en la evaluación, se optó por imputar el acierto a todos los aspirantes en estas preguntas específicas. Adicionalmente, para la pregunta P275 se identifica como un caso tipo 2, alerta de doble clave por lo que optó por reconocer el punto a los discentes que hubieren contestado cualquiera de las opciones validas”.

Por lo cual solicito se me adicione un total de **1,25 puntos** a mi puntaje parcial.

Pregunta 13 (P307)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del control de lectura, que adelanto no buscaron demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, sino por el contrario se diseñaron para evaluar desde una concepción memorística, y no como debía ser desde una postura analítico-deductiva de razonamiento.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento

(página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta pregunta de control de lectura, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que acorde a lo establecido en el punto 4.2.3.1.1.1. del Documento Maestro que define los criterios para la evaluación del Subfase General. 1. Control de Lectura, que respecto al criterio evaluable “Control de lectura” define que se realizará bajo la técnica de prueba tipo Test.

Del control de lectura se establece que su ponderación se determinará por el número de respuestas correctas con un tope máximo de 40 puntos sobre 125 de cada programa. Adicionalmente, en torno a las competencias por evaluar se estimó que como competencias generales el criterio evaluativo sería respecto de las habilidades lectoras, de análisis y comprensión del discente, que asumo se refiere a comprensión lectora. En lo que atañe a las competencias específicas a evaluar estas corresponderían a las definidas en el *Syllabus*.

Ahora bien, en el Syllabus de cada módulo se especificaron individualmente los criterios de evaluación, y respecto al Control de Lectura se estableció expresamente que la evaluación con esta herramienta estaba *ponderada con 40 puntos de los 125 asignados a cada uno de los ocho (8) programas, en esta actividad evaluable, los/las discentes deberán responder a cuestionarios de pregunta cerrada opción múltiple con única respuesta (Tipo I) y opción múltiple con múltiple respuesta (Tipo IV), donde deberán demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, no solamente desde una concepción memorística, sino desde una postura analítico-deductiva (razonamiento).*

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco *el grado de apropiación de contenidos del programa y la comprensión lectora* respecto de la herramienta de evaluación control de lectura.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un test evaluativo que buscara el razonamiento y análisis lector optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo memorístico, y en este mal diseñado control de lectura exigió a los discentes recordar el tenor literal del contenido de las lecturas obligatorias, sus apartados exactos, nombres de capítulos o inclusive el contenido literal de pies de página, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el control de lectura propuesto en el ítem **P307** esto talmente memorístico, y no permite el ejercicio de razonamiento del discente al momento de escoger la clave de respuesta, paso a explicar.

La pregunta 13 del módulo de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional tenía enunciado un apartado literal de la lectura “COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-881/02. Expedientes T-542060 y T-602073. (17, octubre, 2002). M.P. Eduardo Montealegre Lynett [en línea]. En: Sala Séptima de revisión de la Corte Constitucional. Bogotá, D.C.: 2002. Leer las páginas 16 a la 33.” más exactamente de la página 23 como se describe en la imagen que sigue.

Síntesis de las líneas jurisprudenciales acerca del contenido material de la expresión normativa "dignidad humana".

16. A partir de esta serie de pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Sala concluye que el referente concreto de **la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual** (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), **unas condiciones de vida cualificadas** (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y **la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida)**.

Cómo se puede apreciar, el resaltado en azul corresponde al apartado del texto que La Escuela transcribió como enunciado de la pregunta, el apartado en verde corresponde al cuestionamiento del ítem y el apartado amarillo a la clave de respuesta correcta.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación control de lectura, optó por copiar literalmente un apartado de la lectura obligatoria, exigiendo al discente –para acertar la pregunta- el recordar bajo el imperio de la memoria lo que exactamente continuaba en el mismo párrafo, esto sin que se realizara un análisis o cuestionamiento racional.

Entonces uno se cuestiona. dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar la pregunta propuesta en el control de lectura, pues su clave correcta resultó un apartado literal del texto que no permite ningún tipo de análisis, sino que exige contestar lo literal sin necesidad de razonar en ello. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado escogido por el evaluador y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Del mismo modo, la pregunta propuesta por la Escuela no satisfizo la competencia específica del *Syllabus* del módulo en cuestión; “*Conocer y aplicar las ideas, escuelas y autores más relevantes de la filosofía del derecho, destacando su importancia en el razonamiento judicial, con miras a que las decisiones proferidas por quienes aplican el derecho, en calidad de jueces, sean acordes al conjunto normativo vigente, la dogmática jurídica y la deontología propia de la filosofía del derecho*”, puesto que no se destaca por ningún apartado su relación o importancia con el razonamiento judicial, puesto que de nada sirve saber de memoria el contenido material de la expresión normativa “dignidad humana” si dentro de la pregunta evaluadora no se exige un análisis acerca de su relación en el razonamiento judicial.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta Control de Lectura se determine que la pregunta **P307** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 20 (P314)

Esta pregunta cumple con el Sistema de Evaluación Académica por ser un control de lectura que requiere el análisis del discente para llegar a una respuesta plausible. Empero las claves de respuesta son ambiguas, como paso a explicar.

El enunciado refiere al concepto centrar del positivismo metodológico planteado por Hart, el cual describe que la moral no necesariamente determina la validez de las normas jurídicas (acorde al texto de Bonorino y Peña 2006, ver pregunta P231), luego del enunciado el formador cuestiona que para que un decisor judicial la capacidad de analizar críticamente las implicaciones éticas y sociales de las teorías del derecho, **según el positivismo metodológico de Hart, implica.**

La clave correcta para la Escuela Judicial correspondió a evaluar cómo las teorías del derecho influyen en la interpretación de las normas.

La clave de respuesta marcada por el suscrito se refirió a reconocer que las normas jurídicas siempre reflejan principios morales.

Sobre esta pregunta encontramos problemas en el cuestionamiento inicial pues; por un lado, se propone que el decisor debe analizar críticamente las implicaciones éticas y sociales de las teorías del derecho –a modo general- mientras que por el otro; se pregunta exclusivamente respecto de la comprensión del positivismo metodológico planteado por H.L.A. Hart. Entonces, se tiene que la clave marcada como correcta por el evaluador se torna genérica en relación con la específica pregunta dirigida exclusivamente al positivismo moderado, mientras que la marcada por el suscrito se torna más directamente relacionada con la pregunta, toda

vez que luego del análisis indicado resulta más acertado establecer que en torno al positivismo suave es posible entender que las normas jurídicas siempre reflejan principios morales aunque estos componentes de moralidad no determinen su validez, para tal efecto, la misma lectura “BONORINO, Pablo Raúl y PEÑA AYAZO, Jairo Iván. Filosofía del derecho 2.^a ed. Bogotá: Módulo de autoformación. Plan Nacional de Formación y Capacitación de la Rama Judicial. Bogotá. Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Universidad Nacional. 2006. Leer las páginas 5 a la 20, 26 a la 30 y 49 a la 62” expone lo siguiente en su página 53.

EL CONCEPTO DE DERECHO

sociedades de este tipo. El único propósito que cabe considerar compartido inequívocamente por todos los seres humanos es el de sobrevivir junto a sus semejantes, esto permite afirmar que las normas que prohíben el uso de la violencia y aquellas que constituyen la forma mínima de propiedad pueden considerarse contenidos morales mínimos del derecho. De la misma manera, del hecho de que el derecho debe valerse de reglas generales para regir la conducta de los hombres surge como contenido fundamental de todo ordenamiento jurídico el principio que prescribe solucionar de la misma manera los casos semejantes.

(3) Respecto de otras posibles relaciones entre derecho y moral. Es posible defender la distinción entre el derecho que es y el derecho que debe ser y al mismo tiempo afirmar:

(3.1.) que históricamente el desarrollo del derecho ha sido influido por las doctrinas morales,

(3.2.) que muchas normas jurídicas reflejan principios morales,

(3.3.) que en virtud de ciertas normas jurídicas pueden ser incorporados principios morales en un sistema jurídico y

(3.4.) que los jueces deben decidir a veces de acuerdo a valoraciones morales.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta que van más direccionadas a preguntar por los sistemas jurídicos y no las normas jurídicas particulares genera un grado de ambigüedad suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P314**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P314** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 27 (P321)

Esta pregunta cumple con el Sistema de Evaluación Académica por ser un control de lectura que requiere el análisis del discente para llegar a una respuesta plausible.

Ahora La pregunta 27 del módulo de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional tenía enunciado un apartado literal de la lectura “BONORINO, Pablo Raúl y PEÑA AYAZO, Jairo Iván. Filosofía del derecho 2.^a ed. Bogotá: Módulo de autoformación. Plan Nacional de Formación y Capacitación de la Rama Judicial. Bogotá. Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Universidad Nacional. 2006. Leer las páginas 5 a la 20, 26 a la 30 y 49 a la 62” más exactamente de la página 52 como se describe en la imagen que sigue.

(1) *Respecto de la relación entre las normas jurídicas particulares y la moral.* Del hecho de que una norma jurídica se considere contraria a ciertas pautas morales no puede inferirse que dicha norma no posea carácter jurídico, como tampoco del hecho de que una norma se considere moralmente deseable no puede inferirse que la misma sea una norma jurídica.

(2) *Respecto de la relación entre los sistemas jurídicos y la moral.* Los sistemas jurídicos poseen contenidos morales mínimos que vienen determinados por los propósitos vitales que cabe considerar compartidos por todos los hombres que viven en sociedad y por la forma que debe asumir un sistema jurídico para ser de utilidad en

52

De modo que el evaluador cuestionó que a partir de ese fragmento del texto el suscrito estableciera una explicación entre la relación del derecho y la moral.

La clave de respuesta correcta para el formador consistía en que *todos los sistemas jurídicos poseen un contenido moral mínimo proveniente de las ideas que imperan en la sociedad*

Mientras que la clave escogida por mí se refería a que *todas las normas que forman los sistemas jurídicos tienen un contenido moral, aunque NO todas las normas morales son jurídicas*.

Ahora, el apartado escogido por La Escuela hace referencia al positivismo metodológico planteado por Hart, empero no desde la discusión propia de la distinción entre derecho y moral, sino por la distinción entre derecho que es y el derecho que debe ser basado en siete (7) tesis recogidas por el autor; la primera, *respecto de la relación entre las normas jurídicas particulares y la moral* de donde se copió el enunciado de la pregunta y otras seis tesis que sustentan la teoría del positivismo suave o moderado.

Aquí es donde se consagra la ambigüedad, puesto que la respuesta correcta para el evaluador no hace parte de la explicación de la primera tesis, sino de la segunda, *respecto de la relación entre los sistemas jurídicos y la moral* por lo que al ser una tesis o argumento distinto planteado por el autor no puede ser una explicación lógica del argumento primero. Es decir que los sistemas jurídicos posean contenidos morales mínimos que provengan de las ideas que imperan en la sociedad termina siendo una explicación de la distinción entre derecho que es y derecho que debe ser desde la perspectiva de la relación entre los sistemas jurídicos y la moral y no una explicación de esa distinción desde la relación entre las normas particulares y la moral, que es un argumento o tesis diferente.

Súmese que la pregunta de la evaluación exige un análisis “*A partir del texto*” lo que hace que el discente realice una operación analítica del apartado señalado, que describe que el hecho de que una norma jurídica se considere contraria a pautas morales no hace inferir que dicha norma no posea un carácter jurídico, como tampoco se puede aducir que cuando una norma se considere moralmente deseable solo por ese hecho se infiera que sea una norma jurídica, lo que en otras palabras indica que todas las normas cuentan con un contenido moral (tesis central del positivismo suave) pero eso no significa que todas las normas de contenido moral sean necesariamente jurídicas.

Véase que este mismo planteamiento se consignó en la pregunta 20 del mismo módulo, en la que se registró que *el positivismo metodológico propuesto por Hart plantea la necesidad de distinguir entre el derecho que es y el derecho que debe ser argumentando que la moral no necesariamente determina la validez de las normas jurídicas*.

Esta ambigüedad en la pregunta y las claves de respuesta que van más direccionadas a preguntar por los sistemas jurídicos y no las normas jurídicas particulares genera un grado de ambigüedad suficiente para que se pierda la confiabilidad de la pregunta **P321**. Por estas razones solicito que se determine que la pregunta **P321** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica por ser ambigua y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos

sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Pregunta 31 (P325)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del control de lectura, que adelanto no buscaron demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, sino por el contrario se diseñaron para evaluar desde una concepción memorística, y no como debía ser desde una postura analítico-deductiva de razonamiento.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la concepción memorística del conocimiento (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta pregunta de control de lectura, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que acorde a lo establecido en el punto 4.2.3.1.1.1. del Documento Maestro que define los criterios para la evaluación del Subfase General. 1. Control de Lectura, que respecto al criterio evaluable “Control de lectura” define que se realizará bajo la técnica de prueba tipo Test.

Del control de lectura se establece que su ponderación se determinará por el número de respuestas correctas con un tope máximo de 40 puntos sobre 125 de cada programa. Adicionalmente, en torno a las competencias por evaluar se estimó que como competencias generales el criterio evaluativo sería respecto de las habilidades lectoras, de análisis y comprensión del discente, que asumo se refiere a comprensión lectora. En lo que atañe a las competencias específicas a evaluar estas corresponderían a las definidas en el *Syllabus*.

Ahora bien, en el Syllabus de cada módulo se especificaron individualmente los criterios de evaluación, y respecto al Control de Lectura se estableció expresamente que la evaluación con esta herramienta estaba *ponderada con 40 puntos de los 125 asignados a cada uno de los ocho (8) programas, en esta actividad evaluable, los/las discentes deberán responder a cuestionarios de pregunta cerrada opción múltiple con única respuesta (Tipo I) y opción múltiple con múltiple respuesta (Tipo IV), donde deberán demostrar el grado de apropiación de contenidos del programa, no solamente desde una concepción memorística, sino desde una postura analítico-deductiva (razonamiento).*

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco *el grado de apropiación de contenidos del programa y la comprensión lectora* respecto de la herramienta de evaluación control de lectura.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un test evaluativo que buscara el razonamiento y análisis lector optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo memorístico, y en este mal diseñado control de lectura exigió a los discentes recordar el tenor literal del contenido de las lecturas obligatorias, sus apartados exactos, nombres de capítulos o inclusive el contenido literal de pies de página, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el control de lectura propuesto en el ítem **P325** esto talmente memorístico, y no permite el ejercicio de razonamiento del discente al momento de escoger la clave de respuesta, paso a explicar.

La pregunta 31 del módulo de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional tenía enunciado un apartado literal de la lectura “BONORINO, Pablo Raúl y PEÑA AYAZO, Jairo Iván. Filosofía del derecho 2.^a ed. Bogotá: Módulo de autoformación. Plan Nacional de Formación y Capacitación de la Rama Judicial. Bogotá. Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Universidad Nacional. 2006. Leer las páginas 5 a la 20, 26 a la 30 y 49 a la 62” más exactamente de la página 55 como se describe en la imagen que sigue.

1. EL DEBATE CON HART

La idea central de Dworkin es que, además de las reglas, entendidas como pautas relativamente específicas de conducta, el derecho está formado por otro tipo de pautas a las que denomina “principios”. ¿Cuál es la diferencia entre una regla y un principio? Los principios jurídicos constituyen proposiciones morales que poseen un fundamento en actos de autoridades oficiales del pasado (como textos jurídicos o decisiones judiciales). Constituyen principios morales, pero no pertenecen a la moral crítica que los jueces encargados de aplicarlos consideren correcta. Se encuentran implícitos en los actos oficiales ocurridos en el pasado, pero no se identifican con ninguno de ellos en particular (Bix 1996: 234-35)¹⁷.

Cómo se puede apreciar, el resaltado en azul corresponde al apartado del texto que La Escuela transcribió como enunciado de la pregunta, el apartado en verde corresponde al cuestionamiento del ítem y el apartado amarillo a la clave de respuesta correcta.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación control de lectura, optó por copiar literalmente un apartado de la lectura obligatoria, exigiendo al discente –para acertar la pregunta- el recordar bajo el imperio de la memoria lo que exactamente continuaba en el mismo párrafo, esto sin que se realizara un análisis o cuestionamiento racional.

Entonces uno se cuestiona. dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar la pregunta propuesta en el control de lectura, pues su clave correcta resultó un apartado literal del texto que no permite ningún tipo de análisis, sino que exige contestar lo literal sin necesidad de razonar en ello. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado escogido por el evaluador y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Del mismo modo, la pregunta propuesta por la Escuela no satisfizo la competencia específica del *Syllabus* del módulo en cuestión; “*Conocer y aplicar las ideas, escuelas y autores más relevantes de la filosofía del derecho, destacando su importancia en el razonamiento judicial, con miras a que las decisiones proferidas por quienes aplican el derecho, en calidad de jueces, sean acordes al conjunto normativo vigente, la dogmática jurídica y la deontología propia de la filosofía del derecho*”, puesto que no se destaca por ningún apartado su relación o importancia con el razonamiento judicial, puesto que de nada sirve saber de memoria la concepción de Dworkin acerca de los principios morales si dentro de la pregunta evaluadora no se exige un análisis acerca de su relación en el razonamiento judicial.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta Control de Lectura se determine que la pregunta **P325** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **1,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL O DE CASOS

Pregunta 34 (P328)

En relación con esta pregunta lo primero que se debate es que no cumple con el criterio de la actividad objeto de evaluación denominada análisis jurisprudencial o de casos pues no busca que el discente ponga en práctica las propuestas metodológicas aprendidas en un determinado problema que será planteado por la Escuela Judicial. Esta actividad debe inexorablemente consistir en la resolución de problemas a partir del análisis jurisprudencial o planteamiento de caso que, según el tipo de programa, podrán ser jurídicos o no jurídicos, es decir busca que luego de analizar un caso o problema determinado el discente llegue a una conclusión atendiendo las habilidades y competencias adquiridas.

Lo cierto es que el cuestionamiento aparentemente se muestra como un caso de análisis, empero contrario a lo esperado no exige análisis alguno, sino que pretende que el discente escoja entre varias opciones para que determine cuál es la más aproximada al criterio del evaluador. Recuérdese que el modelo de pregunta de selección múltiple con única respuesta se caracteriza por permitir que los/las discentes lean, **analicen** y **saquen conclusiones** para luego seleccionar entre varias opciones de respuesta, cosa que no sucede en el caso objetado, pues a pesar del contenido del texto de la pregunta no es posible que el discente llegue a una conclusión efectiva que le otorgue la respuesta correcta, sino por el contrario lo que se pide es que memorísticamente se escoja la respuesta más aproximada al criterio del evaluador.

En síntesis, la pregunta pretende evaluar a modo de control de lectura el texto obligatorio "COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-818/ 05. Expediente: D-5521. (09, agosto,2005). M.P: Rodrigo Escobar Gil En: Sala Plena de la Corte Constitucional. Bogotá,

D.C.: 2005. Leer las páginas 9 a la 34.", pues la construcción de la pregunta refiere esencialmente no a un análisis a fin de llegar a una conclusión, sino por el contrario a recordar el contenido del apartado literal de la lectura obligatoria. Tal como se aprecia en la siguiente imagen:

12. En la teoría del derecho se reconocen a los principios y a las reglas como categorías de normas jurídicas^[64]. Ambas se suelen clasificar dentro de dicho concepto pues desde un punto de vista general (principio) o desde otro concreto y específico (regla) establecen aquello que es o debe ser. Así las cosas, tanto los principios como las reglas al tener vocación normativa se manifiestan en mandatos, permisiones o prohibiciones que delimitan y exigen un determinado comportamiento^[65]. Precisamente, en sentencia T-406 de 1992, se manifestó que:

Entonces, se tiene que el evaluador tomó este apartado literal del texto y cuestionó a los discentes de la siguiente manera: *Según el extracto presentado, el ordenamiento jurídico le brinda al juez mecanismos para dar respuesta a las necesidades que se presentan, por tanto, el fallador debe diferenciar correctamente* para lo cual otorgó cuatro opciones con una única respuesta correcta.

Aquí ya se puede notar la ambigüedad de la pregunta, pues no se colige con claridad si el evaluador pretende que se elija una respuesta según lo planteado en el texto, o si pretende que el discente analice cuál de las opciones es *clave* o cuente con un mayor estatus de *clave* frente a las otras. Ahora no conforme con la ambigüedad de las preguntas.

Por tanto, el primer argumento de cesura corresponde a que la pregunta **P328** es un control de lectura y no un caso de análisis, prueba reinante de ello es que cualquier persona sin discriminar no la podría diferenciar de las preguntas 54, 57 y 59 de este mismo módulo, las cuales cuentan con la misma estructura.

De modo que acorde a lo descrito solicito se determine que la pregunta **P328** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida la totalidad de la pregunta **P328**, en atención a que la clave de respuesta escogida

por mí tiene mayor grado de acierto que la propuesta por el formador como válida, como paso a explicar.

De la lectura del texto (Sentencia C-818 de 2005) se me cuestionó que acorde al extracto presentado y a modo de control de lectura debía diferenciar correctamente entre principios y reglas como mecanismos brindados al juez para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Para La Escuela la clave de respuesta correcta correspondía a que la diferencia residía en el principio como soporte de una conducta y la regla como el límite exigido en un comportamiento.

Para el suscrito la clave marcada y considerada correcta correspondió a que la diferencia reside en los principios como fundamentos del ordenamiento jurídico y la regla como imperativo categórico, respuesta que considero más acertada y válida que la escogida por el formador, argumento que sustento con lo consignado en el párrafo 13 de la misma sentencia en evaluación conforme la siguiente imagen

13. La principal diferencia entre ambos tipos de normas radica en la especificidad de sus órdenes o preceptos, pues mientras los *principios* son típicas normas de organización, mediante los cuales se unifica o estructura cada una de las instituciones jurídicas que dan fundamento o valor al derecho, a través de la condensación de valores éticos y de justicia; las *reglas* constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o hipotéticos que deben ser exactamente cumplidos en cuanto a lo que ellas exigen, sin importar el ámbito fáctico o jurídico en el que se producen.

De modo que al verificar el contenido del párrafo 13 de la Sentencia C-818 de 2005 se evidencia con claridad que la Corte Constitucional sostuvo que la principal diferencia entre ambos tipos de normas radica en la especificidad de sus órdenes o preceptos, pues mientras los principios son típicas normas de organización, mediante los cuales se unifica o estructura cada una de las instituciones jurídicas que dan fundamento o valor al derecho, a través de la condensación de valores éticos y de justicia; las reglas constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o hipotéticos que deben ser exactamente cumplidos en cuanto a lo que ellas exigen, sin importar el ámbito fáctico o jurídico en el que se producen.

Es decir, la misma Corte explicó que la principal diferencia entre principios y normas es que los principios son normas de organización que dan valor al derecho como fundamentos del ordenamiento jurídico, mientras que las reglas son normas de conducta que consagran imperativos categóricos, diferencia claramente influenciada por el Kantismo y las teorías modernas de Robert Alexius, razón por la cual mi respuesta es correcta y no la propuesta por el formador,

En esta pregunta debo resaltar que la Escuela Judicial no solo incumplió el Sistema de Evaluación Académica al plantear un examen de la fase general netamente memorístico y de control de lectura, sino que preocupa aún más que al momento de evaluar y designar las claves correctas pase desapercibido un hecho tan claro como que el siguiente párrafo del transcrito ofrecía la respuesta correcta, hecho particular que hace inferir con razonabilidad que quien diseñó las preguntas no se tomó el trabajo de tener en cuenta el contenido total de las lecturas, y solo escogió al azar apartados literales y de su contexto diseñó el cuestionamiento, así que con el mayor respeto uno se pregunta si los expertos evaluadores y técnicos psicométricos en realidad cuentan con la idoneidad para evaluar habilidades y competencias o si solo cumplieron con su obligación contractual a medias.

Por tanto, ante la subjetividad en la clave de respuesta que genera una ambigüedad entre la clave correcta y la marcada por mí solicito se determine que la pregunta **P328** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **6,25 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial.

Cabe resaltar que en caso de que esta censura prospere en este recurso y algún otro discente también sea beneficiado respetuosamente solicito se extiendan los efectos de la corrección en aplicación del principio de igualdad, del mismo modo si se presenta el caso que el argumento de otro discente derribe la confiabilidad de alguna de las preguntas por mi erradas, amablemente solicito se me extiendan los efectos del caso homólogo.

TALLER

Pregunta 37 (P331)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el **discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa** con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la **construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones**.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P331** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 37 del módulo de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional tenía como clave correcta el apartado literal de la lectura “COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-054 /16. Expediente: D-10888. (10, febrero, 2016). M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Sala Plena de la Corte Constitucional. Bogotá, D.C.: 2016. Leer las páginas 16 a la 31.” Como se describe en la imagen que sigue.

En ese sentido, ante comprensiones diferentes de una misma disposición el intérprete debe escoger una de ellas para ser aplicada en casos concretos. Sin embargo, si esta tarea es asumida en el marco del control de constitucionalidad, el parámetro de escogencia es la vigencia de la Constitución, por lo que la Corte, a partir de la función directiva de la Carta Política, define qué comprensiones de las normas resultan compatibles con la supremacía constitucional, proscribiendo aquellas que no cumplan con esa condición. A su vez, en caso que ninguna de ellas esté conforme a la Constitución, se infiere la inexequibilidad del enunciado normativo y su consecuente expulsión del orden jurídico. En otras palabras, conforme a la función directiva de la supremacía constitucional, la armonía con la Carta Política opera como árbitro entre dichas interpretaciones jurídicas divergentes, otorgándose con ello no solo plena eficacia de dicho principio, sino también seguridad jurídica, la racionalidad y la razonabilidad al orden jurídico en su conjunto.⁸

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*escoger, parámetro y conforme*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto incluyó las palabras “*criterio, concordante y decidir*”. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P331** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida -parcialmente- la pregunta **P331** puesto que erré al intercambiar la palabra criterio con parámetro y si se observa con atención las oraciones “*el parámetro de escogencia es la vigencia de la Constitución*” y “*el criterio de escogencia es la vigencia de la Constitución*” cuentan con el mismo sentido y coherencia, debido a que aun cuando las palabras criterio y parámetro no son sinónimos en sentido estricto, lo cierto es que en la Corte Constitucional sí

las usa indiscriminadamente para otorgar idéntico sentido en sus consideraciones, tal es el ejemplo de la Sentencia C-294 de 2021 en la cual la Corte Sostuvo:

Página 259

El antedicho plazo está plagado de incertidumbre, en tanto la reforma constitucional no contempla un término concreto en que deba llevarse a cabo la evaluación sobre el proceso de resocialización del penado; así como tampoco establece unos **parámetros** o **criterios** claros y específicos orientados a que el interno los cumpla para obtener su libertad. En estas condiciones, el infractor penal no tiene una expectativa real de recuperar su libertad.

Así como también la Corte Constitucional ha llegado inclusive a reemplazar la palabra criterio con parámetro para efectos únicamente gramaticales, esto sin que se pierda el sentido del texto, como se puede observar en el pie de página 651 de la Sentencia C-674 de 2017

Página 187

Por último, de igual manera y en el tercer debate, se introdujo la expresión: *“También regularán los **parámetros**⁶⁵⁰ que deberán ser utilizados por la JEP para evaluar si se han presentado o no incumplimientos de las condiciones del sistema, así como la forma de graduar en cada caso las consecuencias que tales incumplimientos acarreen, siempre dentro de los parámetros*

⁶⁵⁰ Textualmente, en la Gaceta del Congreso No. 30 de 2017, p. 24, se afirma que: “(...) se acogen las sugerencias de los ciudadanos presentadas en la audiencia pública y reforzadas por los representantes Lozano y Navas, de esta forma: se deja claro que las normas procesales al incluir la participación de las víctimas, tendrán que tener en cuenta los estándares nacionales e internacionales”.

⁶⁵¹ La palabra “parámetros” fue introducida en el cuarto debate en reemplazo de la expresión original utilizada que era “criterios”. Como se observa se trató de un ajuste de carácter gramatical, que en nada afecta la esencialidad de lo dispuesto en la norma.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que, ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P331** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se

opte por imputar el acierto en todos sus apartados. se me conceda como válida, y los **3,33 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 38 (P332)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el **discente realice una capacitación intensiva y práctica del**

programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P332** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 38 del módulo de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional tenía como clave correcta el apartado literal de la lectura “COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-054 /16. Expediente: D-10888. (10, febrero, 2016). M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Sala Plena de la Corte Constitucional. Bogotá, D.C.: 2016. Leer las páginas 16 a la 31.” Como se describe en la imagen que sigue.

Estos principios esenciales, junto con otros, cumplen una función central frente al sistema de fuentes: otorgan unidad de sentido a las diferentes normas jurídicas, las cuales se tornan en instrumentos para la garantía concreta de los principios fundantes del Estado Constitucional. En otras palabras, los principios en comento son el fin último de la aplicación del derecho y la interpretación jurídica subyacente. Las normas jurídicas, así comprendidas, deben actuar coordinada y unívocamente, a fin de mantener la vigencia de los principios constitucionales. De lo que se trata, en últimas, es que la interpretación de las normas responda a una suerte de coherencia interna del orden jurídico en su conjunto, vinculado a la realización de los principios centrales del Estado Social y Democrático de Derecho.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*aplicación, interpretación y centrales*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto incluyó las palabras “*sociales, finalidad y consolidación*”. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P333** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida -parcialmente- la pregunta **P333** puesto que erré al intercambiar el orden de las palabras *aplicación, interpretación y centrales* y si se observa con atención, aún con las palabras escogidas por mí al momento de marcar las respuestas el apartado literal del texto no pierde sentido, puesto que al rellenar “*los principios en comento son el fin último de la interpretación del derecho y la interpretación jurídica subyacente. Las normas jurídicas, así comprendidas, deben actuar coordinada y unívocamente, a fin de mantener la vigencia de los principios constitucionales. De lo que se trata, en últimas, es que la aplicación de las*

normas responda a una suerte de coherencia interna del orden jurídico en su conjunto, vinculado a la realización de los principios sociales del Estado Social y Democrático de Derecho.”

Esto por cuanto, aún con las palabras escogidas por mí, y que no son en el orden literal del texto, se puede comprender a plenitud el argumento de la Corte Constitucional, toda vez que resulta válido y coherente que la aplicación de las normas jurídicas se realice mediante criterios de interpretación judicial, pues de lo que se trata en últimas es que la interpretación o aplicación (palabras del mismo sentido o tenor) respondan a la coherencia interna del orden jurídico vinculado a la aplicación de principios sociales, ya que son estos principios sociales y no personales los que dan sentido al Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, los principios sociales son equivalentes a los principios centrales de nuestra forma de Estado.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que, ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P331** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados. se me conceda como válida, y los **10 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 39 (P333)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el **discente realice una capacitación intensiva y práctica del programa** con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la **construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones**.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P333** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 39 del módulo de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional tenía como clave correcta el apartado literal de la lectura “COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1287/ 01. Expediente: D-3549. (05, diciembre, 2001). M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En: Sala Plena de la Corte Constitucional. Bogotá, D.C.: 2001. Leer las páginas 10 a la 30.” Más exactamente en la página 18 como se describe en la imagen que sigue.

En lo que concierne a la noción de *valores constitucionales*, es posible apreciar un acuerdo en cuanto al contenido esencial de dicha noción en los autores que abordan el tema. En primer lugar la doctrina coincide en considerar que las normas que reconocen valores son de naturaleza abstracta e inconcreta; para algunos son normas que orientan la producción e interpretación de las demás normas, y que en tal condición fijan criterios de contenido para otras normas; para otros, las normas que reconocen *valores* al igual que las que consagran *principios*, determinan el contenido de otras normas, y aquéllas sólo se diferencian de éstas por su menor eficacia directa, aplicándose estrictamente en el momento de la interpretación. Lo cierto es que en todas las anteriores formulaciones subyace la idea de que las normas que reconocen valores condicionan las demás normas, y tienen un contenido abstracto y abierto, es decir, están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento.²⁰

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*valores, criterios y determinan*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto incluyó las palabras “*fundamentan, parámetros y principios*”. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P333** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida -parcialmente- la pregunta **P339** puesto que erré al intercambiar la palabra criterio con parámetro y si se observa con atención las oraciones “*el parámetro de escogencia es la vigencia de la Constitución*” y “*el criterio de escogencia es la vigencia de la Constitución*” cuentan con el mismo sentido y coherencia, debido a que aun cuando las palabras criterio y parámetro no son sinónimos en sentido estricto, lo cierto es que en la Corte Constitucional sí las usa indiscriminadamente para otorgar idéntico sentido en sus consideraciones, tal es el ejemplo de la Sentencia C-294 de 2021 en la cual la Corte Sostuvo:

El antedicho plazo está plagado de incertidumbre, en tanto la reforma constitucional no contempla un término concreto en que deba llevarse a cabo la evaluación sobre el proceso de resocialización del penado; así como tampoco establece unos **parámetros** o **criterios** claros y específicos orientados a que el interno los cumpla para obtener su libertad. En estas condiciones, el infractor penal no tiene una expectativa real de recuperar su libertad.

Así como también la Corte Constitucional ha llegado inclusive a reemplazar la palabra criterio con parámetro para efectos únicamente gramaticales, esto sin que se pierda el sentido del texto, como se puede observar en el pie de página 651 de la Sentencia C-674 de 2017

Por último, de igual manera y en el tercer debate, se introdujo la expresión: *“También regularán los **parámetros**⁶⁵¹ que deberán ser utilizados por la JEP para evaluar si se han presentado o no incumplimientos de las condiciones del sistema, así como la forma de graduar en cada caso las consecuencias que tales incumplimientos acarreen, siempre dentro de los parámetros*

⁶⁵⁰ Textualmente, en la Gaceta del Congreso No. 30 de 2017, p. 24, se afirma que: “(...) se acogen las sugerencias de los ciudadanos presentadas en la audiencia pública y reforzadas por los representantes Lozano y Navas, de esta forma: se deja claro que las normas procesales al incluir la participación de las víctimas, tendrán que tener en cuenta los estándares nacionales e internacionales”.

⁶⁵¹ La palabra “parámetros” fue introducida en el cuarto debate en reemplazo de la expresión original utilizada que era “criterios”. Como se observa se trató de un ajuste de carácter gramatical, que en nada afecta la esencialidad de lo dispuesto en la norma.

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

Por estas razones solicito que, ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P333** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se

opte por imputar el acierto en todos sus apartados. se me conceda como válida, y los **3,33 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Pregunta 42 (P336)

A esta pregunta, respetuosamente pido se tengan en cuenta los argumentos propuestos en el Argumento Segundo de este recurso, y especialmente lo referido a la concepción memorística de los planteamientos del taller, que adelanto, no es más que un control de lectura textual y de memoria.

Recordando el énfasis principal del argumento, se tiene que para aclarar a los concursantes el panorama el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el Acuerdo Pedagógico respecto del Sistema de Evaluación Académica y profirió el denominado **DOCUMENTO MAESTRO** en octubre de 2023 y que clarificó o mejor aún proveyó las reglas del Curso de Formación Judicial en torno a su evaluación.

Este documento representa vital importancia en esta línea argumentativa, puesto permite esclarecer cómo se modificaron e incumplieron las reglas de la evaluación de la Fase General y en su lugar la Escuela optó por realizar una evaluación netamente memorística y desconocedora de la finalidad del componente evaluativo. Veamos.

En la introducción del documento maestro la Escuela Judicial en su rol de formadora establece realiza una introspección respecto de las falencias de los modelos pedagógicos anteriores, para lo cual propone que el diseño formativo del IX Curso Judicial cuenta con un enfoque centrado en la formación por competencias, las estrategias metodológicas y la evaluación del aprendizaje.

Así la intencionalidad del Curso de Formación de Jueces tiene como enfoque una formación por competencias con la finalidad de superar la **concepción memorística del conocimiento** (página 13 del Documento Maestro) para en su lugar acentuarse en el diseño curricular y la evaluación del aprendizaje, proponiendo que:

“Las generalidades de las competencias integran los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores desde las dimensiones del ser, saber y el hacer, las cuales se definen desde los siguientes valores: la dimensión del ser (actitudes, disposiciones y valores), la dimensión del saber (conocimientos), y la dimensión del hacer (capacidades y habilidades).”

Pasando al segundo plano de la objeción de esta particular pregunta-taller, vemos que tampoco cumple con el diseño del Sistema Académico de Evaluación que en resumen es que la actividad Taller pretende que el **discente realice una capacitación intensiva y práctica del**

programa con un peso de 60 puntos sobre 125 del programa con el objetivo de Corroborar la adquisición de competencias en la construcción de documentos procesales, interpretación de los precedentes judiciales y argumentación oral de las decisiones.

Inclusive, el alejamiento de la concepción memorística fue claramente resaltado en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, en donde se consignó lo siguiente:

Para cada programa se desarrollaron temas y se plantearon didácticas de aprendizaje que incluyen el desarrollo de procesos mentales de orden superior que cimenten la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así como, enmarcados en el Modelo Pedagógico de la EJRLB, el método utilizado para evaluar a partir de las tres dimensiones es el indicado en el documento anteriormente mencionado, el cual describe:

El enfoque por competencias incorpora las competencias genéricas y específicas al diseño del currículo, como uno de sus elementos fundamentales. Esto significa un cambio en la estructura del currículo que va de aquellos centrados en contenidos a currículos centrados en el desarrollo de competencias.

De modo que al verificar el apartado anterior, en especial lo resaltado, se tiene que el enfoque por competencias persigue un elemento fundamental y es que se rompa el paradigma de educación clásica de evaluación centrada en el contenido, lo que no tiene significado distinto a que el curso persigue no formar memorísticamente sino por el contrario fomentar el desarrollo de habilidades, entre la que destaco, el análisis y construcción de conocimiento respecto de la herramienta de evaluación taller.

Sin embargo, y pese a la reiterada concepción del enfoque multidisciplinar y por competencias, lo cierto es que la Escuela incumplió el Acuerdo Pedagógico y en lugar de plantear un taller evaluativo optó por preguntar apartados centrados en el contenido de las lecturas obligatorias, a modo de control de lectura y en este mal llamado Taller exigió a los discentes el llenado de un texto para completar su tenor literal, lo que desconoce cualquier tipo de análisis por competencias.

Entonces, la primera objeción que se plantea es que el Taller propuesto en el ítem **P336** en realidad es un control de lectura y peor aún un control totalmente memorístico, paso a explicar.

La pregunta 42 del módulo de Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional tenía como clave correcta el apartado literal de la lectura “BONORINO, Pablo Raúl y PEÑA AYAZO, Jairo Iván. Filosofía del derecho 2.^a ed. Bogotá: Módulo de autoformación. Plan Nacional de Formación y Capacitación de la Rama Judicial. Bogotá. Consejo Superior de la

Judicatura – Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Universidad Nacional. 2006. Leer las páginas 5 a la 20, 26 a la 30 y 49 a la 62”, como se describe en la imagen que sigue.

Página 55

1. EL DEBATE CON HART

La idea central de Dworkin es que, además de las reglas, entendidas como pautas relativamente específicas de conducta, el derecho está formado por otro tipo de pautas a las que denomina “principios”. ¿Cuál es la diferencia entre una regla y un principio? Los principios jurídicos constituyen proposiciones morales que poseen un fundamento en actos de autoridades oficiales del pasado (como textos jurídicos o decisiones judiciales). Constituyen principios morales, pero no pertenecen a la moral crítica que los jueces encargados de aplicarlos consideren correcta. Se encuentran implícitos en los actos oficiales ocurridos en el pasado, pero no se identifican con ninguno de ellos en particular (Bix 1996: 234-35)¹⁷.

Por lo que evidentemente el formador desconociendo el Sistema de Evaluación Académica y la finalidad de la herramienta de evaluación taller, optó por copiar literalmente el apartado resaltado en azul y eliminó las palabras; “*proposiciones morales, decisiones judiciales y la moral crítica*” para que los discentes rellenaran los conceptos faltantes y le otorgaran sentido al texto, para ello además de las palabras correctas y literales del texto incluyó la palabra “*interpretaciones*”. Entonces uno se cuestiona dónde está el análisis por competencias y habilidades de formación, pues basta con tener una memoria prodigiosa para acertar el mal llamado taller. En tanto, se concluye que la herramienta evaluativa no fue planteada conforme el querer del Acuerdo Pedagógico y el Documento Maestro, sino que por el contrario resultó siendo un claro control de lectura memorístico del texto, pues bastaba con leer el apartado y memorizarlo para aprobar la evaluación incluso sin leer el texto obligatorio.

Adviértase que para esta pregunta de control de lectura mal denominada taller el evaluador ni siquiera solicitó rellenar las palabras restantes para otorgar sentido al párrafo, sino que para ahondar en el control de lectura memorístico requirió a los discentes para que **arrastrara las palabras al lugar correcto**, entonces no se entiende como se pueda justificar que el ítem 336 no sea un control de lectura textual y memorístico, puesto que al no permitir un rango de análisis o de comparación exige que el discente acierte la palabra exacta del texto transcrito por La Escuela. Dígase que lo que se pide en la evaluación defectuosa es que literalmente el estudiante en uso de su memoria arrastre las palabras exactas para que el texto se torne idéntico al contenido de lectura, lo que es injustificable acorde al diseño del Sistema de Evaluación Académica.

Por estas razones solicito que ante el incumplimiento del Sistema Académico de Evaluación y su finalidad no memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la

herramienta TALLER se determine que la pregunta **P336** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados y se me conceda como válida, y su valor equivalente a **10 puntos** sea adicionado a mi puntaje parcial en su totalidad.

Subsidiariamente, y en caso de que no prospere la objeción principal, solicito se me tenga como válida -parcialmente- la pregunta **P336** puesto que erré al intercambiar las palabras proposiciones morales con interpretaciones y si se observa con atención, aún con la palabra escogidas por mí al momento de marcar las respuestas el apartado literal del texto no pierde sentido, puesto que al rellenar *“Los principios jurídicos constituyen interpretaciones que poseen un fundamento en actos de autoridades oficiales del pasado (como textos jurídicos o decisiones judiciales).”*

Esto por cuanto, aún con la palabra escogida por mí se puede comprender a plenitud el argumento del autor, toda vez que dentro del mismo texto evaluado se describe por parte del autor que para Dworkin respecto a los principios jurídicos *“El juez al decidir no debe crear derechos, sino confirmar o denegar los derechos que los individuos poseían antes de su decisión. Los principios constituyen los materiales que permiten al juez buscar las respuestas correctas en los casos difíciles (página 47 del texto evaluado)”* por lo que al momento de decidir los casos difíciles el juez debe aplicar la llamada “tesis de la respuesta correcta” e **interpretar** las posiciones de las partes haciendo uso de los denominados principios jurídicos, véase la imagen siguiente:

Página 58

correcta será aquella que resulte apoyada con los mejores fundamentos, teniendo en cuenta los argumentos formulados y el conocimiento limitado del ordenamiento jurídico que un ser humano puede tener. Por eso se entiende que para Dworkin la única forma de apoyar la plausibilidad de la llamada “tesis de la respuesta correcta” es mostrar cómo en ciertos casos difíciles se puede considerar mejor fundada una de las distintas interpretaciones en pugna. Esto es lo que Dworkin ha intentado hacer a lo largo de toda su producción cada vez que ha participado en distintas controversias jurídicas suscitadas en los EE.UU. e Inglaterra (ver, por ejemplo, las discusiones en torno al aborto y la eutanasia en Dworkin 1994).

Cabe recordar que en la respuesta masiva del 15 de julio de 2024 emitida por el Representante legal de la UT Formación Judicial 2019, se consignó lo siguiente:

Por otra parte, en el caso hipotético de existir una pregunta que pudiera tener opciones que conserven la coherencia y el sentido del texto, se constituiría una alerta de doble clave. Esto debe ser evaluado en concreto, y si se confirma la correspondencia del sentido, se tendría como respuesta correcta.

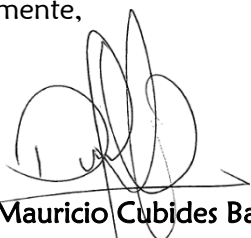
Por estas razones solicito que, ante la ambigüedad en el texto y su exigencia memorística, así como el incumplimiento de la metodología de diseño de la herramienta TALLER se determine que la pregunta **P336** no cumple con los estándares de validez y confiabilidad establecidos en el Sistema de Evaluación Académica y en aras de mantener la equidad en la evaluación se opte por imputar el acierto en todos sus apartados. se me conceda como válida, y los **3,33 puntos** calificados erróneamente sea adicionados a mi puntaje parcial.

Por todo lo anteriormente expuesto solicito:

PRETENSIÓN ARGUMENTO 3.

Reponer el contenido de la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024 “*por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX curso de Formación Judicial Inicial*” y su anexo, y en su lugar imputar el acierto parcial o total de las preguntas que he censurado, luego de ello proceder a recalificar la nota obtenida por el suscrito mediante acto administrativo individual en un puntaje mayor a 800 puntos.

Atentamente,



Diego Mauricio Cubides Barrero

C.C. No. 1.072.648.521 de Chía (Cundinamarca)

diego.cubides8@gmail.com

3132156134